

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**SALA DE JUSTICIA Y PAZ**

**Magistrada Ponente** : Uldi Teresa Jiménez López  
**Radicado** : 110012252000201400070  
**Postulado** : Hébert Veloza García. Otros  
**Asunto** : Solicitud de sentencia anticipada  
**Decisión** : **Niega anticipada. Condena**

**Aprobado en acta 08**

Bogotá D. C., agosto veintiséis (26) de dos mil quince (2015)

**OBJETO DE DECISION**

La Sala procede a pronunciarse sobre la solicitud de sentencia anticipada interpuesta por la Fiscalía 18 Delegada adscrita a la Unidad para la Justicia y la Paz de Cali, Valle del Cauca, con la finalidad de proferir sentencia parcial contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO, JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA, JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS, exintegrantes del Bloque Calima, en los términos señalados por el artículo 24 de la ley 975 de 2005.

**IDENTIDAD DE LOS POSTULADOS**

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 18 Delegada de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, acreditó la identificación e

individualización de los postulados que se enlistan a continuación. Valga aclarar que la mayoría de los postulados ya fueron condenados o les fue imputado el punible de concierto para delinquir agravado por la pertenencia al grupo armado ilegal, con excepción de MORELO PALACIOS, caso en el cual la Sala se abstendrá de realizar cualquier pronunciamiento o condena por dicho delito respecto de los postulados, pues lo contrario comportaría la vulneración del principio non bis in ídem que les asiste.

Así las cosas, el único postulado susceptible de ser condenado por la conducta constitutiva de concierto para delinquir agravado será el nombrado JOSE ALEJANDRO MORELO PALACIOS en caso de la demostración de responsabilidad.

Así las cosas, la identidad de los postulados es como se presenta a continuación, con indicación precisa de la condena e imputación por el delito de concierto para delinquir agravado:

**1.** HÉBERT VELOZA GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 7'843.301 de Cubarral, Meta, era conocido en la organización paramilitar con los alias de Carepollo, Mono Veloza, Hernán Hernández, Don Hernán y HH. Perteneció a los Bloques Bananero y Calima, de los cuales ejerció su representación al momento de la desmovilización, tal como consta en resolución 233 de noviembre 3 de 2004. En la actualidad se encuentra privado de la libertad en la Metropolitan Correctional Center de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, en virtud de extradición.

Se acreditó igualmente, que la desmovilización de VELOZA GARCÍA se realizó de manera colectiva con el Bloque Bananero el 25 de noviembre de 2004 y que la postulación data de agosto 15 de 2006. Por último, que la pertenencia a las estructuras armadas ilegales se dio durante el periodo 1994 a 2004, razón por la cual fue imputado y condenado por el delito de concierto para delinquir agravado en sentencia de octubre 30 de 2013 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá<sup>1</sup> con ponencia del

---

<sup>1</sup> Radicado 11-001-60-00 253-2006 810099

magistrado Eduardo Castellanos Roso, durante la totalidad del tiempo de pertenencia a la estructura armada ilegal.

**2.** JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70'926.208 de Anorí, Antioquia, recibió el sobrenombre de "El Fino" o "Don Alex" al interior de la organización criminal en la que se desempeñó como comandante financiero. Se desmovilizó de manera colectiva el 18 de diciembre de 2004 con los integrantes del Bloque Calima al cual perteneció durante toda la permanencia al grupo paramilitar. La Postulación data del 15 de febrero de 2009 y se acreditó también que ya le fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado en audiencia de mayo 14 y 15 de 2012 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por el período comprendido entre abril y octubre de 1997 y marzo de 2000 a diciembre 18 de 2004. Sin embargo, aún no ha sido condenado por esta jurisdicción por ninguno de los punibles que le fueron imputados, en concreto, por el de concierto para delinquir.

Actualmente se encuentra recluso en el Centro Penitenciario y Carcelario de Itagüí, Antioquia, a la espera de sentencia condenatoria por esta jurisdicción.

**3.** ELKIN CASARRUBIA POSADA identificado con cédula de ciudadanía No. 78'702.064 de Montería, Córdoba, fue conocido en la organización como "El Cura" o "Leonardo Antonio". Se desempeñó en el Bloque Calima como comandante militar y se desmovilizó de manera colectiva con éste grupo ilegal el 18 de diciembre de 2004. Fue postulado por el Gobierno Nacional a recibir los beneficios de la ley 975 de 2005 el 22 de diciembre de 2009 y, en la actualidad se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Itagüí, Antioquia.

Por último, se advierte que en actuación distinta a la que ocupa la atención de la Sala, se le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado en audiencia realizada entre el 24 de octubre y 3 de noviembre de 2011, con legalización de imputación por parte de uno de los magistrados con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, e

imposición de medida de aseguramiento empero, sin que hasta la fecha se haya proferido sentencia condenatoria.

**4.** JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71'480.209 de Puerto Triunfo, Antioquia, ejerció la función de Comandante del Frente Farallones entre el 2000 y el 2002, fecha en que fungió como comandante del Frente Cacique Calarcá y de donde se devolvió a ejercer la comandancia del Farallones con presencia en Cauca y Suroeste del Huila desde el 2002. Al interior de la organización se identificó con el alias de "Martín" y "Sancocho". Se desmovilizó en compañía de los demás integrantes del Bloque Calima el 18 de diciembre de 2004, y fue postulado por el Gobierno Nacional el 27 de febrero de 2007. La Fiscalía General de la Nación le imputó el punible de concierto para delinquir agravado en audiencia de mayo 14 y 15 de 2012 ante el magistrado de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y se le impuso medida de aseguramiento.

No obstante, a la fecha no ha sido proferida sentencia condenatoria por el punible de concierto para delinquir por esta especialidad.

**5.** JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA identificado con cédula de ciudadanía No. 17'260.398 de Cubarral, Meta, fue conocido en la organización paramilitar como "El Gato", "Pablo" e "Ignacio" se desempeñó como tercer comandante del Bloque Calima bajo las órdenes de VELOZA GARCÍA y CASARRUBIA POSADA entre los años 2000 y 2002. Posteriormente, de 2002 a 2003 fue comandante del Frente Pacífico y de 2003 a 2004 regresa al Bloque Bananero. Por lo tanto, de la información aportada por la Fiscalía se advierte que fue miembro del Bloque Calima y del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, desde febrero de 1995 y que su desmovilización se presentó colectivamente el 26 de noviembre de 2004 con éste último Bloque.

De igual modo, que la postulación se dio el 15 de agosto de 2006 y que fue cobijado con medida de aseguramiento, por virtud de la imputación del punible de concierto para delinquir agravado efectuada el 14 y 15 de mayo de 2012, en proceso distinto al que ocupa la atención de la Sala, por todo el período de permanencia al grupo ilegal, ante el magistrado con función de

control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá empero, de la que no se ha emitido sentencia condenatoria. Por último, que en la actualidad se encuentra afectado el derecho a la libertad en la Penitenciaría de Itagüí, Antioquia.

**6.** JANIER FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 10'345.980 de Miranda, Cauca, fue conocido en la organización criminal como "Boris", "Maicol" y/o "John Jairo", y se desempeñó como comandante urbano del Frente Farallones en el Tambo, Cauca, y algunos municipios del suroeste del departamento de Huila.

Se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 como integrante del Bloque Calima y fue postulado por el Gobierno Nacional el 28 de septiembre de 2012. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en audiencia de formulación de imputación de cargos realizada el 19 de diciembre de 2013, entre otros, por el delito de concierto para delinquir agravado por razón de la pertenencia a grupos armados ilegales y cuyo período se acreditó entre finales de 1999 y la fecha de desmovilización. Empero, dicha imposición de medida e imputación de cargos se realizaron en una actuación distinta a la que ocupa la atención de la Sala y sin que hasta la fecha se haya proferido sentencia condenatoria. En la actualidad JANIER FRANCO se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad Villa de las Palmas de Palmira, Valle del Cauca.

**7.** JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA identificado con la cédula de ciudadanía No. 70'529.199 de Arboletes, Antioquia, se desempeñó como comandante de urbanos y rurales del Frente Farallones en el municipio del Patía, el cual comprende El Bordo, cabecera municipal de aquel y fue apodado "Romario" y "El Chulo". Se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 y fue postulado por el Gobierno Nacional el 25 de febrero de 2010. Fue cobijado con medida de aseguramiento en la jurisdicción transicional en audiencia celebrada el 14 y 15 de mayo de 2012, en la que además se le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado por el tiempo de permanencia en la organización ilegal determinado entre el año 1996 y noviembre 21 de 2000, así como por el período comprendido entre enero 4 de 2004 y la fecha de

desmovilización empero, en desarrollo de una actuación distinta a la actual en la que no se ha producido fallo condenatorio, se advierte.

Por razón de la medida de aseguramiento reseñada fue privado de la libertad y enviado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villa de las Palmas de Palmira, Valle del Cauca.

En consecuencia, no resulta pertinente proferir sentencia condenatoria por el delito de concierto para delinquir, so pena de infringir el principio rector del non bis in ídem.

**8.** JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA identificado con cédula de ciudadanía No. 8'338.087 de Chigorodó, Antioquia, integrante del Bloque Calima desde el mes de marzo de 2000, se desmovilizó de manera colectiva el 18 de diciembre de 2004 y fue postulado por el Gobierno Nacional el 11 de marzo de 2011. Fue conocido en la organización con el mote de "El Gato", "Alejandro" y/o "El Médico", y desempeñó el cargo de patrullero en los municipio de Timbío, Cauca y Guadalupe, Huila

SERNA CARDONA resultó afectado con medida de aseguramiento por razón de la orden proferida por un magistrado de control de garantías de justicia transicional, en actuación distinta a la presente, y enviado a la cárcel Villa de las Palmas de Palmira, Valle del Cauca. En esa diligencia se imputó el delito de concierto para delinquir por una fracción de tiempo de permanencia en la organización paramilitar, en concreto, por el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2003 y el 18 de diciembre de 2004, fecha de la desmovilización, sin que se haya proferido nueva sentencia condenatoria por dicha conducta, en justicia y paz. De la información aportada por la Fiscalía Delegada se logra establecer también que CARDONA fue condenado por el punible de concierto para delinquir por el lapso de marzo de 2000 al 2003 por una autoridad de la justicia permanente.

**9.** JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 10'171.509 de La Dorada, Caldas, fue conocido al interior de la organización criminal como "Toño" y "Rigo" y desempeñó entre otros cargos, el de comandante de urbanos en el Frente Farallones que operaba en Cauca y

Huila, en lo específico, en los municipios de Popayán y San José de Isnos, respectivamente. Se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 y fue postulado por el Gobierno Nacional el 20 de agosto de 2009. Al igual que los anteriores postulados fue cobijado con medida de aseguramiento en audiencia celebrada ante el magistrado de control de garantías el 31 de julio de 2012, por razón de una actuación surtida en esta jurisdicción pero diferente a la que comporta la atención en este caso, donde además, se le imputó el punible de concierto para delinquir por cada uno de los períodos de permanencia acreditados.

En efecto, adujo la Fiscalía que GALEANO LÓPEZ ingresó a las estructuras de autodefensas siendo un menor de edad, por ende, que la imputación del punible de concierto para delinquir se realiza desde la fecha en que cumplió la mayoría de edad, esto es, desde el 16 de julio de 1983. Así mismo, que hizo parte de tales grupos en tres períodos diferentes. El primero desde el 16 de julio de 1983 hasta el año 1988. El siguiente desde 1990 hasta octubre de 2002 y el último, del 6 de octubre de 2003 hasta el 18 de diciembre de 2004 cuando se desmoviliza colectivamente.

En consecuencia, la Sala omitirá pronunciarse acerca del comportamiento ilícito constitutivo del punible de concierto para delinquir, pues el mismo ha de realizarse en la actuación en el que fue efectivamente imputado.

**10.** JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS identificado con cédula de ciudadanía No. 78'035.357 –no se indica el lugar de expedición–, se desempeñó como patrullero del Bloque Calima y fue conocido en la estructura ilegal como “Pelirrojo”, “Loco” y/o “Camilo Jr”. No obstante, la Fiscalía adujo que MORELO PALACIOS ingresó al autodenominado Ejército Popular de Liberación, EPL, a la edad de 16 años y que en 1991 pasó a engrosar las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá haciendo parte del grupo llamado “La 35”, por razón del cual fue enviado a la zona montañosa de Urabá con los hermanos Castaño, hasta cuando resultó herido en una pierna con un artefacto explosivo tipo mina antipersona. En consecuencia, se designó como radio operador una vez se recuperó. En el año 2000 fue nombrado miembro del Bloque Calima empero, se desmovilizó el 25 de noviembre de 2004 de manera colectiva como integrante del Bloque Bananero. Obtuvo la postulación del Gobierno Nacional el 14 de julio de 2006.

Tal como se advirtió en párrafos anteriores, MORELO PALACIOS es el único postulado que en esta oportunidad fue imputado por el punible de concierto para delinquir debido a que no lo ha sido en actuación distinta, ni contra él se acreditó la existencia de sentencia condenatoria por tal motivo en la jurisdicción permanente. Por razón de la imputación acaecida en el presente asunto fue afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

## **HECHOS**

De conformidad con la presentación efectuada por la Fiscalía 18 de la Unidad de Justicia Transicional de Cali, los hechos presentados con la finalidad de obtener sentencia condenatoria contra los actuales postulados, coinciden a cabalidad con los que fueron objeto de sentencia en el proceso adelantado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá con ponencia de la magistrada Léster María González en el radicado 2008-80786. Por tal razón, serán presentados aquí en el orden en el que fueron expuestos en esa decisión.

Ahora bien, debe aclararse que en ninguna de las audiencias llevadas a cabo durante el procedimiento, esto es, durante la audiencia de formulación de imputación o la solicitud de sentencia anticipada efectuada por la Fiscalía 18 de Cali, se hizo una presentación completa y precisa de los sucesos objeto de revisión, pues desde la audiencia de imputación de cargos<sup>2</sup> se advirtió que los mismos se ajustaban a los presentados en el proceso que ya fue objeto de sentencia<sup>3</sup>, obviamente, en lo relativo a la responsabilidad de los postulados aquí presentados, e incluso, que se sujetarían a idénticos medios suasorios. En total, se trata de veintidós hechos que se discriminan de la siguiente manera.

### ***HECHO No. 1. Homicidio en persona protegida de Jaime Quirá Cifuentes***

*85. El 30 de Julio del año 2001 en la cabecera municipal de El Tambo - Cauca, en la vía que lleva del matadero municipal al barrio San Fernando, fue abordado*

---

<sup>2</sup> Audiencia de formulación de imputación realizada el 8 de julio de 2014 en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ante el Magistrado con Funciones de Control de Garantías doctor Manuel Parra Bernal, a partir del minuto 21:47 del registro uno del cd de audiencia preliminar. La información se puede corroborar también en el acta de audiencia preliminar visible a folios 1-15 del cuaderno de actas correspondiente a la función de garantías.

<sup>3</sup> Es decir a la sentencia de septiembre 4 de 2012 en la actuación Radicado 2008-80786 seguido contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez. M. P. Léster María González Romero.



Jaime Quirá Cifuentes por GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y alias "El Pelirrojo" quién después de un intercambio de palabras le disparó con arma de fuego tipo revólver calibre 38, causándole heridas que le produjeron la muerte. El postulado admitió su responsabilidad en el homicidio, como quiera que protegió y colaboró en la huida de alias "Pelirrojo" al desenfundar su arma de fuego por prevención y huir del lugar conjuntamente en la motocicleta mencionada.

86. El cargo se legalizó a título de COAUTORÍA IMPROPIA (L.599/00, art. 29) por el delito de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) habida cuenta que desde el momento en que el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ aceptó acompañar a alias "El Pelirrojo" lo hizo bajo el fin de servir a la organización en aquellos propósitos criminales.

**HECHO No. 2. Secuestro simple agravado y Homicidio en persona protegida de Emilson Albeiro Peñafiel Ardila, Felipe Antonio Peñafiel Muñoz, Wilmar Jair López Peñafiel y Marino Enrique Báez**

87. El 02 de agosto de 2001, en el sitio conocido como "La Cuchilla", en la vía al Obelisco de El Tambo- Cauca, un grupo conformado por aproximadamente 60 hombres de las A.U.C. entre los que se encontraba GIAN CARLOS GUTIÉRREZ SUÁREZ bajo el mando de alias "Gonzalo", realizó un retén en el que se privó de su libertad a Emilson Albeiro Peñafiel Ardila (agricultor de 24 años de edad), Felipe Antonio Peñafiel Muñoz (agricultor de 20 años de edad), Wilmar Jair López Peñafiel (agricultor de 22 años de edad) y Marino Enrique Báez (de nacionalidad dominicana y profesor dirigente del sindicato de maestros de ese país). Momentos después de la retención tuvo lugar un enfrentamiento armado entre la organización paramilitar y el grupo subversivo E.L.N., razón por lo que las víctimas quedaron con el grupo al mando de alias "Gonzalo", mientras que GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y los individuos conocidos con los alias de "Maycol" y "El Pelirrojo", regresaron a la población de El Tambo. Al día siguiente, los cuatro retenidos fueron encontrados muertos junto con el cadáver de Hegidio Achinte, quien fue víctima del cruce de disparos en el enfrentamiento sostenido.

88. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en versión libre rendida el 29 de agosto de 2007, confiesa su responsabilidad en la retención de las cuatro personas inicialmente identificadas, alegando desconocer la suerte que iban a correr las personas retenidas.

89. No obstante lo anterior la Fiscalía formuló cargos que fueron legalizados por esta Sala de decisión, en contra del aquí postulado y procesado a título de COAUTOR por los delitos de Secuestro simple agravado (L.599/00, art.168, art.170 num. 10º) y Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en el entendido de que, como bien lo consideró el ente instructor, no resultaba extraño para un militante de las A.U.C. que las personas privadas de su libertad en retenes de este tipo señaladas como miembros o auxiliares de los grupos subversivos, fueran sometidas a esa clase de prácticas generalizadas en las que se les desaparecía o causaba la muerte en el acto, como efectivamente ocurrió.

**HECHO No. 3. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de David Ospina González**

90. El 19 de septiembre de 2001, en la Vereda Monteredondo del municipio de El Tambo del departamento de Cauca, Janier Franco alias "Maycol" y el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, obligaron a salir de su casa a David Ospina González (aserrador de 19 años), conduciéndolo hasta la vereda Betania, donde alias "Maycol" le disparó con arma de fuego causándole la muerte. Este hecho fue confesado por el postulado GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida el 29 de agosto de 2007, aceptando la responsabilidad por acompañar a alias "Maycol" a sacar a la víctima de su casa y llevarlo al lugar donde se causó la muerte con disparos de arma de fuego tipo revólver calibre 38, tras haber sido señalado injusta y arbitrariamente por el mismo "Maycol" como guerrillero.

91. El grado de participación que se le atribuyó al postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ es de COAUTOR de los delitos de Secuestro Simple agravado al causársele la muerte a la víctima con ocasión del secuestro (L.599/00, art. 168, 170 num. 10º) en concurso heterogéneo con Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135), los que por encontrarse ajustados a derecho fueron legalizados.

**HECHO No. 4. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de Nisareiver Sánchez Vásquez**

92. El 20 de agosto de 2001, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el individuo conocido con el alias de "El Pelirrojo", por orden de Javier Franco, alias "Maycol", llegaron en dos motocicletas a la población de El Tambo en el departamento de Cauca y sacaron al señor Nisareiver Sánchez Vásquez, de 20 años de edad, quien era vigilante del pueblo, para conducirlo hasta la vereda de El Tablón, lugar donde alias "El Pelirrojo" le disparó con un revólver calibre 38, produciéndole heridas que le causaron la muerte. Según la confesión realizada por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, la víctima se hacía pasar como miembro de las AUC para pedir dinero y extorsionar a los vecinos de El Tambo, asunto que motivó el secuestro y posterior homicidio.

93. Los cargos fueron legalizados por los delitos de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en concurso heterogéneo con Secuestro Simple agravado (L.599/00, art. 168, 170 num. 10°), ambos en calidad de COAUTOR.

**HECHO No. 5. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de Napoleón Rosero**

94. El 31 de Julio de 2001, en la vereda Pueblo Nuevo de corregimiento de Piagua, perteneciente al municipio de El Tambo-Cauca, en horas de la noche, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el individuo conocido con el alias de "El Pelirrojo" llegaron a la casa del señor Napoleón Rosero, agricultor de 43 años de edad, para una vez sacarlo de manera forzada de su residencia proceder a dispararle con arma de fuego tipo revólver calibre 38, produciéndole heridas que le causaron la muerte.

95. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007 (a las 11:32:39 - 11:42:10), confesó éste homicidio, afirmando que ayudó a sacar a la víctima con conocimiento de que era para asesinarlo, toda vez que Javier Franco, alias "Maycol", había informado que era guerrillero.

96. Esta conducta objeto de formulación de cargos en contra de GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ fue legalizada a título de COAUTOR de los delitos de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en concurso heterogéneo con Secuestro Simple agravado (L.599/00, art. 168, 170 num. 10°).

**HECHO No. 7. Homicidio en persona protegida de Claudina Medina**

97. El 27 de noviembre de 2001, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y alias "El Burro" arribaron en motocicleta a la casa de la señora Claudina Medina (de 62 años de edad), ubicada en el barrio San Fernando del municipio del Tambo-Cauca, siendo aproximadamente las 20:30 horas, y después de golpear a su puerta y ser atendidos por la señora Medina, alias "El burro" le disparó con un arma de fuego tipo revólver calibre 38, causándole las heridas que le produjeron la muerte.

98. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, confesó este homicidio explicando que fue por orden de Janier Franco, alias "Maycol", que acompañó al sujeto alias "El burro" para prestarle seguridad y manejar la motocicleta, con pleno conocimiento de que se dirigían a la casa de la víctima con el fin de darle muerte, porque era señalada -injusta y arbitrariamente- como auxiliadora de la guerrilla.

99. La conducta delictiva fue legalizada en contra del postulado por el tipo de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en calidad de COAUTOR IMPROPIO.

**HECHO No. 8. Homicidio en persona protegida de Fernando Trujillo**

100. El 29 de agosto de 2001, en horas de la mañana, los sujetos conocidos con los alias de "Maycol" -quien responde al nombre de Janier Franco- y el "El burro", junto con GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ arribaron a la hacienda "El Caimo", ubicada en la vereda Nuevo Piagua de El Tambo, departamento de Cauca, buscando al señor Fernando Trujillo contra quien alias "El burro" disparó arma de fuego, por orden de "Maycol", causándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

101. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 29 de agosto de 2007 confesó su responsabilidad en este homicidio, admitiendo que integró el grupo que se dio a la búsqueda de la víctima, para darle muerte por orden del sujeto conocido como "Maycol", pues era señalado de militar en un grupo guerrillero.

102. El comportamiento delictivo fue legalizado por la Sala bajo el tipo de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, a quien se le atribuyó su responsabilidad en la comisión de los hechos a título de COAUTOR IMPROPIO.

**HECHO No. 9. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de Wilson Hernando Dorado Piamba y Norelly Guauña**

103. El 19 de septiembre de 2001, en la Vereda Puerto Piagua, municipio de El Tambo-Cauca, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y alias "El Burro", por orden de Janier Franco, alias "Maycol", sacaron de una casa ubicada en una vereda aledaña al corregimiento de San Joaquín a Wilson Hernando Dorado Piamba (conductor de 39 años de edad) y Norelly Guauña (de 23 años de edad). Seguidamente, condujeron a Wilson Dorado en una motocicleta en medio de los dos victimarios hasta una zona cercana al corregimiento de Piagua, donde alias "El burro" procedió a dispararle con un arma de fuego, tipo revólver calibre 38, causando su deceso. Procedimiento que repitieron luego con la señora Norelly. Las víctimas fueron ejecutadas por orden de "Maycol", tras ser señaladas injusta y arbitrariamente como guerrilleros.

104. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 29 de agosto de 2007 confesó su responsabilidad en los dos homicidios al haber realizado un aporte esencial al transportar a las víctimas conjuntamente con el sujeto alias "El burro" y con conocimiento de que la finalidad era ejecutarlas; de manera tal que obró conjuntamente con éste individuo para la comisión de los delitos, siguiendo órdenes de alias "Maycol".

105. El doble comportamiento delictivo se adecuó en los tipos de Secuestro Simple agravado al causársele la muerte a las víctimas con ocasión del secuestro (L.599/00, art. 168, 170 num. 10º) en concurso heterogéneo con Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135), en concursos homogéneos sucesivos, atribuyéndosele la responsabilidad al postulado en calidad de COAUTOR.

**HECHO No. 10. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de Bleismer García Idrobo**

106. El 09 de septiembre de 2001, en horas de la noche, los sujetos distinguidos con el alias "El Burro" y GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, por orden de Janier Franco alias "Maycol", sacaron de un billar ubicado en el casco urbano de El Tambo, departamento de Cauca, a Bleismer García Idrobo (agricultor de 19 años de edad), y lo condujeron en una motocicleta por la vía que conduce a Popayán. Antes de llegar al corregimiento de Piagua, el sujeto conocido como "El burro" le disparó con un revólver calibre 38, causando su deceso. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ manejó la motocicleta en la que transportaron a la víctima en medio de los dos victimarios.

107. GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 29 de agosto de 2007 confesó su responsabilidad en este homicidio por realizar un aporte esencial al sacar del billar y transportar en una motocicleta que él conducía a la víctima, conjuntamente con el sujeto alias "El burro", y con conocimiento de que era para ejecutarla por señalamientos injustos y arbitrarios de vínculos con la subversión.

108. Esta conducta objeto de formulación de cargos en contra del postulado, fue legalizada a título de COAUTOR por los delitos de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en concurso heterogéneo con Secuestro Simple agravado al causársele la muerte a la víctima con ocasión del secuestro (L.599/00, art. 168, 170 num. 10º).

**HECHO No. 11. Homicidio en persona protegida de Belisario Elvira Sánchez**

109. El 05 de septiembre de 2001, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el sujeto conocido con el alias de "El burro" abordaron al señor Belisario Elvira Sánchez (conductor de 56 años de edad) quien se encontraba en su vehículo tipo campero en el parque de la población del El Tambo, departamento de Cauca, so pretexto de que los transportara en el mencionado automotor. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ siguió el vehículo en una motocicleta DT-125 tomando la vía que de El Tambo conduce a Popayán. Finalmente, en inmediaciones del corregimiento de Piagua, alias "El burro" disparó contra el señor Belisario Elvira Sánchez con un revólver calibre 38 ocasionado su deceso y dejando abandonado el cadáver en la misma vía. El homicidio se perpetró por órdenes de Janier Franco alias "Maycol", quien señaló –injusta y arbitrariamente– a la víctima como miliciano de la guerrilla.

110. El hecho fue confesado por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en versión rendida el 29 de agosto de 2007.

111. Este comportamiento fue legalizado por el tipo de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ a título de COAUTOR IMPROPIO.

**HECHO No. 12. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de Nesar López Céspedes**

112. Entre los meses de septiembre y diciembre del año 2001, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el sujeto conocido con el alias de "El burro", cumpliendo órdenes del comandante Janier Franco alias "Maycol", retuvieron en una estación de gasolina ubicada en el municipio de El Tambo-Cauca, al señor Nesar López Céspedes y lo transportaron en una motocicleta hasta la vereda de Chasquido, dejándolo a disposición de miembros del grupo paramilitar que comandaba alias "Charli", quienes días después procedieron a ejecutarlo por órdenes de alias "Maycol", y entregaron el cuerpo sin vida a sus familiares.

113. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en la versión rendida los días 29 de agosto y 30 agosto de 2007 confesó la retención de la víctima, alegando que desconocía que la finalidad de la misma era darle muerte.

114. La conducta ejecutada por el postulado, al privar de la libertad al hoy occiso Nesar López Céspedes con el propósito de trasladarlo al campamento del grupo paramilitar asentado en la vereda el Chasquido de El Tambo-Cauca, fue objeto de legalización de cargos por los delitos de Secuestro Simple agravado por el homicidio de la víctima con ocasión del secuestro (L.599/00, art. 168, 170 num. 10º) en concurso heterogéneo con Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) atribuidos GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ a título de COAUTOR, en el entendido de que, como bien consideró la Fiscalía, no resultaba extraño para un militante de las A.U.C. que las personas privadas de su libertad en retenes de este tipo, por ser consideradas miembros o auxiliares de los grupos subversivos, fueran sometidas a esa clase de prácticas generalizadas en las que se les desaparecía o causaba la muerte de manera posterior al secuestro.

**HECHO No. 13. Homicidio en persona protegida de Paulino Uribe Muñoz**

115. El 05 de enero de 2002, aproximadamente a las tres de la tarde, cerca al parque infantil de El Bordo, en el departamento de Cauca, en la ruta que conduce al municipio de El Patía por la vía Panamericana, el señor GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, cumpliendo órdenes del sujeto conocido por el alias de "Nelson", Comandante del grupo paramilitar en esa localidad, asesinó al señor Paulino Uribe Muñoz, agricultor de 39 años de edad, al dispararle con un revólver calibre 38 en varias oportunidades. El homicidio lo ejecutó GIAN CARLO GUTIÉRREZ con ayuda del individuo conocido como alias "Gómez", quien lo esperó en una motocicleta marca KMX.

116. El hecho fue confesado por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, informando que los móviles del homicidio tenían que ver con las injustas y arbitrarias acusaciones de alias "Nelson" en contra de la víctima de ser miembro de la subversión.

117. Por estos hechos la Fiscalía formuló cargos en contra del postulado a título de COAUTOR IMPROPIO del delito de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) el que por encontrarse conforme a derecho fue legalizado por esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.

**HECHO No. 14. Homicidio en persona protegida de Fredy Armando Girón Burbano**

118. El 07 de abril del 2002 en horas de la tarde, en la entrada por la vía Panamericana a la Vereda la Fonda del municipio del Patía (El Bordo-Cauca), el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía de otro sujeto de quien se desconoce su identidad, interceptaron por orden del Comandante del grupo paramilitar alias Nelson al señor Fredy Armando Girón Burbano, docente de 32 años de edad quien se transportaba en un vehículo de su propiedad y procedió a dispararle con arma de fuego ocasionándole la muerte.

119. El hecho fue confesado por el postulado en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, informando que la orden de asesinarlo estaba relacionada con las acusaciones en contra de la víctima de militar en la guerrilla, acusaciones que para esta Sala son injustas y arbitrarias.

120. Por estos hechos se legalizó el cargo por el delito de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en condición de COAUTOR.

**HECHO No. 15. Desaparición forzada y Homicidio en persona protegida de alias "Turbo"**

121. Una noche de abril de 2002, en una hacienda cercana al puente El Pilón, sobre la vía Panamericana con dirección Pasto- Nariño, jurisdicción del municipio de El Bordo-Cauca, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía de otro integrante de la organización paramilitar del cual no se ha logrado su identificación, por orden del sujeto conocido con el alias de "Luís", sacaron a un individuo afrocolombiano conocido con el alias de "El Turbo". Una vez en el puente, el hombre que acompañaba al postulado le disparó con un arma de fuego revólver calibre 38 ocasionándole la muerte, para posteriormente arrojar el cuerpo sin vida al río que queda entre Pilón y Galíndez, conocido como Guachicono.

122. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ confesó este hecho en su versión rendida el 29 de agosto de 2007 informando que la víctima trabajaba con el grupo paramilitar y que fue asesinado como sanción por haberle disparado días antes a una persona inocente de la población.

123. Por este comportamiento se legalizaron los cargos, en Sede de Segunda Instancia, por los delitos de Desaparición forzada (L.599/00, art.165) en concurso heterogéneo con Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) a título COAUTOR en contra de GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ.

#### **HECHO No. 16. Homicidio en persona protegida de Herbeth Elías Osorio**

124. El 15 de marzo de 2002, en inmediaciones de la hacienda "California", a orillas de la carretera, en el sitio La india de El Patía, municipio de El Bordo, departamento de Cauca, el sujeto conocido con el alias de "El indio" en compañía del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ, asesinó con arma de fuego al señor Heberth Elías Osorio, taxista de 26 años de edad, cumpliendo órdenes del comandante conocido con el alias de "Nelson".

125. El postulado confesó los hechos en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, e informó que la víctima había sido citada al parador Patía, lugar desde donde lo condujeron hasta el sitio donde le causaron la muerte, toda vez que era señalado como auxiliar de la guerrilla, específicamente por colaborar en los retenes que hacían en la vía que de El Bordo conduce a Bolívar en el departamento de Cauca.

126. Por este comportamiento se legalizó el cargo formulado en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ por el delito de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) a título de COAUTOR.

#### **HECHO No. 17. Homicidio en persona protegida de José Alberto López Ramos, James Heli Medina Bermúdez y otro individuo no identificado**

127. El 03 de Junio de 2002, en la entrada a la vereda La Fonda del municipio El Patía-Cauca, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ coordinó la muerte de los señores José Alberto López Ramos (tornero de 40 años de edad), James Heli Medina Bermúdez (de 46 años de edad) y otro individuo que aún no ha sido identificado, quienes fueron sido señalados injusta y arbitrariamente como guerrilleros.

128. Los tres homicidios fueron confesados por GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, e informó que cumplía órdenes del jefe paramilitar conocido por el alias de "JC", comandante del Bloque Calima. Por su parte, la ejecución material de los homicidios estuvo a cargo de dos individuos, uno de ellos conocido como "Edison" y otro que había sido guerrillero, que tampoco ha sido posible su individualización, pero fue quien reconoció a las víctimas como miembros de la organización subversiva, de acuerdo a la narración de las circunstancias confesada por el postulado.

129. Por esta conducta se legalizó el cargo de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en concurso homogéneo sucesivo formulado en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ a título de COAUTOR.

#### **HECHO No. 18. Secuestro Simple agravado y Homicidio en persona protegida de Ferney Mesa García, Wilton Delgado Valdez, Jaiber Valdez Delgado y Holman Valdez Delgado**

130. El 22 de marzo de 2002, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ coordinó un operativo por órdenes de alias "JC", comandante del Bloque Calima, en el municipio de El Bordo-Cauca, en el que participó alias "Edinson", alias de "El Indio" y cuatro individuos sin individualizar, entre lo que se encontraban dos presuntos ex -guerrilleros.

131. Estos sujetos se movilizaron en una camioneta roja y en una motocicleta hasta la vereda El Cocal, donde sacaron a un individuo de su vivienda;

posteriormente, se dirigieron a la vereda de Matacea de donde también tomaron a tres personas de sus viviendas. Finalmente, asesinaron a los cuatro retenidos tras ser señalados –injusta y arbitrariamente– como colaboradores de la subversión. Las personas asesinadas respondían a los nombres de Ferney Mesa García, agricultor de 30 años de edad, Wilton Delgado Valdez, agricultor de 17 años, Jaiber Valdez Delgado, agricultor de 20 años, y Holman Valdez Delgado agricultor de 21 años de edad.

132. Los hechos fueron confesados por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida el 29 de agosto y el día 30 de agosto de 2007, informando que él mismo se encargó de dispararle a una de las víctimas y sus compañeros a las otras tres. Los cuerpos fueron dejados sin vida en diferentes puntos de la vereda El Limón -Matacea, del municipio de Mercaderes, departamento de Cauca.

133. Esta conducta fue legalizada en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ como COAUTOR dentro del concurso homogéneo sucesivo de Homicidios en persona protegida (L.599/00, art. 135), en concurso heterogéneo con Secuestro Simple agravado en concurso homogéneo sucesivo al ser asesinadas las víctimas con ocasión del secuestro (L.599/00, art. 168, 170 num. 10°).

#### **HECHO No. 19. Homicidio en persona protegida de Ovidio Díaz Rodríguez y Hegidio Marino Galíndez**

134. El 07 de junio de 2002, en horas de la mañana, en la localidad de Mojarras ubicada en el municipio de Mercaderes-Cauca, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía del individuo conocido como "Edinson" retuvieron a los señores Ovidio Díaz Rodríguez, agricultor de 24 años de edad, y Hegidio Marino Galíndez, de 20 años de edad. Luego de comunicar de su retención al comandante del Bloque Calima, alias "JC", éste ordenó ejecutarlos pues sus nombres aparecían relacionados en una lista de personas que según su dicho pertenecían a la subversión.

135. Las conductas fueron confesadas por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida los días 29 de agosto y 30 de agosto de 2007, informando que él junto con su compañero trasladaron a las víctimas en una motocicleta hasta la vereda El Cocal, municipio de Mercaderes, donde los asesinaron sobre la vía panamericana.

136. La conducta delictiva aquí descrita y confesada por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, fue legalizada en contra del postulado a título de COAUTOR por el concurso heterogéneo de Secuestro Simple agravado (L.599/00, art. 168, 170 num. 10°) y Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135), ambas en concurso homogéneo sucesivo.

#### **HECHO No. 20. Homicidio en persona protegida de Miguel Ángel Rodríguez Erazo**

137. El 13 de Mayo de 2002, en un balneario ubicado a la salida de la vía que conduce a la Unión-Nariño en el sector El Lago, en la cabecera municipal de Mercaderes, departamento de Cauca, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ acompañado de los individuos conocidos con el alias de "Antonio", Jefe del grupo paramilitar en el municipio de Mercaderes, y alias "El indio", cumplió la orden impartida por el comandante del Bloque Calima conocido con el alias "JC" de asesinar con arma de fuego a Miguel Ángel Rodríguez Erazo, de 20 años de edad, quien había sido señalada arbitrariamente como miliciano de la subversión.

138. El postulado confesó el homicidio en su versión rendida el día 29 de agosto de 2007.

139. Por esta conducta se legalizó el cargo de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, como COAUTOR material del punible.

#### **HECHO No. 21 Secuestro simple agravado y Homicidio en persona protegida de José Wilder Díaz Cuellar**

140. El 03 de Noviembre de 2002, en el parque del municipio de Guadalupe, departamento de Huila, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía del sujeto conocido con el alias de "El Gato" y otras dos personas aún no identificadas, retuvieron al señor José Wilder Díaz Cuellar, agricultor de 22 años de edad, y lo trasladaron hasta la vereda Los Cauchos, por la vía que conduce de Guadalupe a San Antonio-Garzón (Huila), donde le causaron la muerte mediante disparos de arma de fuego que le propinó el sujeto conocido con el alias de "El Gato".

141. La conducta fue confesada por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida el día 20 de noviembre de 2007, e informó que la víctima

fue señalada como miliciano de la guerrilla, asunto que motivó la orden de acabar con su vida.

142. Por este comportamiento criminal, en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, se legalizó el cargo formulado por Secuestro Simple agravado (L.599/00, art. 168, 170 num. 10º) en concurso heterogéneo con Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135), a título de COAUTOR del mismo.

**HECHO No. 22. Homicidio en persona protegida de Luís Alfonso Óme Ordóñez**

143. El 01 de marzo de 2003, en la vereda Alto Junín del municipio de San José de Isnos del departamento del Huila, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, acompañado por Jhon Jader Montenegro Arias, disparó su revolver calibre 38 en contra de la humanidad de Luís Alfonso Gómez Ordóñez, agricultor de 36 años de edad) cuando se encontraba en su casa de habitación, ocasionándole la muerte. La orden de acabar con la vida del señor Óme Ordóñez la profirió el sujeto conocido con el alias de "Rigo", jefe del grupo paramilitar del municipio anotado, quien señalara a la víctima como miliciano de la guerrilla.

144. El postulado confesó el homicidio en su versión rendida el día 30 de agosto de 2007, e informó que para localizar a la víctima se valieron de un guía quien fue posteriormente asesinado en la gallera de San José de Isnos, presuntamente por la guerrilla.

145. Por este comportamiento se legalizó el cargo por el delito de Homicidio en persona protegida (L.599/00, art. 135) en calidad de COAUTOR en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ.

**HECHO No. 23. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y Extorsión de Jorge Enrique Pungo Gómez**

146. El 23 de mayo de 2008, Jorge Enrique Pungo Gómez acudió ante las autoridades denunciando que el 06 de octubre de 2001 fue víctima de desplazamiento forzado.

147. Según lo descrito por la víctima, fue citado en dos oportunidades por los paramilitares para que acudiera hasta la vereda de El Tablón en el municipio de El Tambo, departamento de Cauca. En la primera de tales reuniones, se entrevistó con los paramilitares conocidos con los alias de "El Tuerto", como se le conoce al postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, y alias "Peliteñido", quienes le exigieron dinero en efectivo y dos celulares a cambio de no atacar contra su vida y la de su familia, tras haber sido acusado de ser auxiliar de la guerrilla. Uno de los celulares requeridos fue entregado a alias "Peliteñido" en la segunda citación que se le hizo, a la cual acudió con su hermana Carmen Pungo, luego asesinada por el grupo paramilitar (este hecho venía relacionado en el escrito de cargos en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ como Hecho No. 6 y que posteriormente fue retirado).

148. En esta segunda citación, informa la víctima, los interrogaron, los amenazaron de muerte y luego de tres horas de retención los dejaron ir con la condición de que abandonaran la población de El Tambo, razón por la cual se trasladó la ciudad de Popayán. No obstante, en octubre del mismo año, al enterarse de la muerte de su hermana Carmen Pungo a manos de los paramilitares, pidió protección a la Fiscalía General de la Nación, entidad que le colaboró para su traslado a la ciudad de Bogotá, donde reside actualmente, dejando abandonada su finca cafetera.

149. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el día 30 de agosto de 2007, hizo referencia a estos hechos cuando confesó el homicidio de la señora Carmen Pungo.

150. Este comportamiento se adecuó y legalizó por los delitos de Extorsión (L.599/00, art. 244) en concurso heterogéneo con Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil (L.599/00, art. 159) en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, como COAUTOR de los mismos.

En este punto de la discusión, resulta necesario advertir en primer lugar, que los hechos relacionados en los ordinales seis (6), quince (15) y dieciocho (18) no fueron imputados en esta actuación debido a que la Fiscalía decidió

hacerlo en el proceso priorizado adelantado contra los autores mediatos, en concreto, HÉBERT VELOZA GARCÍA, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JUAN MAURICIO ARIZTIZÁBAL RAMÍREZ y JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, pero además, porque el autor material identificado ya fue condenado por estos hechos por la jurisdicción transicional<sup>4</sup>, esto es, Gian Carlo Gutiérrez Suárez, tal como lo anunció el representante fiscal tanto en la audiencia de formulación de imputación<sup>5</sup> como en la de sustentación de solicitud de sentencia anticipada ante la Sala de Conocimiento<sup>6</sup>. En cuanto a la condena contra el nombrado Gutiérrez Suárez en el hecho seis (6), se trata de sentencia condenatoria proferida el 6 de julio de 2007<sup>7</sup> en la justicia permanente.

Ahora bien, revisadas las diligencias<sup>8</sup> se observa que a pesar de que la sentencia condenatoria proferida por la justicia permanente sólo fue contra Gutiérrez Suárez por el homicidio de Carmen Pungo y otros, lo que en principio habilitaría el pronunciamiento respecto de los autores mediatos enlistados en precedencia, ello no resulta procedente, pues dicha imputación de responsabilidad se realizó en audiencia preliminar celebrada entre el 2 y 9 de septiembre de 2013, la que corresponde al proceso priorizado del Bloque Calima que en la actualidad cursa en el Despacho de la magistrada Léster María González en el proceso radicado No. 2013-00282.

## **ACTUACIÓN PROCESAL**

**1.** En audiencia pública celebrada entre el 8 y el 10 de julio de 2014, la Fiscalía 18 Delegada adscrita a la Unidad de Justicia y Paz Seccional Cali, efectuó la imputación de veinte hechos (a pesar de que en la presentación de los hechos se enumeran hasta el 23, tal como se hizo en la actuación fallada con ponencia de la magistrada González Romero, lo cierto es que en esta imputación se omitieron los hechos correspondientes a los ordinales 6, 15 y 18, lo que nos arroja un resultado de 20 hechos) a los postulados HÉBERT VELOZA GARCÍA, JUAN MAURICIO

---

<sup>4</sup> Sentencia de septiembre 4 de 2012 en la actuación Radicado 2008.

<sup>5</sup> *Ibídem*.

<sup>6</sup> Audiencia de sustentación de petición de sentencia anticipada efectuada el 3 de febrero de 2015. La diligencia cuenta con registro videográfico así como acta en las que se puede corroborar lo afirmado; ésta última a folios 39 a 41 del cuaderno de sentencia anticipada.

<sup>7</sup> Sentencia de julio 6 de 2007 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, Cauca. Radicado 06-0021.

<sup>8</sup> CD Elementos materiales probatorios No. 2. Carpeta correspondiente al homicidio de Carmen Pungo Gómez, subcarpeta "Carpeta del Hecho", "Fotos expediente", "Cuadreno cuatro", imágenes de 179 a 194



ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO, JAIME MANUEL MESTRE SANTAMARÍA, JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS, tal como se discriminarán en el acápite correspondiente a la autoría, participación y responsabilidad, dentro de los que se incluyen conductas constitutivas de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil<sup>9</sup>, y solicitó la imposición de medida de aseguramiento.

Con fundamento en la petición elevada por el ente investigador, el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá<sup>10</sup>, aceptó la formulación de la imputación e impuso la medida de aseguramiento solicitada consistente en la detención preventiva en establecimiento carcelario para la totalidad de postulados reseñados.

**2.** En audiencia pública de sentencia anticipada llevada a cabo el 3 de febrero de 2015 la Fiscalía sustentó ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de esta Corporación, presidida por quien en la actualidad presenta esta ponencia, solicitud de sentencia anticipada con fundamento en el parágrafo del artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012.

En sustento, adujo que la petición de sentencia anticipada se basa en la sentencia condenatoria proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con ponencia de la magistrada Léster González Romero en la actuación radicada No. 2008-80786 de septiembre 4 de 2012 adelantada contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez, en la que se investigaron y juzgaron los mismos hechos por los que se pidió condena contra los postulados reseñados en precedencia.

---

<sup>9</sup> En adelante, al hacer referencia al punible de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil sólo se mencionará como desplazamiento forzado de población civil.

<sup>10</sup> Magistrado José Manuel Bernal Parra.

De igual modo, indicó que en razón a que la presente petición buscaba el reconocimiento de responsabilidad de los restantes integrantes del grupo, no así la totalidad sino de los máximos responsables y unos pocos patrulleros, resultaba pertinente la adopción de una sentencia con carácter anticipado.

Ahora bien, el principal argumento radica en la manifestación introducida en la parte resolutive de la decisión por razón de la cual se declaró la existencia de unos patrones de macrocriminalidad y que, en su entender, configuran el terreno propicio para la expedición de tal providencia al tenor de las previsiones contenidas en el parágrafo del artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012.

Por otra parte, manifestó frente al delito base que la consumación de los punibles por los que se está solicitando sentencia anticipada se dio por virtud del concierto de cada uno de los postulados y su decisión libre y voluntaria de pertenecer a la organización criminal.

De igual modo, que en el caso de VELOZA GARCÍA ya existe sentencia condenatoria por esta jurisdicción al hallarlo autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, mientras que los restantes postulados, con excepción de MORELO PALACIOS, ya han sido imputados por esta misma conducta en otro de los procesos adelantados ante la esta Sala. Por lo tanto, que la única sentencia condenatoria por tal punible será la del nombrado MORELO PALACIOS.

Advirtió igualmente, que frente a SERNA CARDONA alias “El Gato”, que su vinculación es objeto de análisis en el proceso priorizado del Bloque Calima que en la actualidad conoce otro despacho y el que indica se dedicaba al oficio de comerciante y perteneció al ejército durante el año 1992. En cuanto a GALEANO LÓPEZ manifestó que se le imputó el concierto por los períodos comprendidos entre julio de 1983 a 1988, de 1991 a octubre 6 de 2002 y, de ésta última fecha a 2004 cuando se desmoviliza con el Bloque Calima.

Para el caso de JANIER FRANCO adujo que se le formuló imputación en 2013 ante el magistrado de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, por el período comprendido entre 1999 hasta diciembre 18 de 2004, y que en

su contra se profirió sentencia condenatoria por los punibles de homicidio y concierto para delinquir. Así mismo, que el tiempo de condena por el último de los delitos reseñados se tuvo en cuenta a la hora de imputarle su participación en esta jurisdicción, por lo tanto, que la imputación se realizó por los períodos comprendidos entre los meses finales de 1999 y el 29 de julio de 2001 y el 10 de agosto de 2001 y el 2004.

En cuanto a las víctimas expresó que la mayoría fueron reconocidas en la sentencia proferida por esta Corporación con ponencia de la magistrada González Romero con excepción de dos correspondientes a los hechos de Claudina Medina y de Hernando Dorado Piamba, quienes fueron identificadas como Mélida Medina y Orfany Garzón Mambuscay.

Por otra parte, señaló que el caso número seis, correspondiente a la muerte de la señora Carmen Pungo, fue presentado ante otra de las Salas de Conocimiento de este mismo Tribunal.

**3.** De conformidad con lo anteriormente expuesto, el 23 de febrero siguiente se llevó a cabo audiencia de incidente de reparación integral respecto de las víctimas que no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia contra Gian Carlo Gutierrez de la que depende la presente actuación, por los mismos hechos que aquí serán tratados, tal como se advirtió en la audiencia de solicitud de sentencia anticipada.

No obstante, en dicha diligencia la apoderada judicial de las víctimas indicó que no había sido posible lograr la ubicación de la víctima indirecta identificada como Orfany Garzón Mambuscay, por lo tanto, que el incidente de reparación integral versaría sobre la petición de reconocimiento de daños y perjuicios de las víctimas indirectas de Hernando Dorado Piamba y Norelly Guaúña. En tal sentido, presentó su petición de reparación, tal como se expondrá con suficiencia en el acápite correspondiente a la reparación integral.

### **ASPECTOS CONTEXTUALES**

En el propósito de facilitar la comprensión de la responsabilidad de cada uno los postulados que son objeto de la decisión, esta Corporación hará una breve reseña de los aspectos contextuales que fueron objeto de análisis en la sentencia matriz, así como en otras que fueron proferidas por otras Salas de Conocimiento<sup>11</sup> de Justicia y Paz del país, en cuanto a lo que se refiere al surgimiento, incursión, objetivos, expansión y estructura del Bloque Calima.

**Surgimiento.** A partir de distintas decisiones de Justicia y Paz se ha constatado que las condiciones geográficas, históricas, económicas y políticas que signan el territorio (departamento del Valle y el suroccidente del país), más la presencia de grupos armados insurgentes, explican la llegada de los grupos paramilitares a la región.

Es importante señalar que desde el punto de vista geoestratégico el Valle del Cauca y el suroccidente del país, se caracterizan por ser corredor de movilidad hacia las costas del océano pacífico en el que circulan diversas mercancías lícitas e ilícitas.

Igualmente, cuenta con grandes emporios industriales de los cuales se han derivado prolongados conflictos sociales y, además, su historia de violencia -haber sido asiento de dos grandes carteles de la droga en las décadas de los 80's y 90's (el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle con laboratorios de procesamiento de cocaína enviados al exterior por el océano pacífico<sup>12</sup>), inciden para que de manera objetiva, persista la violencia política y el conflicto armado ligado a la intencionalidad consciente de sus protagonistas.

En el mismo sentido, en dichas zonas, desde finales de los años 70 hay presencia de organizaciones guerrilleras como el Frente Jaime Bateman Cayón -disidencia del M-19-, el Bloque Occidental de las FARC-Ep, compuesto de varios frentes y el ELN, entre otros grupos armados<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Providencia de octubre 30 de 2013. MP. Dr. Eduardo Castellanos Roso. Radicado 2006-81099. Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585 y la sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo en el radicado 2006-82611.

<sup>12</sup> Sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611. Párrafo 385.

<sup>13</sup> *Ibíd.*, 384.

Cabe recordar que a finales de los años 90 en el contexto nacional, se habían iniciado los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Igualmente, el avance de esta guerrilla a nivel regional registraba mayor presencia y accionar; el Frente 6° lograba controlar el corredor montañoso de la cordillera central en las zonas rurales de Buga y Sevilla<sup>14</sup>.

Así mismo, en la zona del Pacífico, se expandió el Frente 30, el cual ejerció mayor control sobre la zona rural y urbana de Buenaventura y el sistema montañoso de los Farallones de Cali, así como sobre el flanco occidental de la cordillera occidental. Dicha zona, serviría potencialmente a las FARC para reducir la presión militar del Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, derivada de la puesta en marcha del Plan Patriota<sup>15</sup>.

Además, el aumento de la actividad armada de la guerrilla y la realización de secuestros masivos a partir de 1998, facilitaron el desarrollo de alianzas entre diversos sectores legales e ilegales de la vida económica y social vallecaucana, los cuales utilizaron como plataforma militar y punto de confluencia el aparato armado de los carteles.<sup>16</sup>

En este orden de ideas, la aparición de las autodefensas en el Valle del Cauca en 1999 con el Bloque Calima y su expansión subsiguiente, (...) *no es solo el producto de una reacción por las acciones militares de la guerrilla como la toma de rehenes llevadas a cabo por el ELN. Es, ante todo, el lógico resultado de una compleja estrategia de posicionamiento de las nuevas élites del Valle y la necesidad de garantizar los canales de sus principales fuentes de financiación, tanto legales como ilegales (...)*<sup>17</sup>

En este sentido la Sala de Conocimiento de Medellín en decisión emitida contra alias Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias "Monoleche" señaló que:

*"En ese contexto de conflictos e intereses, se entiende que empresarios del Valle del Cauca, representados por Edgar Lenis Garrido, ex-Presidente Avianca y ex-miembro de la Junta Directiva de Bavaria, acudieran a Carlos y Vicente Castaño Gil con el fin de crear un grupo paramilitar en las tierras del Valle, que ingresó efectivamente en el mes de julio de 1.999 con su apoyo y financiación"*

<sup>14</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica. "Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012). Bogotá: CNMH, 2014. Pág. 280

<sup>15</sup> Ibídem

<sup>16</sup> Véase: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (enero, 2003). Panorama actual del Valle del Cauca. Bogotá.

<sup>17</sup> Ibídem

*Inicialmente, el grupo se asentó y empezó a operar en la vereda Pardo Alto del municipio de Tuluá y en el centro y norte del Valle, al mando de Rafael Antonio Londoño Jaramillo, más conocido como Rafa Putumayo, quien luego sería sustituido por David Hernández Rojas, un Mayor retirado del Ejército, que sería conocido como el Mayor Hernández, don José ó 39 y Nolberto Hernández Caballero, un Sargento retirado también del Ejército, alias Román.*

*Pero, en el centro y norte del Valle, los narcotraficantes del llamado Cartel del Norte del Valle tenían sus intereses -y sus laboratorios-. Y desde la conformación de los Pepes -Perseguidos por Pablo Escobar-, y aún antes, los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil mantenían relaciones con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y los demás miembros de los carteles de Cali y del Norte del Valle, que Vicente Castaño también mantendría y cultivaría después.*

*Esas relaciones, cultivadas durante largos años, llevaron a que éstos se asociaran y sumaran al bloque Calima y, más aún, asumieran su dirección, a raíz de una visita que Diego León Montoya, conocido como don Diego y Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, le hicieron a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil en el Departamento de Córdoba. Aunque no es del todo claro si fue simultánea con la participación y financiación de los empresarios o sucedió unos pocos meses después, en todo caso ocurrió desde los albores del grupo en 1.999. Con el paso de los meses, el grupo se concentró en la centro del Valle del Cauca y sirvió como estructura de seguridad de Diego León Montoya”<sup>18</sup>.*

Así las cosas, es posible inferir que la nueva generación de narcotraficantes, activando los vínculos adquiridos tiempo atrás con la Casa Castaño, acordaron la entrada paramilitar como una expresión de resistencia y reacción de las nuevas élites a la incursión guerrillera, en acuerdo con algunos empresarios y sectores de la clase política vallecaucana, para garantizar la seguridad sobre los territorios de interés a cambio de financiación. De este modo, se garantizó el funcionamiento y consolidación de la industria del narcotráfico, al igual que su orden social y territorial.

Para terminar, el surgimiento del Bloque Calima se da a mediados de 1999,<sup>19</sup> en el Valle del Cauca, el grupo armado ilegal fue creado por los hermanos Castaño Gil, como respuesta al creciente accionar insurgente<sup>20</sup> y sus efectos sobre diversos sectores de las élites regionales<sup>21</sup>, quienes asumieron una postura de apoyo e impulso a la acción paramilitar.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611. Párrafos 386-387

<sup>19</sup> En idéntico sentido la sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611, expresamente se señaló: el 22 de julio de 1.999, a través de los medios masivos de información, las Autodefensas Unidas de Colombia anunciaron su llegada al Departamento del Valle del Cauca. En el comunicado no sólo informaban la constitución del Bloque Calima, nombre que le dieron al grupo que llegaba a operar en la región, sino que se oponían a las conversaciones del Gobierno Nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Días después, el 30 de julio, ingresaron al corregimiento La Moralia del municipio de Tuluá durante la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Párrafo 383.

<sup>20</sup> En el Valle del Cauca y el suroccidente del país, también hacían presencia el Frente Jaime Bateman Cayón, una disidencia del M-19, el Bloque Occidental de las FARC-Ep, compuesto de varios frentes y el ELN, entre otros grupos armados. Ibídem: 384.

<sup>21</sup> Precisamente, unos 2 meses antes, el 30 de mayo de 1.999, el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional había secuestrado a los feligreses que asistían a un oficio religioso en la Iglesia La María del barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali. Ibídem, Párrafo: 384

<sup>22</sup> Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 278. Así mismo, empresarios del Valle del Cauca, representados por Edgar Lenis Garrido, ex-Presidente de Avianca y ex-miembro de la Junta Directiva de Bavaria, acudieron a Carlos y Vicente Castaño Gil con el fin de crear un grupo paramilitar en las tierras del Valle, que ingresó efectivamente en el mes de julio de 1.999 con

### **Incursión, objetivos y expansión (1999-2005).**

La primera acción que formalizó el ingreso del Bloque Calima a la región fue el asesinato de Orlando Urrea y Sandra Patricia Urrea, el 31 de julio de 1999, ésta última hija de aquél, en razón a que la mujer, supuestamente, mantenía una relación afectiva con alias “Óscar”, quien al parecer pertenecía a las FARC en calidad de comandante. Igualmente, secuestraron a cuatro personas y repartieron comunicados escritos en los que anunciaban la llegada del grupo criminal y su permanencia en la región<sup>23</sup>.

Así, el Bloque Calima integrado por hombres provenientes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y de la región, incursionan en la zona y se establecen en la parte alta del municipio de Tuluá, veredas Moralia y Pardo Alto, zona de tránsito hacia el centro y el oriente del departamento,<sup>24</sup> bajo el mando de Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias “Rafa Putumayo”.

Igualmente, transcurrido un mes de operaciones en la zona, llegó otro grupo de cuarenta hombres, comandado por David Dávila (muerto a los pocos meses) y Elkin Casarrubia<sup>25</sup> Posada, alias “Mario” o “el cura”, quienes ocuparon el cargo de comandantes de contra-guerrilla, entre los que se encontraba Eduardo Antonio Salgado Pérez, alias “Nechí y alias “Catori”<sup>26</sup>.

Posteriormente, en el segundo semestre de 1999, se empezaron a sentir los efectos de las acciones del Bloque Calima contra la población civil y los grupos guerrilleros en el Centro y Norte del Valle; de tal manera que se desataron las masacres de la Chorrera, El Placer, Piedritas, San Lorenzo, La Marina, Naranjal, Moralia, entre otras del municipio de Tuluá. Acciones

---

su apoyo y financiación. Véase: Sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611. Párrafo 386.

<sup>23</sup> *Ibidem*

<sup>24</sup> Véase: Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafo 5.

<sup>25</sup> Casarrubia estuvo en este cargo hasta la llegada de Éver Veloza García a mediados del año 2000, quien venía desempeñándose como comandante del Bloque Bananero en Urabá.

<sup>26</sup> Véase: Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafo 4.

similares se desarrollaron en los municipios de Sevilla, Bugalagrande y San Pedro.<sup>27</sup>

Para el año 2000, cambió la línea de mando y fueron encargados de la estructura dos exintegrantes del ejército nacional de Colombia: David Hernández Rojas, un Mayor retirado, conocido como “el Mayor Hernández”, “don José” ó “39”<sup>28</sup> y Nolberto Hernández Caballero, Sargento, alias “Román”<sup>29</sup>.

La primera cúpula del Bloque Calima estuvo conformada por militares en retiro que habían cometido faltas disciplinarias graves<sup>30</sup> y tenían contactos con los Castaño por intermedio de Carlos Mauricio García Fernández alias “Rodrigo Doblejero”, para entrar a los grupos paramilitares. Esto en un bloque donde los comandantes más destacados tenían una estrecha relación con las ACCU y con algunos grupos de desmovilizados del EPL.<sup>31</sup>

En un comienzo sus acciones se circunscribieron al centro del Valle, con epicentro principal en el municipio de Tuluá. Su llegada estuvo ligada al discurso de combatir al 6° Frente de las FARC, a la columna móvil “Arturo Ruiz” de esta misma organización y al Jaime Bateman Cayón. También se relacionaba con el propósito de salvaguardar el territorio y sus dinámicas de la acción

---

<sup>27</sup> “Fueron asesinados el Comandante del Frente “Jaime Bateman Cayón, 25 civiles considerados milicianos de las FARC quienes habitaban en los municipios y el consiguiente desplazamiento de gran parte de los moradores de esas poblaciones”. *Ibidem*. párrafo 8. Así mismo, “Durante los dos meses siguientes el bloque Calima asesinó a 37 personas señaladas de ser guerrilleros y milicianos y se presentaron 160 desplazamientos. Estos hechos motivaron un comunicado de parte de Román al Comité Internacional de la Cruz Roja, con el que justificaba la creación del bloque”. Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 280.

<sup>28</sup> *José o 39* es enviado de vuelta a Urabá cuando *H.H* asumió la comandancia del bloque entre junio y julio de 2000. Luego se convertiría en la mano derecha de *Jorge 40* en el Bloque Norte. Murió a manos del Ejército en Valledupar. En versión libre del 11 de junio de 2008, *H.H* afirmó que *Don José* fue el encargado, junto con *Daniel*, de planear el atentado contra Wilson Borja (15 de diciembre de 2000). Según *H.H*, los dos militares se integraron a las autodefensas por medio del Bloque Metro.

<sup>29</sup> Véase: Sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611. Párrafo 386.

<sup>30</sup> En versión libre del 5 de marzo de 2008, *H.H* aseguró que *José* estuvo detenido en un batallón por homicidio, y *Luis*, por su parte, estuvo implicado en un secuestro. Según Human Rights Watch (2001: 73), el mayor David Hernández fue “Comandante del Batallón de Granaderos de la Cuarta Brigada, [fue] detenido en relación con el asesinato en 1999 de Álex Lopera, antiguo asesor para la paz del departamento de Antioquia, y de dos personas más. Durante su declaración ante los fiscales, Hernández juró que escaparía y se uniría a los paramilitares si le acusaban del asesinato de Lopera, una afirmación que los soldados bajo su mando también le habían oído hacer. Aunque Hernández fue detenido en la IVa Brigada, pudo escapar a finales de 1999. Algunas informaciones apuntan a que en la actualidad [2001] dirige una unidad de las AUC en el departamento de Valle. En junio de 2001, un juez civil encontró a Hernández culpable *in absentia* del triple asesinato. Según la Escuela de las Américas del gobierno de los EE.UU., Hernández se entrenó dos veces en sus instalaciones en Fort Benning, en 1985 y 1991”.

<sup>31</sup> “Dice HH que desmovilizados del EPL como alias MIGUELITO, EL CURA, DURBAIS DURANGO QUE ES ALIAS SANCOCHO, EL PATO, EL POLI que incluso fueron escoltas del alcalde de Turbo, estas personas tenían vínculos directos con las autodefensas y eran del DAS. Al momento de la desmovilización los únicos que quedan es alias sancocho”. Audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza García, realizada el 24 de marzo de 2011.



insurgente, protegiendo la economía (legal e ilegal) y a los poderes establecidos<sup>32</sup>.

Sin embargo, como se ha mencionado en precedencia, el objetivo contrainsurgente ha sido cuestionado, dado que, al parecer, estaba al servicio de Diego León Montoya, alias "*Don Diego*", prestando protección a los laboratorios, a las rutas de transporte de droga y al mismo capo<sup>33</sup>.

Ahora bien, para ganar influencia y hacerse al control del territorio, los paramilitares no lograron edificar bases sociales favorables, ni consolidar un control territorial exitoso en el Valle del Cauca. La relación con la población civil se basó principalmente en la intimidación y la generación de miedo, lo cual impedía ganar la voluntad, la aceptación y el respaldo generalizado de la población, la que llegó a desarrollar incluso formas de resistencia<sup>34</sup>.

Entre junio y julio de 2000,<sup>35</sup> llegó al mando del bloque Calima JOSÉ HEBERT VELOZA, alias "HH" o "Carepollo", quien con el fin de darle claridad a las relaciones del grupo y tener nuevas fuentes de financiación para la ampliación de la zona de influencia solicitó el apoyo de empresarios y narcotraficantes de la región.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Véase: Centro Nacional de Memoria Histórica. "*Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)*". Bogotá: CNMH, 2014. Pág. 286

<sup>33</sup> Véase: Sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611. Párrafo 387. También en versión libre del 12 de junio de 2008, *H.H* afirmó que en la época en que *Román* fue asesinado, varios comandantes del bloque negociaban con varios capos y no sólo con *Don Diego*. Dijo que algunos se aliaron con *Jabón* y otros con *Rasguño*. Esto antes de su llegada a la comandancia del bloque. En esta misma versión, *H.H* aseguró: "Los capos de Tuluá se van para donde Mancuso."

<sup>34</sup> "288. Uno de los primeros hechos de sangre fue en una vereda de Buenos Aires Cauca, los paramilitares hicieron un retén, bajaron una persona de un vehículo de servicio público (chiva) y la asesinaron. Reunieron a la comunidad, se identificaron como autodefensas y comenzaron a imponer reglas, esta situación provocó desplazamientos masivos. 289. El 2 de diciembre del 2000 saquearon tiendas en Suárez; Para la misma época, con el frente Farallones ingresaron a Puerto Tejada (Cauca), para dismantelar bandas delincuenciales; el 29 de enero de 2001 cometieron la masacre de Villa Nueva; el 18 de febrero de 2001 las masacres de Guatemala. 290. En el 2001 el frente Farallones extendió sus acciones al centro y sur del Cauca, llegó a tener presencia urbana y rural en gran parte del territorio de este departamento. A Popayán llegó un grupo de urbanos del frente Farallones y el 4 de enero del 2001 cometieron el homicidio de una persona que estaba en su casa e hirieron a la esposa de este, que eran desmovilizados de un grupo guerrillero. El 15 de enero de 2001 cometieron la masacre de la Rejoya: a unos 10 minutos de Popayán, asesinaron a 10 personas luego de bajarlos de una chiva. 291. Luego, el Frente Farallones ingresó a Morales, Cajibío, al Tambo (Cauca) que es uno de los municipios más grandes del país, con el fin de cortar el paso a la guerrilla. Posteriormente ingresaron al Patía. En enero de 2001 aparecieron en el Bordo unos panfletos en los que se daban instrucciones sobre horarios de circulación. El 28 de febrero de 2001 en un falso reten mataron a una persona. En mayo realizaron amenazas al alcalde del Patía y aparecieron grafitis en las paredes de las casas con amenazas de limpieza social. También ingresó al municipio de Balboa (Cauca) para combatir a los frentes 8 y 29 de las FARC. Entre el 10 y 12 de abril de 2001 se dio la masacre campesinos e indígenas del Alto Naya. 184. 292. Entre junio y julio de 2002 el bloque Calima hizo presencia en el Huila, especialmente en Pitalito para combatir la guerrilla. Estuvieron también en Istnos, San Agustín, Acevedo, Suaza, Guadalupe y Altamira del Sur, hasta diciembre del 2003 cuando entregaron la zona a Macaco del Bloque Central Bolívar, por orden de Vicente Castaño". Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafos 288 hasta 292.

<sup>35</sup> En las primeras versiones libres, *H.H* aseguró que asumió como comandante del Bloque Calima en septiembre de 2000. Posteriormente, afirmó haber asumido dicho cargo entre junio y julio de 2000.

<sup>36</sup> La primera se realizó en el municipio de Cartago en una finca de Arcángel de Jesús Henao, más conocido como el Mocho Arcángel, con la presencia de Vicente Castaño Gil, Diego Fernando Murillo Bejarano, Roberto Duque, conocido como Ernesto Báez y Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino y a ella asistieron unos 50 narcotraficantes del Valle del Cauca, entre éstos, Diego León Montoya, alias don Diego, Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño", Fernando

Con la llegada de alias “HH”, el replanteamiento de su estrategia y el aporte de empresarios y narcotraficantes, el bloque Calima se logró expandir y consolidar en distintos frentes para contener el avance insurgente, intentar quebrar sus corredores y asegurar las zonas económicas de interés regional y nacional<sup>37</sup>.

No obstante, el apoyo de la Fuerza Pública y la coordinación con ésta y las demás autoridades, incluido el CTI de la Fiscalía fue fundamental para alcanzar ese propósito. Así lo señaló HÉBERT VELOZA GARCÍA en Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos del 7 de abril de 2.014:

*“Sin su colaboración era imposible incursionar a zonas como el corregimiento de Barragán, donde tuvimos un combate de casi un mes, todos los días y cuando llegó el Ejército no nos atacó, sino que coordinamos para que se quedaran en el casco urbano”. Algo similar ocurrió cuando el grupo paramilitar ingresó a Buenaventura, incursión que se coordinó con las autoridades de Policía “y ese mismo día permitieron que ese muchacho cometiera una cantidad de homicidios de las personas que teníamos identificadas como miembros de las FARC.*

*Así también ocurrió en Jamundí, en Santander de Quilichao, en la masacre del Naya, pues los paramilitares se movilizaban armados y uniformados en camiones por las carreteras del Valle del Cauca, pasando por Tuluá, Palmira, Buga, etc. y “la movilidad era toda con el Ejército”. “En cada municipio en que hacía presencia las autodefensas se hacía coordinación con la Policía”.*

De esta manera, el Bloque expandió su actuar desde el centro del Valle del Cauca por los restantes puntos cardinales del departamento y el sur del Quindío –incluso- hasta el departamento circunvecino del Cauca, en especial, al municipio del Tambo que contaba con fuerte presencia de los frentes 29, 30, 60 y 80 de las FARC, así como algunos del ELN<sup>38</sup>. Así mismo, para el año 2002, logró acceder

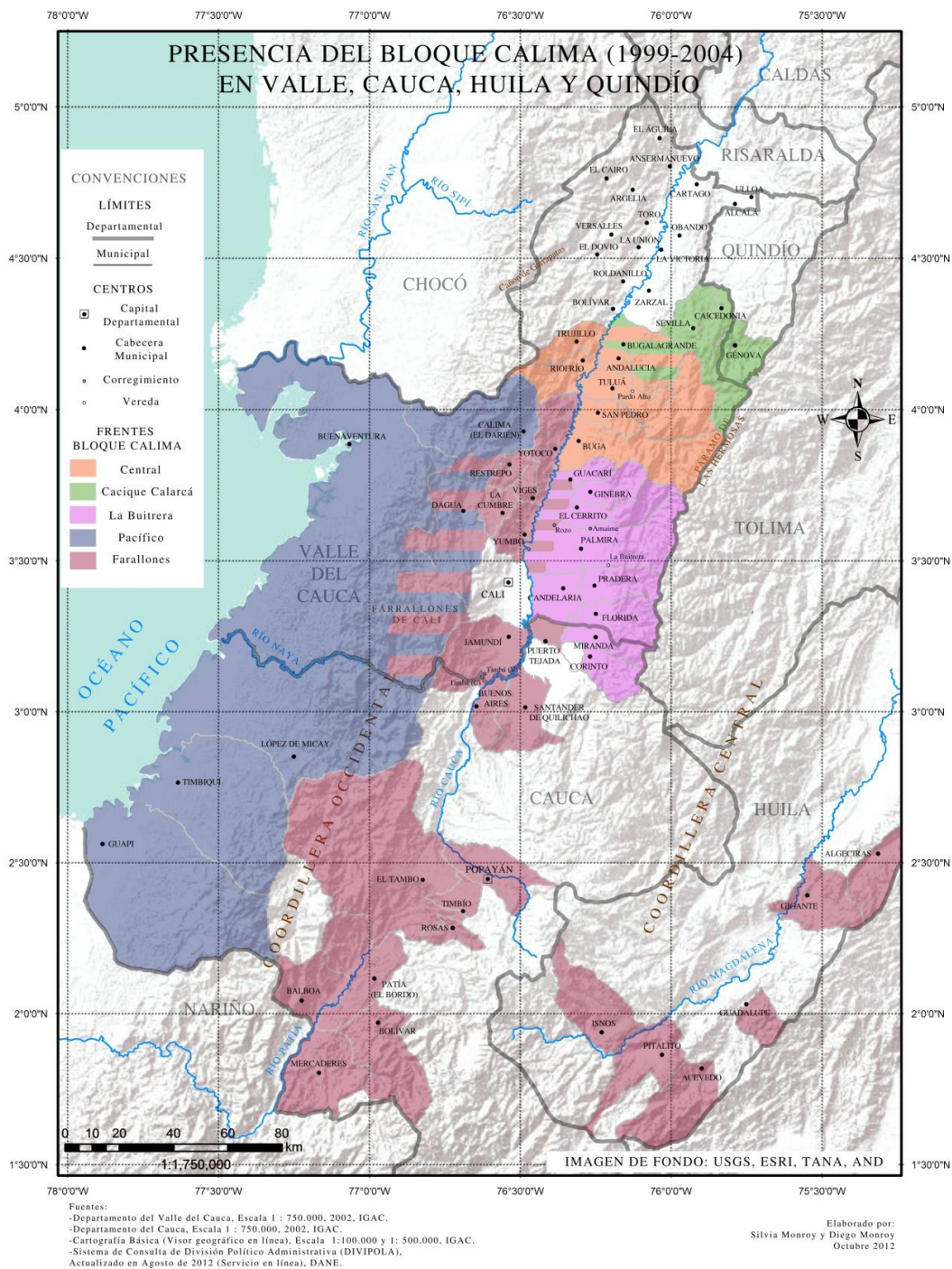
---

Henao Montoya, Miguel Solano y Danilo Ramírez, en representación de Wilber Alirio Varela, alias Jabón y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. A la segunda, que se realizó a fines de 2.000 o principios de 2.001 en una finca de Fernando “Toni” Castro, Presidente de la Plaza de Toros de Cali, con el auspicio y participación de Hernán Gómez, amigo y asesor de Carlos Castaño Gil y Carlos Spa, ganadero de Córdoba, asistieron los empresarios Ernesto Mejía Maya, Alberto Sinisterra Vélez, Manuel Mosquera, tío de un Senador de la República, Jorge Humberto Restrepo, Javier Palau, Leonidas Toro, Jaime Tascón y el Presidente de la Asociación de Harineros del alle, en cuya oficina se realizó otra reunión, entre otros. Pero, no fueron los únicos empresarios que financiaron al bloque Calima, pues los harineros y los ingenios azucareros también lo financiaron, como fue el caso del Ingenio San Carlos, el cual aportaba la suma de 20 millones de pesos mensuales a través de sus Gerentes. Véase: Sentencia de diciembre 9 de 2014, MP. Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, en el radicado 2006-82611. Párrafo 388

<sup>37</sup> De esa manera le quitaron a las FARC y al ELN el control sobre las carreteras de Buga a Buenaventura y Cali a Popayán. De allí que Hébert Veloza haya afirmado que las autodefensas eran “la cáscara del huevo de la seguridad democrática” porque detrás de ésta “estaban las autodefensas” y allí donde estaban éstas “había seguridad en el país”Ibídem, párrafo 389.

<sup>38</sup> Véase: Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafo 9.

al sur del Departamento de Huila en límites con el departamento de Cauca para hacer frente a la columna móvil “Jacobo Arenas” de las FARC<sup>39</sup>. El siguiente mapa exhibe los municipios sobre los cuales tuvo injerencia el Bloque Calima.

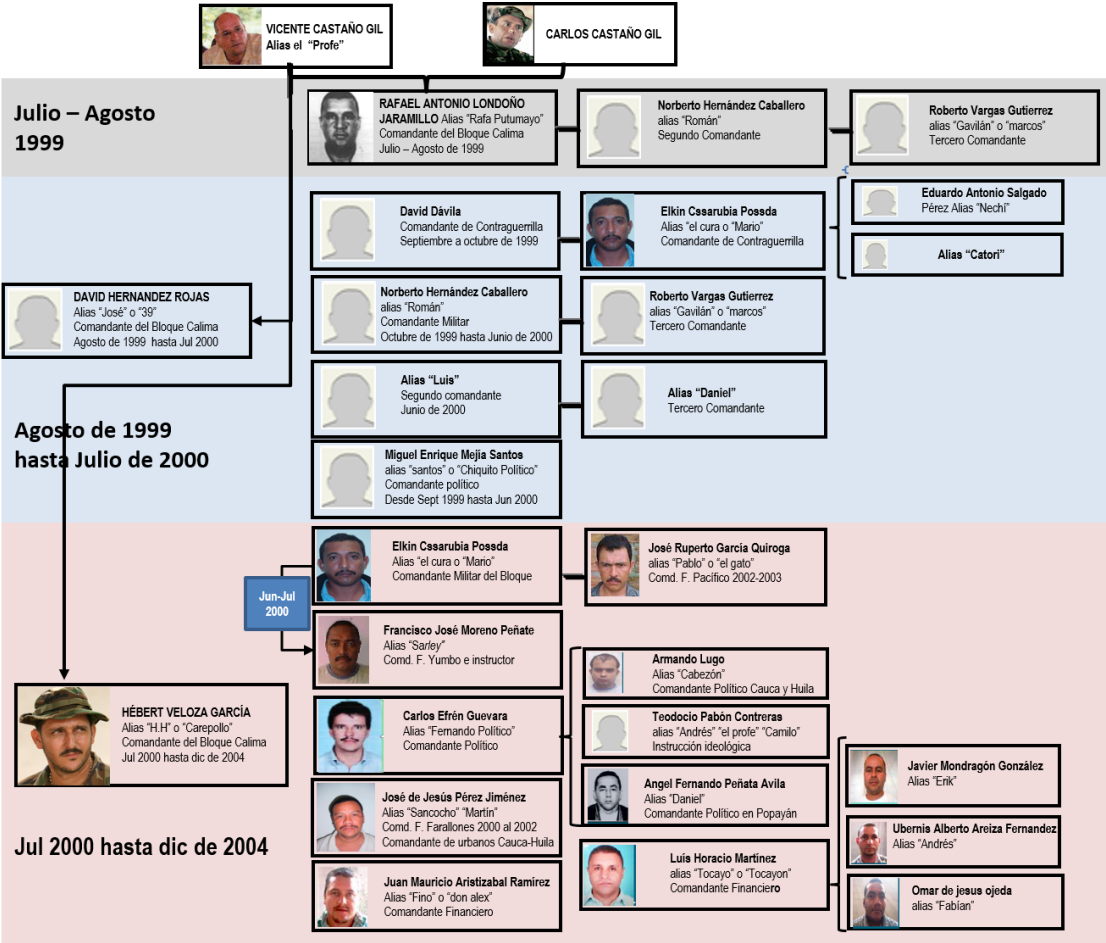


**Organigrama y estructura.** Funcionalmente, el Bloque Calima estuvo constituido por una jerarquía piramidal en cabeza de los hermanos Castaño Gil,

<sup>39</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 292.

quienes fungían como sus representantes y bajo un mando general del Bloque en cabeza de un designado de los Castaño.

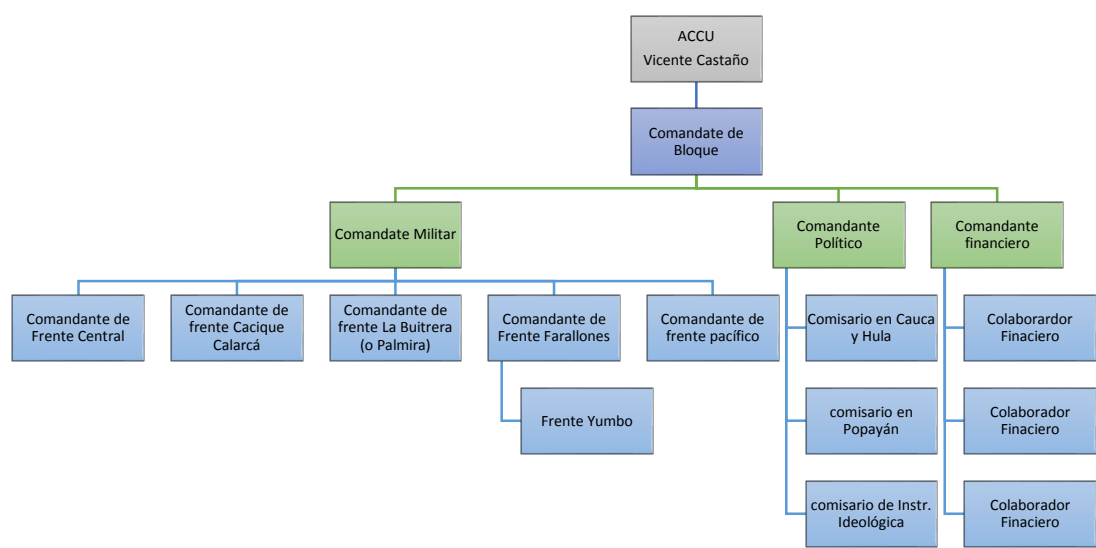
A continuación se visualiza el organigrama de la macro-estructura del Bloque Calima en donde de izquierda a derecha se identifican las jerarquías internas de la estructura armada por periodo asociado a los tres comandantes generales que tuvo el Bloque Calima.



Fuente: elaboración propia con base en las decisiones de justicia y paz e informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza García, realizada el 07 de julio de 2011.

Así mismo, para su operatividad, el Bloque actuó a través de una estructura militar, una política y una financiera. Estaba dividido en 6 frentes llamados: Frente Central, Frente Cacique Calarcá, Frente La Buitrera, Frente Pacifico, Frente Farallones y Frente Yumbo, como se visualiza en el siguiente gráfico.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Véase: Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafo 6.



Fuente: elaboración propia a partir de la Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafo 6.

El frente Central fue el primero en conformarse (junio de 1999 hasta 2004); tuvo injerencia en el área central del Valle del Cauca, correspondiente a los municipios de Andalucía, Buga, Tuluá, San Pedro, Riofrío y Trujillo<sup>41</sup>. El primer comandante fue Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias “Rafa Putumayo”, sustituido por David Hernández Rojas, alias “José” y Norberto Hernández Caballero alias “Román”. Así mismo, Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán” y alias “El Rolo” (sin identificar), quien fuera comandante en Tuluá cuando “H.H” asumió la comandancia del bloque<sup>42</sup>.

Bajo la comandancia de “H.H”, Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni” es asignado como comandante del Frente Central entre 2001 y 2002; tenía bajo su mando aproximadamente 150 combatientes, entre urbanos y rurales. Fernando Oquendo Estrada alias “Ramiro”, actuó como comandante de los urbanos bajo órdenes de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni” entre 2002 y 2003; Úsuga fue sustituido por William Sánchez Velásquez alias “Julián”, quien fue asesinado en 2003. El último comandante de este Frente fue alias “Camilo” (sin identificar), entre 2003 y diciembre de 2004 momento de la desmovilización<sup>43</sup>. El siguiente cuadro representa, en el tiempo, el cambio de comandantes.

<sup>41</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 281  
<sup>42</sup> Informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010.

<sup>43</sup> Ibídem.



Frente Central		
Año	Fecha	Comandantes Militares
1999	Desde julio a agosto de 1999	Rafael Antonio Londoño Jaramillo, Alias "Rafa Putumayo"
	Agosto de 1999 a mayo de 2000	David Hernández Rojas, Alias "José" o "39"
2000	Desde 2000 hasta 2002	Juan de Dios Usúga David, alias "Giovani"
2002	Desde 2002 hasta 2003	William Sánchez Velásquez, alias "Julián"
2003	Desde 2003 hasta dic- 2004	Alias "Camilo" (sin identificar).
Año	Fecha	Otros Comandantes
1999	Agosto de 1999 a mayo de 2000	Roberto Vargas Gutiérrez, alias "Gavilán" o "marcos". Comandante de Zona o de urbanos.
	Agosto de 1999 a mayo de 2000	Alias el "Rolo" (sin identificar). Comandante en Tuluá
2000	Mayo de 2000 sin fecha precisa de terminación	Alias el "Rolo" (sin identificar). Comandante de urbanos del Frente
2000	Sin fecha precisa de inicio pero hasta el año 2002	Alias Gregorio (sin identificar). Comandante de urbanos del Frente
2000	Sin fecha precisa de inicio pero hasta el año 2002	Fernando Oqueda Estrada, alias "Ramiro", comandante de zona
2000	Sin fecha precisa de inicio pero hasta el año 2002	Jair Alexander Muñoz Borja, alias "Sisas". Comandante de escuadra
2002	Sin fecha precisa de inicio pero hasta el año 2003	Alias "Jorge" (sin identificar)
2003	Sin fecha precisa de inicio pero hasta diciembre de 2004	Alias "polocho" (sin identificar)
<b>Patrulleros/ urbanos:</b> alias "Clavijo", "Perea", "Norvey" y "Orlando", todos sin identificar, Élver Antonio Contreras Ortega alias "Peli Rojo".		

Fuente: elaboración propia a partir del informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010. Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza García, realizada el 07 de julio de 2011.

El segundo Frente fue el Cacique Carlarcá, con influencia en el departamento del Valle, en los municipios de Sevilla y Caicedonia y, en el Quindío, en los municipios de Carlarcá, Génova y Pijao<sup>44</sup>. Este frente pretendía cerrar el paso por la Cordillera Central entre los departamentos del Quindío y Tolima al bloque móvil de las FARC, en este caso, la Columna Móvil "Alirio Torres" de las FARC<sup>45</sup>.

Se independizó del Frente Central en el 2001, aunque su actuación comenzó en el año 2000 cuando Francisco Javier García, alias "Juan" o "Miguelito" o "Juan Miguelito" fungió como comandante y alias "Alfredo" (sin identificar), dirigía a los grupos urbanos entre 2000 y 2001.

Igualmente, alias "Carlos" (sin identificar), fue comandante entre 2001 y 2002; luego, por cinco meses, asumió el mando JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, alias "Sancocho" o "Martín". Finalmente, el frente estuvo dirigido por alias "Pipe" (sin identificar) entre 2002 y 2004, siendo los comandantes urbanos alias "Siete" (2001 y 2002), alias "Cebolla" (2002 y 2003) y alias "El Paisa" (2003 y 2004), todos sin identificar.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barney Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 282.

<sup>45</sup> Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza García, realizada el 07 de julio de 2011.

<sup>46</sup> Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza García, realizada el 07 de julio de 2011. Pag.14.

El tercer el Frente, denominado la Buitrera, se creó en el 2000 con el propósito de combatir a los Frentes "Víctor Saavedra" y "Alonso Cortés" de las FARC en los municipios de Palmira, Florida, Pradera, Candelaria, Cerrito, Amaime, Ginebra y Guacarí en el Valle y, miranda y Corinto en el Cauca<sup>47</sup>. El centro de operaciones fue el corregimiento de la Buitrera, municipio de Palmira. Este frente llegó a tener unos 150 hombres en sus filas, contaba con un lugar llamado el Chalet de la muerte en el Arenillo en Palmira, lugar destinado para llevar milicianos o auxiliares, ejecutarlos y enterrarlos en fosas comunes.<sup>48</sup>

En relación con la estructura militar, Fernando Oqueda Estrada, alias "Ramiro" fue el primer comandante del frente, hasta el 2002 junto con el comandante de urbanos alias "Julián" (sin identificar). Entre 2002 y 2004 se desempeñó como comandante del Frente Juan de Dios Úsuga alias "Giovanni", como comandante de urbanos en Palmira alias "Flaco Andrés" y en Santander de Quilichao, Pradera, Florida y en lugares específicos como Villa Gorgona, El Carmelo y Juanchito Armado Lugo alias "Cabezón", quien fungía a la vez como uno de los comandantes políticos del Bloque. Finalmente Jaime Caicedo Ramos alias "Pescadito" es reportado como comandante de urbanos en Miranda (Cauca)<sup>49</sup>.

Entre marzo y abril de 2000, se conformó el cuarto Frente denominado Pacífico. Fidel Castaño le ordenó a "HH" trasladarse al Valle y crear un nuevo bloque sobre la costa pacífica, para lo cual, debía contactarse con el Coronel retirado de la Policía Danilo González<sup>50</sup>.

Posteriormente, para el 11 de mayo del 2000 son escogidos y enviados desde el municipio de Tuluá 54 hombres<sup>51</sup> al casco urbano de Buenaventura,

---

<sup>47</sup> Ibídem.

<sup>48</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 283.

<sup>49</sup> Informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010

<sup>50</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 284

<sup>51</sup> "Los 54 hombres estuvieron al mando de Fredy Antonio Cadavid Acevedo alias "Luis"; seguido por los alias de ELKIN CASARRUBIA POSADA alias "El cura", Luis Alexander Gutiérrez Castro alias "El Capi", Franco Sisas y Bracho; quienes se desplazan en dos camiones portando armamento largo y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, igualmente iba un personal de las AUC vestido de civil, que "HH" enviaba para el casco urbano de Buenaventura, entre quienes se contaba con JUAN MAURICIO ARISTIZABAL RAMÍREZ alias "El Fino", "Chamara", "Chori", "El Cabo" y "El Enano" entre otros; el desplazamiento lo hicieron por los sitios de Tuluá, Río Frío, Media Canoa y en el cruce al corregimiento de Zabaletas en Buenaventura; allí se bajó el personal de civil enviado por "HH" y llegaron al casco urbano de Buenaventura". Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Pags.14-16

con el objetivo de crear el bloque pacífico e ingresar a la costa Chocoana, situación que no fue posible, ya que en dicho departamento, con antelación, venía operando el Bloque Pacífico bajo el mando de alias "Jhonatan", cuya área de influencia desde el Río Sanjuán hacía el norte del Chocó; por tanto, los hombres enviados por VELOZA tuvieron que adherirse al bloque Calima, conformando así, lo que se ha denominado el Frente Pacífico.<sup>52</sup>

El área de influencia de este frente se fue extendiendo en el 2000 a Calima, Darién y bajo Calima. Igualmente, ingresó por pocos meses a Guapi en el año 2001 en el Cauca con 30 integrantes bajo el mando de Yesid Enrique Pacheco Sarmiento, alias "El Cabo", pero se retiró porque fueron enfrentados por el ejército y, además, porque tenían inconvenientes con el Bloque Central Bolívar.<sup>53</sup>

Uno de los primeros comandantes de Frente fue John Henry Jaramillo Henao alias "el mocho", considerado el primer comandante del frente (entre el 2000 y 2002), cubriendo los municipios de Buenaventura, Dagua, Calima-Darién (Valle del Cauca), Guapi, Timbiquí y López de Micay (Cauca). Luego asumió la comandancia JOSE RUPERTO QUIROGA GARCIA, alias "El Gato", entre los años 2002 – 2003. Finalmente, alias "el Mono" (sin identificar) comandó el Frente desde el año 2003 hasta la desmovilización<sup>54</sup>.

Así mismo, Wilmar Valencia alias "Félix" fue el segundo al mando, asumiendo el control de algunos barrios de Buenaventura<sup>55</sup>. Por otro lado, Yesid Enrique Pacheco alias "El Cabo" fue otra figura clave en Buenaventura y Guapi.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibidem*.

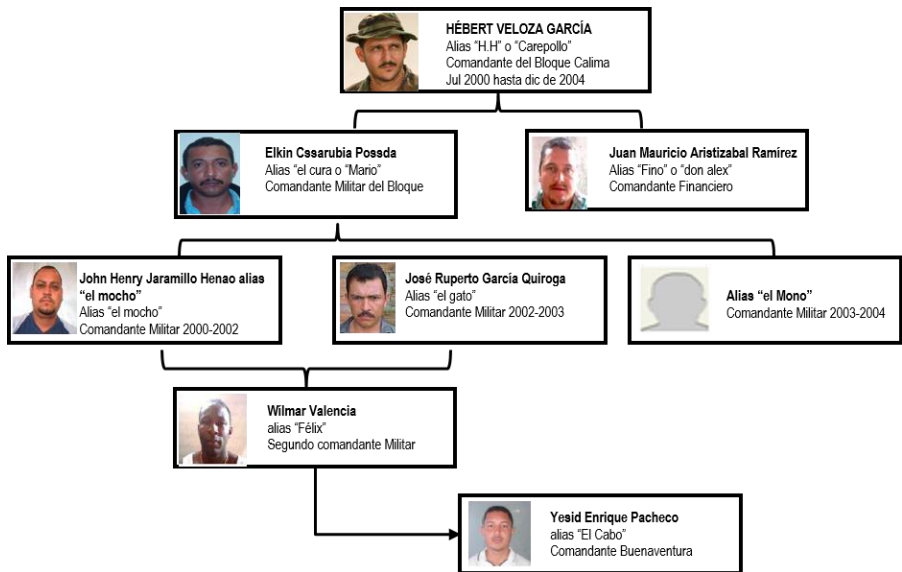
<sup>53</sup> "Este frente Pacífico ingresa por unos pocos meses en el año 2001 al municipio de Guapi en el departamento del Cauca, con 30 integrantes bajo el mando de YESID ENRIQUE PACHECO SARMIENTO alias "EL CABO", quien hace incursiones a municipios cercanos y costeros de ese departamento como Timbiquí y López de Micay, pero el personal se retira debido a que el Ejército les da un duro golpe dando de baja a varios de sus integrantes y les decomisan varios fusiles.; otra de las razones por la cual se retiran de Guapi, es que se empieza a tener inconvenientes con personal de las AUC del Bloque Central Bolívar que hacían presencia allí, provenientes del departamento de Nariño". *Ibidem*

<sup>54</sup> *Ibidem*

<sup>55</sup> "Los barrios en los cuales había presencia eran Virgen y Centro de la Comuna 1; Alberto Lleras de la Comuna 3; Piedras Cantan de la Comuna 4; Jardín de la Comuna 6; Juan XXIII, San Luis Eucarístico de la Comuna 7; Bellavista, Cristal, Olímpico, Transformación de la Comuna 8; R9, 6 de enero, 12 de abril de la Comuna 9; Panamericano, Cascajal, Colón de la Comuna 11; y Triunfo, Retén, las Palmas, Cambio, Caldas, Frontera, Unión de Vivienda, Nueva Granada y Nuevo Amanecer de la Comuna 12". Véase: Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenaventura: un puerto sin comunidad. Bogotá, CNMH, 2015. pág. 98.

<sup>56</sup> Para el caso de Buenaventura, se reportan los siguientes "urbanos": *El Paisa, Moisés, Cuatro, Milagrito, Sombra, Juancho, Valencia, Nando, Marvin*, entre otros. En zona del barrio Juan XXIII, cuyo comandante era *Becho*, actuaban los urbanos *Tumba, Malo, Larry, Soldado, Papachivo, Coco, Camisa, Tocayo, Monchi, Línea, Marco*, entre otros. En la zona del barrio El Cristal, al parecer, el comandante era *Tábano*, con el apoyo de los urbanos *Arley, Bola 8, Chaperra*,





Fuente: elaboración propia a partir del informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010. Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra Hébert Veloza García, realizada el 07 de julio de 2011.

Estratégicamente el Frente Pacifico fue una subestructura importante para la organización, en primer lugar, porque en la zona se recolectaba la mayor parte de finanzas producto al cobro de gramaje sobre estupefacientes que eran exportados por la ruta de la costa pacífica<sup>57</sup>; estos recursos servían para el pago de nómina y los medios logísticos del Bloque. En segundo lugar, porque era una ruta importante para la entrada de armas provenientes de centro América.<sup>58</sup>

El quinto Frente llamado Farallones se extendió hacia tres departamentos Valle, Cauca y Huila. De hecho, la primera región donde incursionó fue el Valle del Cauca a través de lo que se ha denominado el Frente Yumbo, una subestructura independiente, toda vez que: (i) fue una de las primeras zonas donde incursionó el Bloque, (ii) adquirió financiación de la venta del combustible hurtado y, (ii) mantuvo presencia armada hasta la desmovilización del Bloque Calima.<sup>59</sup>

Shakira, Héctor, Conga, Boluga, entre otros. En los barrios El Triunfo y La Virgen son reportados los urbanos: Jubilado, Linterna, Gorrita, Chimpa, Lan, León, Sargento, Yan, Morado, Cocacolo, Rizado, Quinche. Informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010

<sup>57</sup> "el Frente Pacífico encargado del área financiera de la estructura, cuya principal fuente lo constituyeron las actividades relacionadas con el narcotráfico". Op cit., Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015. pág. 92.

<sup>58</sup> Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Pags.14-16

<sup>59</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 285.

De este modo, dicha subestructura tuvo injerencia en: Yumbo, Yotoco, Restrepo, la Cumbre, Rozo, Dagua y Cali. Según lo documentado por el ente fiscal, el comandante del Frente fue Francisco José Moreno Peñate alias “Sarley”, Como segundo comandante Robert Enrique Oviedo Yanez “El Chacal”. Así mismo, algunos de los urbanos o patrulleros de esta región eran alias “Alex” o “Lepra”, “Lucumí”, “Robocop”, “El Burro”, “Guacamayo”, “El Indio” y “Gildardo”<sup>60</sup>.

Así mismo, a partir de junio de 2000, en el mismo Frente Farallones es creado un grupo a cargo de ELKIN CASARRUBIA POSADA alias “El Cura” o “Mario”, quien ingresa a Jamundí, al tiempo que es nombrado comandante militar del Bloque Calima por H.H en la finca La Yolanda en Timba (Cauca). Igualmente, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ alias “Sancocho” o “Martín” es designado comandante de los urbanos en Jamundí (Valle) y en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Puerto Tejada (Cauca)<sup>61</sup>.

Para el año 2001 el Frente Farallones fue extendiendo sus acciones desde el norte del departamento a otros municipios del centro y sur del departamento del Cauca como Morales, Piendamó, Popayán, Timbío, El Tambo, Rosas, Patía, Balboa, Mercaderes, Florencia y La Sierra, llegando a tener presencia tanto urbana como rural en 22 municipios de los 42 que tiene el departamento del Cauca.<sup>62</sup> Valga señalar para efectos de esta decisión que como patrullero urbano de Timbío estuvo JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA alias “el Gato”, “Alejandro” o “El médico”, quien también operó con el mismo rol en el municipio de Guadalupe Huila desde 2002.

Así mismo, se tiene como referencia que para enero de 2001, ingresa al norte de la ciudad de Popayán, un grupo de urbanos que adelantó operaciones

---

<sup>60</sup> Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Pags.14-16. También: Informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010

<sup>61</sup> Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Pág. 18. También Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 287.

<sup>62</sup> Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Ibídem, pág. 19. Así mismo, “a partir del mes de noviembre de 2001, las AUC amplían su radio de acción en todo el Valle del Patía, por la vía Panamericana, hasta el municipio de Mercaderes, Florencia y Balboa; en el mes de febrero de 2002 alcanzaron un control militar total en poblaciones como Patía, El Estrecho, Galíndez, Mojarras, Lomitas y Mercaderes”. Ibídem.

en el barrio Bosques del Pinar<sup>63</sup>, cuyos comandantes fueron: alias “Curry” entre 2000 y 2001 (sin identificar); Rubén Darío Cano Trujillo, alias “Cepillo” entre 2001 y 2002; alias “Rafael” entre 2002 y 2003 y alias “Amauri” o “El Médico” entre 2003 y 2004 (sin identificar)<sup>64</sup>.

De lo documentado por el ente fiscal hasta el momento, como comandantes en los municipios del Cauca, son identificados por el propio “H.H” los siguientes: en Jamundí, alias “Pájaro” en 2002 y alias “Gabelo” entre 2002 y 2004; en Santander de Quilichao, alias “Gonzalo”, quien operó hacia el 2002; en Puerto Tejada es reportado Carlos Caicedo Ramos, alias “Pescadito”; <sup>65</sup> en el municipio de Patía (cabecera municipal el Bordo), entre el 2002 al 2004, Robert Enrique Oviedo Yanez, alias “Nelson”, Oscar Junior Márquez, alias “J.C” y JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA, alias “Romario”<sup>66</sup>.

En Timba (Valle y Cauca) estuvo Alcides Hinestroza alias “Pirry”; en El Tambo y Guadalupe actuó JAVIER FRANCO, alias “Maicol” o “Boris”. Así mismo, es de destacar que como patrullero actuó JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS, alias “Pelirojo”, “Camilo” o “Loco”; en Balboa operó alias “Nelson” y “Tiesto”. En Timbío, el comandante fue John Jaime Cárdenas Suárez alias “Fosforito”.<sup>67</sup>

Finalmente, a mediados del año 2002, el Bloque Calima de las AUC hace su aparición en el sur del departamento del Huila, en los municipios de San José de Isnos, Acevedo, Guadalupe, Pitalito, Gigante, Algeciras y San Agustín zona donde operaba el Bloque Central Bolívar y que era comandada por Alias “Richard” o “Pablo”. No obstante, la mayor injerencia de operaciones se ejerció sobre el municipio de Pitalito.<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> “En mayo del mismo año aparece en la ciudad de Popayán un nuevo panfleto donde se amenaza a líderes de organizaciones sociales y a seis alcaldes, entre ellos al Alcalde de El Patía, JESUS ALARCON BURBANO”. *Ibidem*

<sup>64</sup> Informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010

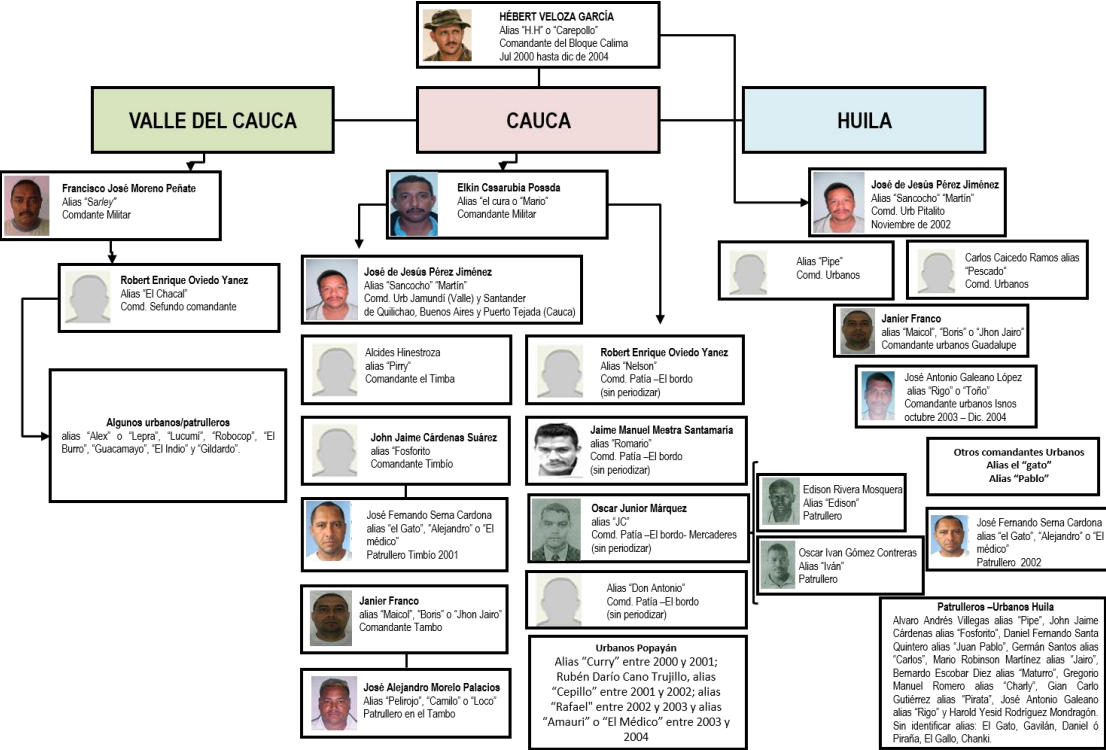
<sup>65</sup> Informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010

<sup>66</sup> “En enero de 2001 aparece en las calles de El Bordo el primer panfleto a nombre de las AUC en donde hacen amenazas a la población y dan instrucciones para que la comunidad urbana asuma algunos comportamientos como horarios de circulación, control de la actuación de adolescentes, etc”. Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Pág. 21.

<sup>67</sup> *Ibidem*

<sup>68</sup> *Ibidem*, pág. 23.

Según lo reportado por el ente acusador, en este departamento actuaron como comandantes JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ alias “Sancocho” o “Martín”. Así mismo, alias “Pipe”, Luis Omar Marín alias “Matías” o “Cepillo”, Carlos Caicedo Ramos alias “Pescado” hasta finales del año 2003 cuando el Bloque Calima entregó el control armado de la zona al Bloque Central Bolívar.<sup>69</sup> Así mismo, actuaron como comádate de urbanos: en Isnos JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ, alias “Rigo” o “Toño” y JANIER FRANCO, alias “Maicol”, “Boris” o “Jhon Jairo” en el municipio de Guadalupe.



Fuente: elaboración propia a partir del informe de policía judicial de la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, 7 de diciembre de 2010. Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Informe de policía judicial N° 80786 del 10 de octubre de 2013.

**Fuentes de financiación.** El referido “posicionamiento y expansión” del Bloque se logró con financiación proveniente del impuesto de gramaje al narcotráfico, equivalente a 100 dólares por kilo de cocaína exportado desde el

<sup>69</sup> “VICENTE CASTAÑO ordena a HÉBERT VELOZA GARCÍA enviar un personal al departamento del Huila, zona de entrada y salida de la guerrilla. VELOZA envía a alias “Sancocho” con unos treinta hombres. El grupo llega a PITALITO, SUAZA, ALTAMIRA, GARZÓN, LA PLATA, GIGANTE y ALGECIRAS. Cuando llega JOSE DE JESUS PEREZ JIMENEZ alias MARTIN O SANCOCHO, en el mes de octubre ó noviembre del año 2002, se reúne al personal de las AUC que había en Pitalito – Huila, y se les comunicó que desde ese día pasaban a formar parte del Bloque Calima; bajo el mando de MARTIN, siendo segundo alias PESCADO (CARLOS ALBERTO CAICEDO RAMOS) y dejaron de comandante en Pitalito a alias RICHARD. Luego que sale JOSE DE JESUS PEREZ JIMENEZ DEL HUILA, asume el mando a alias “PIPE” quien a su vez lo cede a LUIS OMAR MARIN alias “CEPILLO ó MATIAS”, y por último CARLOS CAICEDO RAMOS alias “PESCADO” hasta finales del año 2003, cuando sale el bloque Calima del Huila y le entregan la zona al Bloque Central Bolívar”. Ibídem.

puerto de Buenaventura<sup>70</sup>. Igualmente, el hurto de hidrocarburos; de tal manera que los dos pasos de combustible con los que cuenta el departamento, fueron objeto de perforación<sup>71</sup>.

Además, la financiación fue asumida por algunos empresarios de la caña de azúcar<sup>72</sup>, comerciantes y ganaderos. Otra de las principales fuentes directas de financiación junto con el hurto de hidrocarburos y de ganado fue el secuestro, en especial, de aquellas personas que se negaban a pagar por el tributo de gramaje<sup>73</sup>.

Valga señalar que los dineros recaudados se destinaban para el pago de la nómina, (en un mes ascendía a una suma de mil y dos mil millones de pesos), compra de armamento y material de intendencia, entre otros.

**Escuelas.** El entrenamiento de los hombres se efectuó en la vereda San Miguel en Buenos Aires y en Calima Darién –incluso- en algunas de las prácticas se utilizaron niños. El encargado de las instrucciones y reclutar personas para la instrucción fue alias “El Cura”, de tal manera que entre 500 y 600 hombres logró incorporar durante la existencia del Bloque. La instrucción estaba dirigida a contingentes de 100 o 120 hombres<sup>74</sup>.

**Relaciones con actores sociales y políticos.** Se indicó que el Bloque Calima desplegó una estrategia política en cabeza de Carlos Efrén Guevara Cano,

---

<sup>70</sup> Véase: Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafos 11 y 12.

<sup>71</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 296

<sup>72</sup> “La colaboración que prestaban los ingenios azucareros estaba la parte logística, toda vez que la gran mayoría de los jefes de seguridad de estas empresas, fueron miembros de las fuerzas militares o de la policía, y contaban con la infraestructura necesaria para ello”. Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011. Pág. 34.

<sup>73</sup> “Quienes se negaban cancelar las contribuciones arbitrarias exigidas por este grupo paramilitar, eran víctimas de amenazas, intimidaciones, retenciones y atentados en contra de su vida, con la finalidad adicional de constituir referentes intimidatorios para la población”. Véase: Sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil doce 2012 contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez. MP. Léster María González Romero. Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá Sala de Justicia y Paz. Radicado: 110016000253200880786. Párrafos 13.

<sup>74</sup> “Dos de los sitios que se tiene conocimiento que los integrantes del bloque Calima los tenían como centros de instrucción militar fueron: un sitio en la vereda Sanmiguel, municipio de Buenos Aires Cauca, cercano a la escuela de niños de la vereda, el otro centro de entrenamiento estuvo ubicado en municipio de Calima Darién por la vía a Salónica, cerca de unas pineras de Cartón de Colombia”. Informe de policía judicial N° 1099 de abril de 2011, presentado en audiencia de legalización de cargos contra HÉBERT VELOZA GARCÍA, realizada el 07 de julio de 2011.

alias “Fernando”, con el objetivo de contactar a los políticos de la zona, en especial, alcaldes, senadores y gobernadores, y difundir la ideología política de la organización. La labor de difusión estaba en manos de Francisco José Morelo Peñata alias “Sarley”, Teodocio Pabón Contreras alias “Camilo”, “Andrés” o “Profe” y Armando Lugo alias “Cabezón”<sup>75</sup>.

A pesar de que el Bloque Calima no fue parte de la concreción de una política institucional o de Estado, sí contó con el apoyo del Ejército a través del Coronel Alfonso Nanny Jiménez del batallón Palacé de Buga, Valle del Cauca, así como de la Policía y la Armada<sup>76</sup>.

**Desmovilización.** El bloque Calima se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 en la finca “El Jardín” del corregimiento de Galicia del municipio de Buga La Grande, departamento de Valle del Cauca. En la ceremonia hicieron presencia 564 hombres, de los que 27 eran menores de edad, quienes entregaron 354 fusiles, 1 Uzi, 8 escopetas, 11 subametralladoras, 2 carabinas, 9 pistolas, 34 revólveres, 5 ametralladoras, 3 lanzagranadas, 2 lanzacohetes, 152 granadas, 68222 cartuchos de munición, y 1164 proveedores<sup>77</sup>.

## **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

### **COMPETENCIA**

De conformidad con el inciso 2, artículo 16 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 12 de la ley 1592 de 2012, de aplicación armónica con los artículos 24 y 29 ejusdem, modificado el primero de ellos por el 25 de la ley 1592 de 2012, las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes para conocer, fallar

---

<sup>75</sup> Véase: Providencia de octubre 31 de 2012 contra José Barnery Veloza García. MP. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado 2006-80585. Párrafo 298.

<sup>76</sup> Ibídem, 299.

<sup>77</sup> Ibídem, párrafos 14 y 15.

e imponer la pena alternativa de cinco a ocho años de prisión a aquellos miembros de grupos organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz.

De igual modo, al tenor del párrafo del artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012, y el artículo 36 del decreto 3011 de 2013, las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores son competentes para conocer de las solicitudes de sentencia anticipada impetradas por la defensa de los postulados o de la Fiscalía General de la Nación, cuando los hechos que se les imputen hagan parte de un patrón de macro-criminalidad previamente determinado en alguna de las sentencias proferidas por la jurisdicción, con fundamento en los criterios de selección, pero además, siempre que se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas.

Establecido el marco normativo de análisis para el estudio de la solicitud de sentencia anticipada pretendida por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada en el presente asunto, resulta pertinente aclarar que en sustento de la misma adujo que la providencia proferida el 4 de septiembre de 2012 declaró como verdad<sup>78</sup> “f.) *Que el Bloque Calima adoptó patrones de conducta constitutivos en crímenes de guerra y de lesa humanidad, consistentes en la comisión de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros contra personas protegidas y, con la apropiación y destrucción de bienes y lugares protegidos, siendo los pobladores de la región instrumentalizados, principalmente con el argumento de pertenecer o colaborar con la Subversión*”.

Por lo tanto, insiste en que los hechos que ahora son objeto de estudio, y que corresponden en su integridad a los que se tomaron como fundamento para condenar a Gian Carlo Gutiérrez Suárez, hacen parte de esos patrones de macrocriminalidad, por ende, que nada obsta para darle un tratamiento de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales reseñadas en los párrafos precedentes.

---

<sup>78</sup> Sentencia de septiembre 4 de 2012 en la actuación Radicado 2008-80786 seguido contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez. M. P. Léster María González.

No obstante, del análisis de la petición impetrada se colige que la misma no se ajusta en manera alguna a las previsiones contenidas en el artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012, como se expondrá a continuación.

Lo anterior, básicamente porque de la simple lectura de la norma reseñada se extrae que los hechos imputables en la actuación anticipada deben hacer parte de un patrón de macrocriminalidad previamente determinado en alguna de las sentencias proferidas por la jurisdicción transicional, de acuerdo con los criterios de selección y siempre que hayan sido identificadas las afectaciones causadas a las víctimas; situación que en manera alguna se desprende de la fundamentación aportada por el ente investigativo, entre otras razones, porque la sentencia condenatoria de la que se pretende derivar tal conclusión fue proferida el 4 de septiembre de 2012, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, que entró a regir el 3 de diciembre siguiente.

Tampoco resulta dable admitir, en gracia de discusión, que de los elementos constitutivos de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, con ponencia de la magistrada Léster María González Romero, pueda predicarse la satisfacción de los requisitos incorporados en la legislación mencionada en cuanto a los patrones de macrocriminalidad se refiere, pues de la lectura de dicha decisión no se desprende tal conclusión. Así mismo, por cuanto en el presente trámite no se acreditó que la Fiscalía los hubiese cumplido al momento de formular la imputación de los hechos o de sustentarlos ante la Sala de Conocimiento.

En efecto, de conformidad con el párrafo del artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012, tenemos que:

*"Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro-criminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que ésta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente Ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La*



*terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa”.*

De igual forma, el artículo 36 del decreto 3011 de 2013, por razón del cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, indica:

*“(...) el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso cuando los hechos que se le imputen hagan parte de un patrón de macro-criminalidad que ya haya sido esclarecido en alguna sentencia dictada en el marco del proceso penal especial de justicia y paz, y hayan sido identificadas las afectaciones causadas a las víctimas correspondientes.*

*El Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán informar al postulado sobre su derecho a solicitar la terminación anticipada del proceso cuando se presenten las circunstancias descritas en el presente artículo.*

*Una vez formulada la imputación, en cualquier etapa del proceso el postulado o su defensor podrán solicitar a la Fiscalía General de la Nación su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso. Con fundamento en lo dispuesto en el Plan Integral de Investigación Priorizada, el fiscal delegado apoyará o no la solicitud de terminación anticipada del proceso del postulado. El fiscal delegado sustentará su posición teniendo en cuenta el análisis sobre los patrones de macro-criminalidad atribuidos a cada una de las estructuras y subestructuras.*

*Cuando el fiscal delegado considere que la solicitud de terminación anticipada del proceso procede, solicitará audiencia ante la Sala de Conocimiento, para sustentar su posición. La Sala de Conocimiento verificará que el postulado solicitante hizo parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz y que se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas de dicho patrón. En caso afirmativo, la decisión de terminación anticipada se incorporará en la sentencia y se procederá a la lectura de la misma.*

*Cuando la Sala de Conocimiento constate que no se han identificado las afectaciones causadas a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional, según lo dispuesto en el parágrafo 4 del presente artículo. Culminado este incidente, la Sala de Conocimiento procederá a resolver la solicitud de terminación anticipada.*

*En caso de que no proceda la terminación anticipada del proceso, éste continuará en la etapa procesal en la que se encontraba.*

*Si la solicitud de terminación anticipada del proceso sucede durante la formulación de la imputación, el Magistrado con funciones de control de garantías deberá remitir el expediente a la Sala de Conocimiento para que ésta proceda a proferir sentencia. Si la solicitud de terminación anticipada del proceso, ocurre con posterioridad a la formulación de la imputación, la Sala de Conocimiento procederá a decidir al respecto, sin que sea necesario que la actuación sea previamente remitida al magistrado con funciones de control de garantías”.*

Así las cosas, no resulta pertinente hablar en el presente caso de una sentencia anticipada en los precisos términos de la normatividad invocada para el efecto.

En tal sentido, valga la pena reseñar apartes de las decisiones que se han proferido en esta jurisdicción en lo relativo a los patrones de macrocriminalidad y que sirven de fundamento y criterio orientador para entender en la práctica lo que ha de entenderse por tales, en específico, las proferidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con ponencia del magistrado Eduardo Castellanos Roso, que datan de septiembre 10 de 2014, contra algunos integrantes del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas y de diciembre 16 siguiente, contra alias “Botalón” y otros postulados de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.

En la primera de las decisiones mencionadas se indicó, en lo que tiene que ver con los patrones de macrocriminalidad, que

*“El sistema planteado por el Acto Legislativo no consiste en la simple reunión de casos, sino que implica la construcción de macro-procesos en torno a una serie de elementos comunes determinados por factores relacionados con la gravedad y la representatividad tales como el lugar, el tiempo, la forma de comisión, los sujetos pasivos o grupos sociales afectados, los sujetos activos, la escala de comisión o la evidencia disponible. En virtud de esta situación se puede erigir un proceso por una determinada modalidad de delito que sea cometido en una región concreta de Colombia, durante un tiempo determinado, por un grupo de personas y contra un sector específico de la población, el cual sea a su vez representativo de los que tengan las mismas características o una estrategia que sea representativa de la comisión del delito en varias regiones del país.*

*916. Esta forma de investigación permite la revelación de las estructuras de macrocriminalidad y facilita la construcción de verdades individuales y colectivas que van más allá de casos aislados y que permiten determinar las causas de la violencia, favoreciendo el proceso de justicia transicional. En este sentido, se pretende obtener la identificación de los patrones de violencia, el grado de victimización, el efecto para una posible disuasión y reconciliación y la obtención de la verdad. Los criterios de representatividad y gravedad fueron incluidos en el primer debate en la segunda vuelta en el Senado de la República con la siguiente motivación: “En tercer lugar, el inciso establece que “los criterios de selección deberán tener en cuenta la gravedad y representatividad de los casos”.*

Por tal razón y, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se consideró en dicho pronunciamiento que

*“(…) el proceso de Justicia Transicional que actualmente adelanta Colombia debe ser interpretado de forma sistemática e integral, por ende los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración; Justicia y Paz; Ley 1448 de 2011 y los que se adelanten en el contexto del llamado Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012) deben responder a lógicas incluyentes y complementarias, de tal manera que permitan orientar y consolidar los esfuerzos de todos los entes (Estado, Sociedad Civil y Comunidad*

*Internacional) que buscan la realización de los derechos de la sociedad colombiana a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En ese sentido, la generación de procedimientos que permitan que la investigación y judicialización de conductas delictivas cometidas por miembros de GAOML se haga de una forma más efectiva y eficiente, redundará en la consolidación de la justicia. Por ello es que no pueden hacerse lecturas parciales o incompletas en torno a los procesos de selección y priorización de hechos delictivos y a la forma como serán abordados éstos cuando se trate de crímenes de sistema (crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra), es decir a la construcción de patrones de macro criminalidad por parte de la Fiscalía, en especial en desarrollo del proceso de la Ley 975 de 2005”.*

Por otra parte, con base en los documentos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se consideró en la decisión reseñada que para efectuar un análisis de los patrones de macrocriminalidad, resultaba indispensable efectuar un análisis interdisciplinario utilizando los métodos de análisis de ciencias como la economía, la sociología y la ciencia política, de las cuales describe algunos de sus elementos constitutivos. No obstante, al margen de tales detalles propone los siguientes para entender la constitución del patrón de macrocriminalidad.

*a. Un patrón debe ser de fácil reconocimiento, lo que significa, que debe contar con las fuentes de información y las herramientas de procesamiento de datos que permitan verificar empíricamente su existencia.*

*b. Un patrón debe identificar las diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se presenta. Esto implica abordar perspectivas multicausales en el análisis de los comportamientos criminales de las estructuras armadas que se acogen a los beneficios de la justicia transicional.*

*c. Un patrón debe operar a nivel de estructuras sociales, políticas y económicas, y no a nivel de individuos aislados. Esto presupone por ejemplo, que la identificación de patrones de comportamiento criminal, deben enfocar su atención tanto en los roles de cada grupo social que es victimizado dentro de un contexto de conflicto armado, así como las lógicas de violencia a nivel del grupo armado ilegal. Esto significa que la unidad de análisis de los patrones de criminalidad no debe ser la víctima en su manera singular sino la víctima dentro de un contexto de relaciones sociales, políticas y económicas. Igualmente, esto significa que se debe analizar la interacción de los diferentes comandantes y patrulleros bajo ciertos códigos de lenguaje y reglas organizacionales, y no analizar su accionar de manera aislada.*

*d. Para la identificación de patrones, se deben utilizar diferentes herramientas cualitativas (entrevistas, grupos focales con víctimas y victimarios, fuentes documentales) y cuantitativas (análisis estadístico de datos, correlaciones, regresiones, etc.) de análisis para probar y sustentar su existencia.*

No obstante, para el entendimiento de este asunto, valga mencionar que la Sala rechazó la presentación de los casos priorizados seleccionados por la Fiscalía con fundamento en lo siguiente:

(i) *No se utilizó el concepto de patrón criminal definido por los estándares contruidos por la Fiscalía, básicamente, por cuanto redujo el concepto de patrón criminal y lo limitó a tipos penales. Recordó que la misma Directiva 001 de 2012 de la FGN, definió el patrón como un conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un período de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por un GOML;*

(ii) *No existen criterios metodológicos claros para identificar elementos como el universo de víctimas, las unidades de análisis, las muestras, etc. Metodológicamente la Fiscalía agrupa delitos o hechos criminales, pero no analiza los elementos que constituyen un patrón criminal. La Fiscalía asumió que todos los homicidios, todas las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzados ocurren de la misma manera, por los mismos modus operandi y responden a unas prácticas particulares.*

(iii) *Ausencia de enfoque multidisciplinario.*

(iv) *Las fuentes de información no se verificaron o contrastaron. Adujo en este punto que la única información que se tuvo en cuenta fue la proporcionada por los postulados sin haber hecho ningún tipo de averiguación adicional, es decir, que se le creyó ciegamente en los victimarios. Este yerro, en consideración de la Sala no sólo implica una falta de rigurosidad en la investigación, sino que, además, implica el resquebrajamiento de la dignidad de las víctimas, pues se tiene como cierto que los delitos cometidos se justifican en la pertenencia de éstas últimas a grupos subversivos.*

Finalmente, se determinó el incumplimiento de las previsiones normativas del artículo 17 del decreto 3011 de 2013 que establece que para reconocer un patrón de macrocriminalidad se debe *"identificar la finalidad ideológica, económica o política de la victimización y en caso de que la hubiere, su relación con características de edad, género, raciales, étnicas o de situación de discapacidad de las víctimas, etc."*

No obstante, lo dicho hasta el momento no comporta la inviabilidad del pronunciamiento de la Sala, pues a pesar de que el mismo no ha de serlo por la vía de la sentencia anticipada en los específicos términos del artículo 18 reseñado, sí lo será con fundamento en las previsiones normativas diseñadas para el proferimiento de una sentencia condenatoria ordinaria de conformidad con el artículo 24 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 25 de la ley 1592 de 2012.

En sustento de esta afirmación ha de decirse que la Sala advierte, con fundamento en la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Delegada, que los hechos objeto de controversia en la presente actuación hacen parte de una sentencia condenatoria proferida por la Sala de Justicia y

Paz del Tribunal de Bogotá como ya se ha expuesto con suficiencia<sup>79</sup>. De igual modo, que las afectaciones causadas a las víctimas fueron establecidas en la misma providencia, salvo por las de un par de víctimas respecto de las cuales fue necesario tramitar el incidente de reparación integral en la presente actuación. Por último, que de lo que se trata en el fondo de este asunto, es imponer responsabilidad a los restantes participantes de los hechos en calidad de autores mediatos, ora de autores materiales, según corresponda.

En este sentido, la Sala procederá a dictar sentencia, respecto de los hechos que ya fueron objeto de pronunciamiento en la decisión de fondo proferida en contra del postulado Gian Carlo Gutierrez y para tal fin revisará los requisitos de elegibilidad y analizará la responsabilidad de cada uno de los aquí postulados, de cara a esos hechos.

### **REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD**

Conforme a lo demostrado en la sentencia proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá<sup>80</sup>, cuya ponencia le correspondió a la magistrada Léster María González Romero, resulta evidente que los requisitos de elegibilidad fueron cumplidos a cabalidad.

Así las cosas y, sin que resulte procedente un análisis distinto al allí consagrado, es claro que se dio pleno cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 10 de la ley 975 de 2005, por razón del cual los miembros de un grupo organizado al margen de la ley "*que hayan sido imputados o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la*

---

<sup>79</sup> Providencia de septiembre 4 de 2012. MP. Dra. Léster María González Romero. Radicado 2008-80786.

<sup>80</sup> Sentencia de septiembre 4 de 2012 en la actuación Radicado 2008-80786 seguido contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez.

*Nación...*", tiene derecho a reclamar los beneficios consagrados en la ley 975 de 2005.

De manera adicional, se indicó en la providencia referida, que también se dio cumplimiento a los requisitos adicionales contenidos en la norma reseñada, en concreto, en lo que tiene que ver con (i) que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional, (ii) que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal, (iii) que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados, (iv) que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita, (v) que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, y (vi) que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

De acuerdo con lo anterior, se puede verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en el orden en el que fueron presentados en el párrafo anterior, de la siguiente manera:

**(i). Desmovilización y desmantelación del grupo ilegal.** Se indicó en primer lugar, que a la actuación se allegó la resolución presidencial 233 de noviembre 3 de 2004 en la que se reconoció como miembros representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia a HEBERT VELOZA GARCÍA alias "HH", Iván Roberto Duque Gaviria y Salvatore Mancuso Gómez. Así mismo, la resolución 297 de diciembre 10 de 2004 que determinó como zona de ubicación temporal para los integrantes el Bloque Calima la finca denominada "El Jardín", ubicada en el corregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande del Departamento del Valle.

Por otra parte, la providencia reseñada declaró probada que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le reportó al Fiscal General de la Nación, mediante oficio No OFI08-000015446/AUV12300 del 18 de febrero de 2008, la desmovilización del Bloque Calima y la entrega de 354 fusiles, 1 Uzi, 5 escopetas, 11 subametralladoras, 3 escopetas, 2 carabinas, 9 pistolas, 34 revólveres, 5 ametralladoras, 3 lanzagranadas, 2 lanzacohetes, 152 granadas,

68.222 cartuchos de munición y 1164 proveedores, en cumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional en Santafé de Ralito.

**(ii). Entrega de bienes.** En cuanto a la entrega de bienes, correspondiente al segundo requisito, se probó en la actuación adelantada por la Sala de Conocimiento<sup>81</sup>, que la Fiscalía acreditó la entrega de bienes por parte de HÉBERT VELOZA GARCÍA alias “HH”, representante del Bloque Calima, con la finalidad de contribuir con la reparación de las víctimas. De igual modo, que lo bienes fueron afectados con medida cautelar de embargo y suspensión del poder dispositivo.

En efecto, se registró la entrega de los siguientes bienes:

A. En el Municipio de Ebejicó, Antioquia, los siguientes lotes de terreno:

- A.1. Lote San Marino, folio de matrícula inmobiliaria 029-0000662.
- A.2. Lote Hicoteas, folio 029-0000663.
- A.3. Lote El Saladito, folio 029-0000664.
- A.4. Lote El diamante, folio 029-0000665.
- A.5. Lote de terreno, folio 029-0000666.
- A.6. Finca Pocuna, folio 029-00006152.
- A.7. Lote Peña Lisa, folio 029-00005400.

B. En el Municipio de Caldas, Antioquia, los siguientes bienes:

- B.1. Predio Rural Paraje Salinas, folio 001-195279.
- B.2. Predio urbano constitutivo de un Lote y una Casa que hizo parte de la finca Margarita, Paraje Salinas, folio 001-79344.
- B.3. Hacienda Hato Grande, folio 001-775837.

C. En el Municipio de Turbo, Antioquia, el predio urbano (edificio) ubicado en la Carrera 20, con folio 034-7047.

---

<sup>81</sup> Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. M. P. Dra. Léster María González Romero.

D. En Envigado el predio constitutivo de un Lote y Casa ubicado en la Carrera 36 A No. 20 A Sur 91, con folio 001-356136.

**(iii) Entrega de menores de edad.** El tercero de los requisitos también se observa satisfecho, pues se reportó la entrega de los menores que hacían parte del grupo, la cual quedó registrada en el oficio UNJP 004847 de junio 17 de 2008, suscrito por el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, en el que se relacionó un total de 27 menores<sup>82</sup>.

En tal sentido, se acreditó en el fallo revisado<sup>83</sup> que en oficio 14320-009721 de abril 2 de 2007 de la Subdirección de Intervenciones Directas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó al Fiscal Delegado para la Justicia y la Paz que desde el 17 de diciembre de 2004 habían ingresado al Programa de Atención Especializado del ICBF un total de 27 adolescentes miembros Bloque Calima.

**(iv) Cesación de toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.** Respecto al cuarto requisito, esto es, el de cesación de interferencia al libre ejercicio del Derecho Político y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita se acreditó, en oficio 2011 del 16 de julio de 2007, suscrito por Armando González y Claudio Pulido Espinal, Delgados de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el Departamento del Valle del Cauca, que no existía registro de denuncias contra ningún miembro del Bloque Calima, por razón de conductas que perturbaran los mecanismos de participación ciudadana.

---

<sup>82</sup> El siguiente es el listado de los menores entregados al ICBF: Cristian Andrés Arenas Ramírez, de 16 años de edad. Dimesdes Arteaga Aguirre, de 17 años de edad. Edgar Andrés Sánchez Gallego, de 13 años de edad. Ernesto Aguirre Ruiz, de 15 años de edad. Evangelista Escobar Mosquera, de 17 años de edad. Fernando Castañeda Viveros, de 16 años de edad. Giovanni Andrés López Quirama, de 17 años de edad. Gustavo Adolfo Rosero Muñoz, de 16 años de edad. Helio Mauricio García Marín, de 17 años de edad. Iván David Colorado Urrea, de 17 años de edad. Jesús Chávez Caicedo, de 17 años de edad. John Eimar Moreno Londoño, de 16 años de edad. John Jairo Cruz García, de 16 años de edad. Jorge Luis Valencia Betancourt, de 15 años de edad. Juan Camilo Galvis Betancourt, de 17 años de edad. Juan Carlos Gil Cardona, de 17 años de edad. Juan Carlos Gil Cardona, de 17 años de edad. Listh Vanesa Rada Benavides, de 17 años de edad. Luis Fernando Sanmartín Valencia, de 17 años de edad. Oscar Andrés Rosero Grisales, de 16 años de edad. Ricardo Carabalí, de 16 años de edad. Robinson Calle Marín, de 17 años de edad. Robinson Muñoz García, de 17 años de edad. Víctor Alfonso Muñoz Gallego, de 17 años de edad. Wilfram Montezuma Caicedo, de 18 años de edad. Jair Amaya Vélez, de 16 años de edad. John Alexander Castro Montes, de 16 años de edad.

<sup>83</sup> Sentencia de septiembre 4 de 2012 en la actuación Radicado 2008-80786 seguido contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez.



**(v) Tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito.** El quinto componente, referido a la creación de la estructura paramilitar con fines distintos al narcotráfico, se entendió satisfecho, en virtud a que la Fiscalía Delegada no logró demostrar que el Bloque Calima haya sido creado con la finalidad de participar en el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, en el fallo quedó claro que dicha actividad ilegal *“se constituyó en una de las fuentes de financiación del grupo”*.

En este punto de la discusión se advirtió en el capítulo correspondiente a los aspectos contextuales, que la organización y puesta en funcionamiento el Bloque Calima estuvo influenciada por grupos de narcotraficantes que operaban en la zona, en específico, por el cartel del Norte del Valle liderado por Diego León Montoya alias “Don Diego”, Luis Fernando Gómez alias “Rasguño” y alias “El Mocho”. Por lo tanto, que durante los inicios del Bloque se recibió la financiación del cartel del norte del valle.

Se indicó también en el fallo tantas veces mencionado, que el aporte de capitales provenientes de la actividad ilícita se mantuvo hasta que los grupos antissubversivos desalojaron de los territorios a la guerrilla, por lo que la financiación debió obtenerse a través de lo que denominaban “gramaje”, lo que consistía en cobrar a los narcotraficantes un impuesto por cada kilogramo de sustancia transportada. La labor era cumplida por un grupo de 16 hombres al mando de alias “chiquito malo”.

Así pues, se concluyó en dicha providencia que el narcotráfico fue un factor decisivo para el sostenimiento del grupo armado ilegal empero, sin que ello implique que la conformación se haya producido con el fin de garantizar la continuidad y aseguramiento del negocio ilícito.

**(vi) Liberación de personas secuestradas.** Finalmente, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad se entendieron satisfechos con la verificación del último contemplado en el artículo 10 de la ley 975 de 2005, esto es, el de la liberación de todos los secuestrados. En sustento de ello, se incorporó el Informe de Policía Judicial 063 de noviembre 21 de 2008 que recoge los resultados de la consulta de la base de datos del sistema de información de justicia y paz de los departamentos de Valle del Cauca, Huila y

Cauca, así como los resultados de la consulta del SIJUF Seccionales Popayán, Huila y Valle del Cauca, en los que se pudo establecer que todas aquellas personas retenidas por el grupo ilegal ya no lo estaban, por ende, que no existía registro de personas secuestradas por el Bloque Calima.

Finalmente, la Sala advierte que este estudio de los requisitos de elegibilidad, en cuanto tiene que ver con HÉBERT VELOZA GARCÍA también fue objeto de análisis en la providencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con ponencia del magistrado Eduardo Castellanos Roso en el proceso radicado No. 1100160002532006810099<sup>84</sup>, adelantado contra el nombrado VELOZA GARCÍA por los hechos cometido durante su pertenencia al Bloque Bananeros.

Igualmente la Fiscalía mencionó que el análisis frente a esos requisitos de elegibilidad contenidos en las dos decisiones mencionadas, mantienen su vigencia, razón por la que la Sala continuará con el estudio de los presupuestos exigidos por el artículo 24 de la ley 975 de 2005.

### **AUTORÍA, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD**

Tal como se ha mencionado en criterio reiterado de la Sala, en especial, con ponencia de quien en la actualidad cumple idéntico cometido<sup>85</sup>, *"la criminalidad observada en (los) grupos armados organizados al margen de la ley desborda la tradicional concepción del autor único del delito, o de aquel cometido por un grupo reducido en el que resulta demostrable con facilidad la participación de cada uno de sus integrantes"*.

Lo anterior, por cuanto los artículos 28 y 29 de la ley 599 de 2000 establecen que *"concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes"*, pero además, que *"es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que,*

---

<sup>84</sup> Sentencia de septiembre 30 de 2013.

<sup>85</sup> Ver entre otras, sentencia de febrero 24 de 2015. Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, rad. 2008-83612.

*mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero si en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible".*

Así las cosas, se dijo también en las decisiones citadas que la legislación penal contempla tres clases de autor:

*"el "directo", el autor "mediato" y los coautores. El primero es aquel que realiza la conducta "por sí mismo"; en palabras de Roxin "quien, no coaccionado y sin ser dependiente de modo superior a lo socialmente normal, realiza todos los elementos del tipo de propia mano, es autor. En todos los supuestos imaginables tiene el dominio del hecho"<sup>86</sup>. El segundo es quien ejecuta la conducta "utilizando a otro como instrumento" dominando su voluntad, por tanto, actuando éste último de manera cegada ante el hecho por error invencible, ora por insuperable coacción ajena".*

Finalmente, los coautores son aquellos que *"despliegan su comportamiento unidos por una comunidad de ánimo, esto es, por un plan común además, se dividen las tareas y su contribución debe ser relevante durante la fase ejecutiva pues no cabe la posibilidad de ser coautor después de la consumación de la conducta punible"*<sup>87</sup>.

Ahora bien, en el presente asunto no resulta apropiado discurrir simplemente acerca del autor como aquel que realizó el hecho por propia mano o de quienes ejecutaron la conducta con división del trabajo criminal y, menos aún, respecto de aquel que utiliza a un tercero que actúa de manera lícita o con falta de conciencia de licitud, ya sea por coacción o por error invencible. Lo anterior, por cuanto el autor material principal –Gian Carlo Gutiérrez-, al que resultan comunes todos los hechos imputados por la Fiscalía, ya fue objeto de reproche penal, esto es, de sentencia condenatoria por parte de la Sala, tal como se ha expresado ampliamente.

---

<sup>86</sup> ROXIN, Claus. *Autoría y dominio del hecho en derecho penal*. Marcial Pons. Barcelona. 1998. Pág. 149.

<sup>87</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Pero además y, principalmente, porque la complejidad del fenómeno implica el manejo de una estructura multifacética, que incorpora una pluralidad de sujetos que *"desborda la constitución de una simple banda criminal en la cual se logre determinar sin mayor problemática la división del trabajo criminal, por ende, el rol que cada uno desempeña"*; también, porque no *"resulta suficiente atender dicho fenómeno desde el mero autor directo o material, pues en la acción concurren mucho sujetos, se insiste"* y porque de éstos últimos, esto es, de los autores directos o materiales, *"no se puede predicar un actuar ajustado a derecho o algún tipo de coacción o error invencible sino uno totalmente distinto en específico, totalmente doloso, por ende, con conocimiento y voluntad de obtener el resultado, empero, siendo elementos fungibles de la organización quienes a pesar de su "libre arbitrio", tampoco tienen un margen de optar por aceptar o no la orden recibida, una vez aceptan ser parte de la organización"*.

Visto lo anterior, resultó necesario acudir a lo que la doctrina nacional e internacional ha denominado autoría y participación en estructuras de poder organizado; supuesto al que se ha acudido en este período histórico de posguerra registrado a nivel mundial, tal como lo advierte Claus Roxin, el cual se caracteriza *"porque el sujeto de detrás tiene a su disposición una "maquinaria" personal (casi siempre organizada estatalmente) con cuya ayuda puede cometer sus crímenes sin tener que delegar su realización a la decisión autónoma del ejecutor"*<sup>88</sup>.

De acuerdo con el profesor Roxin, se dijo en la sentencia reseñada lo siguiente:

*"La autoría en estructuras de poder organizado se afianza en la teoría del autor mediato, a pesar de no recaer en el autor inmediato la coacción o el error, pues "ciertamente quienes mueven los hilos de tales organizaciones tienen un interés relevante en el éxito del delito, en el sentido de la teoría subjetiva"*<sup>89</sup>. Sin embargo, por no resultar suficiente tal criterio, para su estructuración se requiere de un elemento objetivo que permita diferenciarla de la simple inducción. Dicho elemento estará conformado entonces por *"el funcionamiento peculiar del aparato...que está a*

---

<sup>88</sup> ROXIN, Claus. Ob. Cit. Pág. 268

<sup>89</sup> Ibíd. Pág. 269

*disposición del sujeto de detrás<sup>90</sup>, pues "una organización así despliega una vida independiente de la identidad variable de los miembros", pero además, "porque funciona "automáticamente", sin que importe la persona individual del ejecutor".*

*El planteamiento anterior queda plenamente graficado cuando expresa que "si...el sujeto de detrás que se sienta a los mandos de la estructura organizativa aprieta el botón dando la orden de matar, puede confiar en que la orden se va a cumplir sin que tenga que conocer al ejecutor"<sup>91</sup>. Para obtener dicha finalidad "tampoco es necesario que recurra a medios coactivos o engañosos, puesto que se sabe que si uno de los numerosos órganos que cooperen en la realización de los delitos elude cumplir su cometido, inmediatamente otro va a suplirle, no resultando afectada la ejecución del plan global"<sup>92</sup>.*

*En este orden de ideas, advierte que el elemento fundamental que permite identificar el dominio de la voluntad, imprescindible para determinar el dominio del hecho y, de esta manera la autoría, "reside, pues, en la fungibilidad del ejecutor". En consecuencia, en esta hipótesis, el autor directo no carece de libertad ni de responsabilidad, pues "ha de responder como autor culpable y de propia mano". No obstante, para el dominio del hombre de detrás dichas circunstancias resultan "irrelevantes", pues para éste el autor inmediato se presenta como "anónimo y sustituible". Así las cosas, "el ejecutor, si bien no puede ser desbancado de su dominio de la acción, sin embargo, es al mismo tiempo un engranaje –sustituible en cualquier momento- en la maquinaria del poder, y esta doble perspectiva impulsa al sujeto de detrás, junto con él, al centro del acontecer"<sup>93</sup>.*

En el mismo sentido, se indicó la postura asumida por el experto en temas de derecho penal internacional y Letrado de la Corte Penal Internacional, Héctor Olásolo Alonso, quien advierte que *"debido a la sistematicidad y escala de los delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad cometidos por ciertos grupos, el derecho penal internacional ha debido desarrollar conceptos como los de "(co) autoría mediata a través de estructuras organizadas de poder y la empresa criminal común (ECC, también conocido como la doctrina de propósito común)" con la finalidad de "reflejar adecuadamente la función central que desempeñan los dirigentes en el diseño y desarrollo de campañas*

---

<sup>90</sup> Ibídem.

<sup>91</sup> Ibídem.

<sup>92</sup> Ibídem.

<sup>93</sup> Ibíd. Pág. 271

*de violencia sistemática y/o a gran escala constitutivas de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra*<sup>94</sup>.

Así mismo, se dijo:

*Ahora bien, en punto de la autoría y participación de los responsables de crímenes internacionales cometidos por las denominadas estructuras organizadas de poder, tenemos el fenómeno de la autoría mediata a través de la utilización de personas plenamente responsables en las que la decisión de llevar a cabo la conducta "es normalmente adoptada por sus dirigentes, que normalmente se encuentran lejos de la escena del crimen"*<sup>95</sup>; *situación que complica el asunto pues "quienes finalmente realizan materialmente sus elementos objetivos no intervienen en la decisión inicial de cometerlo, ni en la planificación y preparación de su ejecución que se lleva a cabo en los distintos niveles de la estructura organizada de poder"*<sup>96</sup>.

*Resulta de suma importancia la referencia efectuada por el autor respecto del argumento utilizado por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional en la orden de arresto emitida contra Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi, hijo del primero, y el jefe de la inteligencia militar libia Abdullah Al-Senussi, en la que se expusieron los elementos de la autoría mediata a través de estructuras organizadas de poder. En la referida decisión se adujo:*

*"Para que una persona sea considerada como responsable principal de un delito a título de autor mediato conforme al artículo 25 (3) (a) del Estatuto [...] la jurisprudencia de la Corte ha establecido los siguientes requisitos comunes: (a) el sospechoso debe haber tenido el control sobre la organización; (b) la organización debe consistir de un aparato de poder jerárquico y organizado; (c) la ejecución de los delitos debe estar asegurada a través del cumplimiento casi automático con las órdenes del sospechoso; (d) el sospechoso debe poseer todos los elementos subjetivos de los delitos; y (e) el sospechoso debe ser consciente de las circunstancias fácticas que le permiten ejercitar su dominio del hecho por conducto de otro en el caso de la autoría mediata".*

---

<sup>94</sup> OLÁSOLO ALONSO, Héctor. *Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional*. Tirant lo Blanch Tratados. Valencia. 2013. Págs. 46 - 47

<sup>95</sup> *Ibidem*. Pág. 196

<sup>96</sup> *Ibidem*.

A partir del precitado concepto, se expusieron los elementos objetivos y subjetivos principales de la autoría mediata. En cuanto a los objetivos se indicó:

(i) *"el automatismo en el cumplimiento de las órdenes como característica esencial que ha de tener una organización"*, lo cual la define como estructura organizada de poder y, (ii) *"el grado de control que el sospechoso ha de tener sobre la organización"*, para lo cual se requiere que tanto éste como los autores materiales pertenezcan a la organización y de ellos se predique una relación "superior-subordinado". Sin embargo, el tratadista plantea un último elemento, no contemplado en la orden de arresto referida, consistente en que *"la conducta que ha de realizar el sospechoso para que pueda afirmarse su responsabilidad como autor mediato"*, la cual es predicable a partir de la *"utilización de la organización para asegurar la comisión de la organización"*.

En cuanto a los elementos subjetivos de la autoría mediata en la mencionada decisión se adujo:

(i) *"el sospechoso deba poseer todos los elementos subjetivos de los delitos"* y (ii) *"el sospechoso debe ser consciente de las circunstancias fácticas que le permiten ejercitar su dominio del hecho por conducto de otro"*.

Finalmente, también se reseñó el criterio de la Corte Constitucional en el estudio de exequibilidad efectuado a la ley que adoptó el Estatuto de Roma en la que consideró, en punto de la responsabilidad de los superiores, lo siguiente:

*"El artículo 28 del estatuto de Roma hace responsables penalmente a los jefes militares oficiales o de facto, por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo (artículo 28 literal a) ER) y, extiende la responsabilidad penal a superiores civiles por los actos de los subordinados que estén bajo su autoridad y control efectivo (artículo 28 literal b) ER). Establece el artículo 28:*

*"Artículo 28  
Responsabilidad de los jefes y otros superiores*

*Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:*

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:

i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;

ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y

iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.”

La lucha contra la impunidad frente a la comisión de crímenes atroces ha llevado a los países signatarios del Estatuto de Roma a codificar la doctrina de la responsabilidad del comandante o superior. El artículo 28 a) cubre no sólo a los jefes militares de las fuerzas militares oficiales, sino también a los jefes de facto de grupos armados irregulares. A la persona que sea comandante militar, oficial o de facto, en virtud de que son garantes por ciertas conductas de personas sometidas a su control, se le imputan los crímenes de las fuerzas que están bajo su mando y control efectivo, que se hayan cometido como consecuencia de la falta de desempeño de ese control. Esta imputación se presenta cuando dicho comandante sabía o ha debido saber, dadas las circunstancias, que sus fuerzas estaban cometiendo o cometerían un crimen y omitió emprender cualquiera de las medidas necesarias y razonables para evitar la comisión, impedirla o someter la cuestión a investigación de los funcionarios competentes.

Lo más importante de este artículo es que amplía la responsabilidad penal de los que tienen mando militar o detentan de facto autoridad militar para evitar la impunidad tanto de los jefes investidos formal y públicamente como de los superiores de facto de grupos irregulares. Dicha norma responde a la experiencia de la humanidad en esta materia, sintetizada en una decisión proferida dos años antes por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia:

“El Tribunal tiene razones válidas particulares para ejercer su jurisdicción sobre personas que, por su posición de autoridad política o militar, pueden ordenar la comisión de crímenes dentro de su competencia *ratione materiae* o que pese a conocer de dicha comisión se abstengan de prevenir o castigar a los perpetradores de tales crímenes”. (traducción no oficial)

Además, no se requiere probar que el jefe militar o el que actúa como jefe militar haya impartido una orden específica de cometer un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, pues dicho jefe militar puede ser responsable aún por actos de sus subordinados que él no haya conocido pero que, dadas las circunstancias del caso, haya debido conocer, impedir, reprimir o denunciar, como se estableció en el célebre caso Yamashita. Es decir, se trata de una hipótesis en la cual puede existir responsabilidad a título de imprudencia en los crímenes enunciados en el Estatuto. El Protocolo I, en su artículo 86 (2) recogió en el derecho positivo internacional el principio sentado por vía jurisprudencial. Este principio, conocido como de responsabilidad del comandante o superior, fue luego desarrollado en los estatutos de los Tribunales *ad hoc*.



*Por otra parte, el artículo 28 b) del Estatuto, establece un parámetro diferente para medir la responsabilidad penal de superiores por actos de sus subordinados en circunstancias distintas a las consignadas en el literal a). En primer lugar, no se refiere aquí a la responsabilidad de quien ejerce como jefe militar, ya sea de un ejército regular o de una fuerza irregular, ni al ejercicio de mando, autoridad y control sobre "fuerzas". En este segundo caso, el literal b) del artículo 28 establece un parámetro de responsabilidad penal de superiores civiles, por actos de sus subalternos si se dan las siguientes tres condiciones: i) cuando hubiere tenido conocimiento de la comisión o del planeamiento de tales crímenes o hubiere deliberadamente hecho caso omiso de dicha información cuando sea claramente indicativa; ii) tales crímenes guarden relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables para evitarlo, reprimirlo o denunciarlo".*

Por su parte y, para finalizar, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado incluso respecto de aquellos jefes de grupo o comandantes de Bloque o Frente encargados de hacer cumplir las órdenes proferidas por los máximos responsables en su condición de autores mediatos, esto es, de aquellos que dieron la orden específica de cometer cada una de las conductas punibles.

En tal sentido, la Sala ha acogido dicho criterio, por ende, susceptible de reiterarse en la presente decisión, con fundamento en el cual se ha permitido advertir que *"ciertamente, cuando se está ante el fenómeno delincencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizados, los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes – gestores, patrocinadores, comandantes – a título de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto dominan la función encargada – comandantes, jefes de grupo – a título de coautores; y a los directos ejecutores o subordinados – soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos – pues toda la cadena actúa con verdadero conocimiento y dominio del hecho y mal podrían ser amparados algunos de ellos con una posición conceptual que conlleve la impunidad".*

Así las cosas, es claro que en aquellos casos en los cuales se logró demostrar el proferimiento directo de la orden específica de ejecutar un hecho punible, la responsabilidad se dictará en condición de coautoría, pues quien la dicta ejerce el dominio de la función.

Efectuadas las anteriores precisiones, la Sala reproducirá los elementos aportados por la Fiscalía Delegada para el presente asunto, partir de los cuales

se expondrá la estructura del Bloque Calima, con la finalidad de resaltar el rol que cumplía al interior de la organización cada uno de los postulados.

No obstante, la Sala indica que en lo que tiene que ver con la presentación de la conformación del Bloque Calima existen ciertas falencias, inconsistencias e inexactitudes que no permiten realizar un análisis profundo y detallado sobre la estructura de la organización criminal. Por lo tanto, no sobra advertir que, dada la precariedad de la información aportada por el ente investigador, las conclusiones aquí presentadas quedarán sujetas a confirmación o a su perfeccionamiento en otra de las sentencias en las que se juzguen los hechos cometidos por los integrantes del Bloque Calima, siempre que los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida permita develar las condiciones en las que funcionó la entidad criminal.

En este orden de ideas, sea lo primero advertir que el Bloque Calima estuvo dirigido, por el tiempo que interesa ponderar para los actuales fines, por HÉBERT VELOZA GARCÍA, alias “HH” quien asumió la comandancia del Bloque a mediados del año 2000, con posterioridad a los cambios de dirigencia dispuestos por Carlos Castaño Gil, tal como se expuso en el capítulo contextual de la presente decisión.

Así mismo, que bajo la dirigencia de VELOZA GARCÍA, esto es, a mediados del año 2000, asumió el cargo de comandante militar ELKIN CASARRUBIA POSADA conocido en la organización como “Cura” o “Mario”, quien había entrado al Bloque Calima en agosto de 1999, y de comandante financiero JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ alias “Fino”, después de haber ingresado el 30 de septiembre de 1997 a las AUC, y pasar al Bloque Calima en el año 2000.

En calidad de comandantes de urbanos y rurales fueron designados JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMENEZ alias “Martín” o “Sancocho”, quien a su vez ejercía como comandante del Frente Farallones, con sede en el departamento de Huila, entre los años 2000 y 2002 y por cinco meses en éste último año del Frente Calarcá y, de 2002 a 2004 como comandante de urbanos en el Sur de Huila, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, quien además de haber participado como comandante del Frente Farallones del Bloque Calima entre el 2000 y el

2002, del Frente Pacífico entre 2002 y 2003, fungió en la misma condición en el Bloque Bananero de las ACCU entre los años 2003 y 2004, fecha en que se desmovilizó con esta estructura, mientras que JANIER FRANCO alias “Maicol” o “Boris” la ejerció pero en la zona de El Tambo, Cauca específicamente y JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA fue designado como comandante de urbanos y rurales en El Bordo, Cauca del Frente Farallones.

Se acreditó igualmente que JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS hicieron parte del Bloque Calima en calidad de patrulleros, el primero de los cuales lo hizo en los municipios de Timbío, Cauca y Guadalupe, Huila.

### **CASO CONCRETO**

Efectuadas las precisiones anteriores y como se ha venido mencionando, la Fiscalía General de la Nación a través de la Delegada<sup>97</sup> solicita la adopción de una sentencia anticipada con fundamento en las prescripciones normativas transcritas, teniendo en cuenta que los hechos por los cuales se pide la condena de los postulados, que fueron reseñados en acápite precedentes, ya fueron objeto de pronunciamiento en la actuación surtida contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez en sentencia de septiembre 4 de 2012, por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá<sup>98</sup>.

Ahora bien, como fue descartada la existencia de patrones en el presente asunto en los precisos términos de la ley 975 de 2005 modificada por la 1295 de 2012 y el decreto 3011 de 2013, y que no resulta posible encuadrar los hechos en ese tipo de conductas, lo conveniente será efectuar el estudio caso por caso, para determinar la materialidad de la conducta y la responsabilidad aplicable a cada uno de los postulados.

Por otra parte, previo a definir la responsabilidad de los postulados en cada uno de los hechos aportados por la Fiscalía Delegada, resulta necesario

---

<sup>97</sup> Fiscalía 18 Unidad Especializada en Justicia Transicional de Cali.

<sup>98</sup> Proceso radicado 2008-80786

efectuar algunas precisiones respecto a la participación de los máximos responsables, en lo específico, de VELOZA GARCÍA alias "HH", CASARRUBIA POSADA alias "el Cura" o "Mario", de ARISTIZÁBAL RAMÍREZ alias "Fino" o "Don Alex" y de JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ alias "Martín" o "Sancocho", con la finalidad de entender el rol que cada uno cumplía en el funcionamiento de la organización.

Lo anterior, por cuanto de lo expuesto hasta el momento resulta evidente que la función desempeñada por cada uno de los nombrados estaba puntualmente delimitada al interior de la estructura armada lo que implica, a la postre, no sólo que la responsabilidad deba ser ajustada en el grado respectivo sino que, su participación deba ser diferenciada, al punto de discernir en cada caso el tipo de autoría que corresponde.

Así las cosas y, en consonancia con lo dicho en los acápites de "*aspectos contextuales*" y "*autoría, participación y responsabilidad*" de la presente providencia, se puede comprender en el caso de VELOZA GARCÍA alias "HH", que dicho personaje representaba una de las cabezas visibles de la asociación criminal conocida como Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- no sólo porque fue reconocido como uno de los tres interlocutores entre los grupos paramilitares y el Gobierno Nacional en el proceso de desmovilización junto con Iván Roberto Duque Gaviria alias "Ernesto Báez" y Salvatore Mancuso Gómez alias "Mono Mancuso", sino además y, principalmente, por cuanto en cumplimiento de la orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, debió asumir la dirección máxima del Bloque Calima con la finalidad de darle un viraje al objetivo del grupo y a la forma de financiación en las zonas de injerencia.

En tal caso, deviene imprescindible recordar que el nombrado VELOZA GARCÍA hizo parte de los grupos paramilitares desde la década de los años 90 en donde llegó a ostentar el cargo de Comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, que con posterioridad se incorporó a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, proyecto liderado por los hermanos Castaño Gil, y del que asumió como propias todas las directrices y reglas para ser aplicadas al recién creado Bloque Calima.

De igual modo, que la conformación de los Frentes del Bloque Calima se dio con miembros que provenían en su mayoría del Bloque Bananero, por ende, de hombres que conocían el andamiaje de este tipo de organizaciones.

Pues bien, con tal conocimiento de las reglas básicas de operación fue que se inició el Bloque Calima incluso, con la perpetración de un asesinato que “marcaba” el ingreso de la organización al territorio, seguido de la ejecución de una serie de masacres que le imprimían el sello de grupo paramilitar.

En este contexto de violencia se enmarca entonces la función de VELOZA GARCÍA por razón del cual resulta dable afirmar que las órdenes por él impartidas serían cumplidas con plena confianza y sin importar los autores materiales a los que se diera la orden específica; situación permisiva de ser trasladada a CASARRUBIA POSADA alias “Mario” o “el Cura”, segundo al mando desde el punto de vista militar o armado y en quien recaía la función de idear y organizar militarmente al grupo.

A su vez, refulge con plena claridad la figura de PÉREZ JIMÉNEZ alias “Martín” o “Sancocho”, Comandante de los Frentes Cacique Calarcá y Farallones, bajo cuyo mando se ejecutaron la mayoría de conductas dignas de reproche, razón por la cual, estamos frente al autor mediato más próximo al teatro de operaciones.

En este orden de ideas, es claro que de VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA y PÉREZ JIMÉNEZ se puede predicar en general, el dominio de la voluntad indispensable en la autoría mediata en las estructuras de poder organizado, esto es, que tenían el poder suficiente para hacer cumplir las órdenes de ejecución de cada uno de los crímenes.

No ocurre lo mismo, para el caso que ocupa la atención de la Sala, respecto de JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ alias “el Fino”, de quien la Fiscalía Delegada acreditó ser el encargado de las finanzas del Bloque Calima y por cuya condición se le conoce como “el Financiero” de la organización, tal como lo declararon los demás postulados dentro de los que se incluye a VELOZA GARCÍA.

La conclusión anterior se afianza en el hecho de que para el caso bajo estudio no se allegaron los elementos materiales de prueba, la evidencia física o la información legalmente obtenida necesarios para demostrar el grado de participación del nombrado ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, ya fuera a título de autoría mediata o de co-autoría, por virtud del dominio de la voluntad o del dominio del hecho, respectivamente, bajo los que se pudiera entender su participación, excusada sea la redundancia, en cada uno de los hechos objeto de análisis.

Del estudio de los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, entre los que se cuentan las versiones de los postulados así como los documentos producidos por el ente investigador permisivos de discernir la responsabilidad de aquellos, se colige la ausencia de prueba que permita concluir a la Sala la participación del financiero en los reatos imputados, pues en tales medios suatorios sólo se hace referencia a que ARISTIZÁBAL RAMÍREZ estaba encargado de las finanzas de la organización, no así de la forma en que el mismo aportaba en la parte ejecutiva de las conductas punibles.

No obstante, lo dicho no significa de ninguna manera que por el hecho de tratarse del cumplimiento de la función de financiero de la estructura no sea susceptible de reproche penal; sólo que la misma debe ir acompañada de los medios suatorios pertinentes para demostrar el grado de autoría o participación de la persona que cumple tales labores al interior de las organizaciones ilegales en las conductas punibles respectivas; además, por cuanto como ha sido expuesto en diferentes decisiones proferidas por esta jurisdicción<sup>99</sup>, la figura del comandante financiero no comporta una configuración rígida e identificable con las de otros grupos paramilitares, esto es, que no es lo mismo hablar del comandante financiero del Bloque Calima que de los restantes comandantes financieros del universo de Bloques Paramilitares que operaron en el territorio nacional.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de proferir pronunciamiento en el caso específico de ARISTIZÁBAL RAMÍREZ alias “el Fino”, y exhortará a la Fiscalía General de la Nación para que a través de las Fiscalías Delegadas presenten ante esta jurisdicción un estudio detallado y preciso de la

---

<sup>99</sup> Ver entre otras la sentencia de abril 10 de 2015 en el radicado 2013-00069 contra Saúl Rincón Camelo del Frente Fidel Castaño.

participación de todos y cada uno de los postulados versionados o imputados, en especial, en lo que tiene que ver con quienes ejercen las funciones financieras de las estructuras de poder organizado, así como de los máximos responsables en general, en los términos expuestos en esta providencia, pero además y, principalmente, para que presente de manera clara y específica ante la Sala los medios suasorios por los cuales se demuestre la responsabilidad y autoría del nombrado ARISTIZÁBAL RAMÍREZ en los punibles que le son imputados.

Así las cosas, de los elementos materiales de prueba aducidos al proceso, con la finalidad de encontrar demostrada la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los postulados, se puede considerar lo siguiente:

**Hecho 1.** El hecho 1 fue narrado de la siguiente manera: *“El 30 de Julio del año 2001 en la cabecera municipal de El Tambo - Cauca, en la vía que lleva del matadero municipal al barrio San Fernando, fue abordado Jaime Quirá Cifuentes por GIAN CARLO GUTIERREZ SUÁREZ y alias “El Pelirrojo” quién después de un intercambio de palabras le disparó con arma de fuego tipo revólver calibre 38, causándole heridas que le produjeron la muerte. El postulado admitió su responsabilidad en el homicidio, como quiera que protegió y colaboró en la huida de alias “Pelirrojo” al desenfundar su arma de fuego por prevención y huir del lugar conjuntamente en la motocicleta mencionada”<sup>100</sup>.*

En la muerte de Jaime Quirá Cifuentes se cuenta con la versión del postulado MORELO PALACIOS, la cual fue contrastada con la de Gian Carlo Gutiérrez Suárez en el proceso en el que fue condenado, pero además y, principalmente, con el acta No. 12 de inspección a cadáver de julio 30 de 2001 efectuada por la Fiscalía 01 Seccional de El Tambo y el Protocolo de Necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal Seccional Cauca, a través de los cuales se corrobora lo dicho por la Fiscalía en cuanto a la muerte de la víctima, así como la modalidad de consumación de la conducta punible.

La víctima -Jaime Quirá Cifuentes- agricultor, de 18 años de edad para la época de su muerte, le fue atribuida a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y PÉREZ JIMÉNEZ en calidad de autores mediatos de homicidio en persona protegida, en las condiciones mencionadas con antelación, mientras que a MORELO PALACIOS se le imputa como autor material. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos

---

<sup>100</sup> La narración de los hechos corresponde con la que fue objeto de sentencia en la providencia de septiembre 4 de 2013 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá con ponencia de la magistrada Léster María González contra Gian Carlos Gutiérrez Suárez.

empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya se explicó.

Lo anterior, por cuanto del relato de Gutiérrez Suárez se advierte que en el hecho participaron el nombrado y alias “Pelirrojo”, quien para los efectos se identifica como MORELO PALACIOS, pues en versión entregada a la Fiscalía y allegada al proceso, admitió la participación en el hecho<sup>101</sup>. Ha de recordarse que uno de los sobrenombres de MORELO PALACIOS durante la pertenencia a la organización era el de pelirrojo, tal como lo acreditó la Fiscalía<sup>102</sup> empero, que no ha de confundirse con Elver Antonio Contreras Ortega, también integrante del Bloque Calima y apodado de igual manera “pelirrojo”, pues no fue éste quien participó en el hecho.

**Hecho 2.** Este hecho fue descrito de la siguiente manera. “El 02 de agosto de 2001, en el sitio conocido como “La Cuchilla”, en la vía al Obelisco de El Tambo- Cauca, un grupo conformado por aproximadamente 60 hombres de las A.U.C. entre los que se encontraba GIAN CARLOS GUTIÉRREZ SUÁREZ bajo el mando de alias “Gonzalo”, realizó un retén en el que se privó de su libertad a Emilson Albeiro Peñafiel Ardila (agricultor de 24 años de edad), Felipe Antonio Peñafiel Muñoz (agricultor de 20 años de edad), Wilmar Jair López Peñafiel (agricultor de 22 años de edad) y Marino Enrique Báez (de nacionalidad dominicana y profesor dirigente del sindicato de maestros de ese país). Momentos después de la retención tuvo lugar un enfrentamiento armado entre la organización paramilitar y el grupo subversivo E.L.N., razón por lo que las víctimas quedaron con el grupo al mando de alias “Gonzalo”, mientras que GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y los individuos conocidos con los alias de “Maycol” y “El Pelirrojo”, regresaron a la población de El Tambo. Al día siguiente, los cuatro retenidos fueron encontrados muertos junto con el cadáver de Hegidio Achinte, quien fue víctima del cruce de disparos en el enfrentamiento sostenido”.

La conducta tipificada como secuestro simple agravado en concurso con homicidio en persona protegida de Emilson Albeiro Peñafiel Ardila, Felipe Antonio Peñafiel Muñoz, Wilman Jair López Peñafiel y Marino Enrique Báez, ocurrida el 2 de agosto de 2001, se encuentra demostrada a través de cada una de las inspecciones a cadáver, con fechas de agosto 1 y 2 de 2001, protocolo de necropsia de las mismas fechas y los respectivos registros de defunción, tal como constan en los discos compactos aportados por la Fiscalía Delegada y se encuentran debidamente incorporados en la actuación<sup>103</sup>.

Resulta indispensable aclarar en este punto que el hecho sólo le fue atribuido al postulado JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS alias “El Loco”, “Pelirrojo”, y “Camilo Jr”, en calidad de autor material, tal como quedó probado

<sup>101</sup> Versión incorporada al CD de elementos materiales probatorios No. 1.

<sup>102</sup> Ver escrito de presentación de audiencia en CD de elementos materiales probatorios No. 4.

<sup>103</sup> Disco Compacto de Elementos Materiales Probatorios No. 1 aportado por la Fiscalía Delegada para el asunto



en la declaración rendida ante la Fiscalía, toda vez que frente a los demás postulados, ya había imputación por parte del ente fiscal, la que correspondió a otra Sala para adelantar la audiencia de legalización de cargos.

Así pues, en lo relativo al presente hecho se proferirá condena de manera exclusiva contra el nombrado MORELO PALACIOS como se indicó en precedencia, esto es, en calidad de autor material, pues de conformidad con el relato entregado por el postulado, fue la persona encargada de hacer descender del vehículo a las víctimas y de entregarlas al grupo militar para que éste se encargara de consumir los referidos homicidios.

Ahora bien, advierte la Sala que la condena contra MORELO PALACIOS versará por los delitos de secuestro simple agravado y homicidio en persona protegida, pues de los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, se logra discernir la participación del nombrado en los dos punibles.

En sustento se dirá que del análisis de las versiones rendidas por MORELO PALACIOS, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y VELOZA GARCÍA, se colige que la labor del primero de los mencionados fue la de requisar el vehículo en que se transportaban las víctimas al momento en el que fueron requeridos en el retén ilegal dispuesto por el grupo organizado al margen de la ley para mantenerlos ilegalmente privados de la libertad y, que una vez fueron requisados e indagados por el comandante militar alias "Gonzalo", se desató un enfrentamiento con grupos guerrilleros, por razón de lo cual fue necesario que los integrantes del grupo urbano de los paramilitares, vestidos de civil y dentro de los que se encontraba el nombrado, dejaran en manos del grupo militar a los secuestrados. Se supo también, en especial de lo dicho por ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, que alias "Gonzalo" le informó todo el tiempo sobre lo decidido hasta que aquel dio la orden de asesinar a las víctimas.

Ahora bien, es claro también que la retención de las víctimas se presentó en virtud del arma encontrada al interior del vehículo y de propaganda alusiva a un grupo guerrillero, por tanto, que era previsible la muerte de aquellas, tal como sucedía generalmente. En consecuencia, la condena se producirá por los punibles reseñados.

**Hecho 3.** El hecho tres fue expuesto como sigue: *"El 19 de septiembre de 2001, en la Vereda Monteredondo del municipio de El Tambo del departamento de Cauca, Janier Franco alias "Maycol" y el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, obligaron a salir de su casa a David Ospina González (aserrador de 19 años), conduciéndolo hasta la vereda Betania, donde alias "Maycol" le disparó con arma de fuego causándole la muerte. Este hecho fue confesado por el postulado GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida el 29 de agosto de 2007, aceptando la responsabilidad por acompañar a alias "Maycol" a sacar a la víctima de su casa y llevarlo al lugar donde se causó la muerte con disparos de arma de fuego tipo revólver calibre 38, tras haber sido señalado injusta y arbitrariamente por el mismo "Maycol" como guerrillero".*

Frente al secuestro simple y posterior homicidio de David Ospina González, el cual quedó plenamente demostrado en la forma como fue expuesto por la Fiscalía, se tienen como elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida las versiones de Gian Carlo Gutiérrez Suárez, condenado por esta Corporación, la de JANIER FRANCO, el acta de inspección a cadáver de septiembre 19 de 2001, el acta de necropsia de la misma fecha y el registro de defunción<sup>104</sup>.

Del análisis de las referidas versiones se logra discernir que la persona encargada de sustraer de la esfera de protección a la víctima y de ejecutar materialmente el hecho fue JANIER FRANCO alias "Maicol" y "Boris", y que para ello requirió el concierto de Gian Carlo Gutiérrez para la consumación de los reatos. De igual modo, que la razón para cometer el secuestro y posterior homicidio fue la supuesta participación de la víctima en un grupo subversivo. No obstante, también resulta claro que dicha versión no fue corroborada en la actuación, por ende, que no es cierto que Ospina González hubiese estado sindicado de los delitos de rebelión o sedición y que el homicidio se dio por simples suposiciones derivadas de la orden proferida por alias Daniel quien ordenó a "Maicol" acometer la acción.

Así las cosas, el homicidio en mención le fue imputado en calidad de autores mediatos a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y PÉREZ JIMÉNEZ, en las condiciones ya reseñadas, mientras que a JANIER FRANCO no se le formuló el cargo por existir sentencia condenatoria en su contra emitida por el Juzgado 4 Penal Circuito de Popayán en sentencia anticipada de noviembre 26 de 2012. Por lo tanto, la responsabilidad se

---

<sup>104</sup> Ibídem.

decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya se explicó.

**Hecho 4.** El hecho cuatro se consignó como queda: “El 20 de agosto de 2001, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el individuo conocido con el alias de “El Pelirrojo”, por orden de Javier Franco, alias “Maycol”, llegaron en dos motocicletas a la población de El Tambo en el departamento de Cauca y sacaron al señor Nisareiver Sánchez Vásquez, de 20 años de edad, quien era vigilante del pueblo, para conducirlo hasta la vereda de El Tablón, lugar donde alias “El Pelirrojo” le disparó con un revólver calibre 38, produciéndole heridas que le causaron la muerte. Según la confesión realizada por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, la víctima se hacía pasar como miembro de las AUC para pedir dinero y extorsionar a los vecinos de El Tambo, asunto que motivó el secuestro y posterior homicidio”.

La conducta acaecida contra Nisareiver Sánchez Vásquez, constitutiva de los punibles de secuestro simple agravado y homicidio en persona protegida, tal como fue calificada por la Fiscalía Delegada, ocurrida el 20 de agosto de 2001 por Gian Carlos Gutiérrez Suárez por orden de JANIER FRANCO alias “Maicol” en jurisdicción de El Tambo, Cauca, se demostró con las versiones rendidas por los postulados, en especial, por la de Gutiérrez Suárez y JANIER FRANCO, así como en el acta de inspección a cadáver No. 11 de agosto 20 de 2001, el acta de protocolo de necropsia de la Seccional del Instituto de Medicina Legal con sede en Cauca y la copia del registro de defunción emitida por la Registraduría Delegada del Cauca<sup>105</sup>.

Este hecho referido al secuestro y posterior homicidio de Nisareiver Sánchez Vásquez le fue imputado como autores mediatos a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y PÉREZ JIMÉNEZ, en las modalidades especificadas con antelación mientras que como co-autores materiales a MORELO PALACIOS y JANIER FRANCO, teniendo en cuenta, tal como se dijo en el hecho número uno, que el pelirrojo al que se hace mención en este caso es MORELO PALACIO. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya fue suficientemente explicado.

**Hecho 5.** El hecho cinco fue expuesto así: “El 31 de Julio de 2001, en la vereda Pueblo Nuevo de corregimiento de Piagua, perteneciente al municipio de El Tambo-Cauca, en horas de la noche, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el individuo conocido con el alias de “El Pelirrojo” llegaron a la casa del señor Napoleón Rosero, agricultor de 43 años de edad, para una vez sacarlo de manera forzada de su residencia proceder a dispararle con arma de fuego tipo revólver calibre 38, produciéndole heridas que le causaron la muerte”.

---

<sup>105</sup> Ibídem.

*El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007 (a las 11:32:39 - 11:42:10), confesó éste homicidio, afirmando que ayudó a sacar a la víctima con conocimiento de que era para asesinarlo, toda vez que Javier Franco, alias "Maycol", había informado que era guerrillero.*

La conducta de secuestro simple y agravado y el posterior asesinato de Napoleón Rosero en inmediaciones de La vereda Pueblo Nuevo, corregimiento de Piagua de El Tambo, Cauca, por parte de Gian Carlo Gutiérrez Suárez, en virtud a que JANIER FRANCO alias "Boris" y "Maicol", sindicó a la víctima de pertenecer a grupos subversivos. No obstante, de los elementos materiales probatorios, de la información legalmente obtenida y la evidencia física recaudada no se colige que el móvil de las conductas descritas esté demostrado, sino que más bien se constituyó en el pretexto con el que tratan de explicar la ilicitud.

Ahora bien, la conducta imputada se encuentra plenamente demostrada a partir de las versiones de los postulados reseñados, pero además, con fundamento en el acta de inspección de cadáver No. 13 de agosto 1 de 2001, el protocolo de necropsia de la misma fecha, y el registro de defunción 03709133<sup>106</sup>.

El secuestro y homicidio de Napoleón Rosero, presentado como el hecho cinco, le fue imputado a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y PÉREZ JIMÉNEZ en calidad de autores mediatos, mientras que a MORELO PALACIOS y JANIER FRANCO como co-autores. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino", como ya se explicó.

**Hecho 6.** Tal como se advirtió en el capítulo correspondiente a los hechos, esta conducta no fue imputada a los postulados en la presente actuación en razón a que, como lo indicó la Fiscalía Delegada, lo fue en el proceso priorizado que en la actualidad cursa en el despacho de la magistrada Léster María González con radicado 2013-00282, además, porque existe sentencia condenatoria proferida por la justicia ordinaria contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez tal como se indicó en la parte final del acápite "*hechos*", se insiste.

---

<sup>106</sup> *Ibíd.*

Se trata de la muerte de Carmen Pungo y Ricaurte Román Pungo Vargas ocurrida el 2 de septiembre de 2001 en zona rural de El Tambo, Cauca, luego de que JANIER FRANCO alias "Boris" o "Maicol" diera la orden de retenerlos, llevarlos a la vereda San Joaquín y, una vez allí, disponer de sus vidas, en razón a la supuesta pertenencia o colaboración de Carmen Pungo con uno e los Frentes de la guerrilla de las FARC que operaban en la zona. Así las cosas, se adujo que la muerte de Pungo Vargas obedeció a la compañía que prestaba a Carmen, su prima.

Se supo igualmente que en los hechos participaron Gutiérrez Suárez y MORELO PALACIOS alias "Loco" "Camilo Jr" o "Pelirrojo", tal como se lee en la versión rendida ante la Fiscalía, quienes ejecutaron la orden proferida por JANIER FRANCO alias "Boris" o "Maicol"<sup>107</sup>.

No obstante, en observancia del derecho al non bis in ídem que le asiste a todo ciudadano colombiano investigado, no resulta posible proferir sentencia condenatoria, en virtud a que en la actualidad el juzgamiento de tales conductas es de conocimiento de otro despacho de esta Corporación.

**Hecho 7.** En el hecho siete se dijo: *"El 27 de noviembre de 2001, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y alias "El Burro" arribaron en motocicleta a la casa de la señora Claudina Medina (de 62 años de edad), ubicada en el barrio San Fernando del municipio del Tambo-Cauca, siendo aproximadamente las 20:30 horas, y después de golpear a su puerta y ser atendidos por la señora Medina, alias "El burro" le disparó con un arma de fuego tipo revólver calibre 38, causándole las heridas que le produjeron la muerte".* El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, confesó este homicidio explicando que fue por orden de Janier Franco, alias "Maycol", que acompañó al sujeto alias "El burro" para prestarle seguridad y manejar la motocicleta, con pleno conocimiento de que se dirigían a la casa de la víctima con el fin de darle muerte, porque era señalada -injusta y arbitrariamente- como auxiliadora de la guerrilla.

De acuerdo con la versión rendida por Gian Carlo Gutiérrez Suárez y JANIER FRANCO, el 27 de noviembre de 2001 Gutiérrez Suárez en compañía de alias "El Burro", asesinaron a Claudina Medina en zona urbana del municipio de El Tambo, Cauca, por pertenecer supuestamente a grupos subversivos. Sin embargo, la Sala reitera que el móvil del homicidio jamás fue demostrado.

---

<sup>107</sup> Disco Compacto de Elementos Materiales Probatorios No. 2 aportado por la Fiscalía Delegada para el asunto.

Por su parte, la consumación de la conducta se demostró con el acta de inspección a cadáver No. 351 de noviembre 28 de 2001, el protocolo de necropsia 381 de noviembre 28 de 2001 y el registro civil de defunción 04425286<sup>108</sup>.

El hecho siete, homicidio en persona protegida cuya víctima la señora Claudina Medina, le fue imputado en calidad de autores mediatos a VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA, PÉREZ JIMÉNEZ y JANIER FRANCO. No obstante, de acuerdo con la narración del hecho y los elementos suasorios aportados a la actuación se colige que respecto de JANIER FRANCO la responsabilidad se decretará en calidad de co-autor, mientras que respecto de RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino" la Sala se abstendrá de pronunciarse como ya se explicó.

**Hecho 8.** El hecho ocho se fijó de la siguiente manera: "El 29 de agosto de 2001, en horas de la mañana, los sujetos conocidos con los alias de "Maycol" -quien responde al nombre de Janier Franco- y el "El burro", junto con GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ arribaron a la hacienda "El Caimo", ubicada en la vereda Nuevo Piagua de El Tambo, departamento de Cauca, buscando al señor Fernando Trujillo contra quien alias "El burro" disparó arma de fuego, por orden de "Maycol", causándole lesiones que le ocasionaron la muerte".

*El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 29 de agosto de 2007 confesó su responsabilidad en este homicidio, admitiendo que integró el grupo que se dio a la búsqueda de la víctima, para darle muerte por orden del sujeto conocido como "Maycol", pues era señalado de militar en un grupo guerrillero.*

Por orden de JANIER FRANCO, Gian Carlo Gutiérrez Suárez y alias "El Burro" asesinaron a Fernando Trujillo el 29 de agosto de 2009 tras sindicarlo injustificadamente de pertenecer a la guerrilla.

El homicidio de Fernando Trujillo se acreditó con las versiones de los postulados Gutiérrez Suárez y JANIER FRANCO, así como con el acta de inspección a cadáver 015 expedida en la fecha de comisión del hecho, el protocolo de necropsia de la misma data y el registro civil de defunción 03709165<sup>109</sup>.

El hecho, homicidio en persona protegida del señor Fernando Trujillo, le fue imputado en condición de autores mediatos a VELOZA GARCÍA,

---

<sup>108</sup> Ibídem.

<sup>109</sup> Ibídem.

ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA, PÉREZ JIMÉNEZ y JANIER FRANCO. No obstante, de acuerdo con la narración del hecho y los elementos suasorios aportados a la actuación se colige que respecto de JANIER FRANCO la responsabilidad se decretará en calidad de co-autor, mientras que respecto de RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino" la Sala se abstendrá de pronunciarse como ya se explicó.

**Hecho 9.** El hecho nueve es como sigue: *"El 19 de septiembre de 2001, en la Vereda Puerto Piagua, municipio de El Tambo-Cauca, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y alias "El Burro", por orden de Janier Franco, alias "Maycol", sacaron de una casa ubicada en una vereda aledaña al corregimiento de San Joaquín a Wilson Hernando Dorado Piamba (conductor de 39 años de edad) y Norelly Guaúña (de 23 años de edad). Seguidamente, condujeron a Wilson Dorado en una motocicleta en medio de los dos victimarios hasta una zona cercana al corregimiento de Piagua, donde alias "El burro" procedió a dispararle con un arma de fuego, tipo revólver calibre 38, causando su deceso. Procedimiento que repitieron luego con la señora Norelly. Las víctimas fueron ejecutadas por orden de "Maycol", tras ser señaladas injusta y arbitrariamente como guerrilleros".*

El secuestro en modalidad simple y agravado y posterior homicidio en persona protegida de los señores Wilson Hernando Dorado Piamba y Norelly Guaúña Llantén ocurrido el 19 de septiembre de 2001 en la vereda Puerto Piagua del municipio de El Tambo, quedó demostrado con las versiones rendidas por los postulados JANIER FRANCO y Gian Carlo Gutiérrez Suárez y, en especial, por las actas de inspección a cadáver, los protocolos de necropsia y los registros civiles de defunción.

En efecto, en el caso de Norelly Guaúña se aportó el acta de inspección a cadáver No. 20 de septiembre 19 de 2001, acta de necropsia de la misma data y copia del registro civil de defunción 03709181. Por su parte, de Wilson Dorado Piamba se allegó acta de inspección a cadáver No. 19 de septiembre 19 de 2001, protocolo de necropsia de la misma data y registro civil de defunción 03709182<sup>110</sup>.

Las conductas concursales de secuestro simple y agravado y el doble homicidio en persona protegida de los señores Wilson Dorado Piamba y Norelly Guaúña les fueron imputados a los comandantes VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA, PÉREZ JIMÉNEZ y JANIER FRANCO en calidad de autores mediatos. No obstante, de acuerdo con la narración del hecho y los elementos suasorios aportados a la actuación se

---

<sup>110</sup> Ibídem.

colige que respecto de JANIER FRANCO la responsabilidad se decretará en calidad de co-autor, mientras que respecto de RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino” la Sala se abstendrá de pronunciarse como ya se explicó.

**Hecho 10.** Este hecho fue relatado así: “El 09 de septiembre de 2001, en horas de la noche, los sujetos distinguidos con el alias “El Burro” y GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, por orden de Janier Franco alias “Maycol”, sacaron de un billar ubicado en el casco urbano de El Tambo, departamento de Cauca, a Bleismer García Idrobo (agricultor de 19 años de edad), y lo condujeron en una motocicleta por la vía que conduce a Popayán. Antes de llegar al corregimiento de Piagua, el sujeto conocido como “El burro” le disparó con un revólver calibre 38, causando su deceso. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ manejó la motocicleta en la que transportaron a la víctima en medio de los dos victimarios. GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 29 de agosto de 2007 confesó su responsabilidad en este homicidio por realizar un aporte esencial al sacar del billar y transportar en una motocicleta que él conducía a la víctima, conjuntamente con el sujeto alias “El burro”, y con conocimiento de que era para ejecutarla por señalamientos injustos y arbitrarios de vínculos con la subversión”.

En el secuestro simple agravado y posterior homicidio en persona protegida de Bleismer García Idrobo, participaron como autores materiales Gian Carlo Gutiérrez Suárez y alias “El Burro” en cumplimiento de la orden dada por JANIER FRANCO alias “Boris” y “Maicol”, según se demostró con las versiones de los postulados, es especial, con la del primero de los nombrados, así como con el acta de inspección a cadáver No. 15 de la fecha de comisión del punible, el protocolo de necropsia y el registro civil de defunción 03709164<sup>111</sup>.

Este hecho le fue atribuido penalmente a VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA, PÉREZ JIMÉNEZ y JANIER FRANCO en calidad de autores mediatos. No obstante, de acuerdo con la narración del hecho y los elementos suasorios aportados a la actuación se colige que respecto de JANIER FRANCO la responsabilidad se decretará en calidad de co-autor, mientras que respecto de RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino” la Sala se abstendrá de pronunciarse como ya se explicó.

**Hecho 11.** El hecho once quedó planteado como sigue: “El 05 de septiembre de 2001, GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el sujeto conocido con el alias de “El burro” abordaron al señor Belisario Elvira Sánchez (conductor de 56 años de edad) quien se encontraba en su vehículo tipo campero en el parque de la población del El Tambo, departamento de Cauca, so pretexto de que los transportara en el mencionado automotor. El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ siguió el vehículo en una motocicleta DT-125 tomando la vía que de El Tambo conduce a Popayán. Finalmente, en inmediaciones del corregimiento de Piagua, alias “El burro” disparó contra el señor Belisario Elvira Sánchez con un revólver calibre 38 ocasionado su deceso y dejando abandonado el cadáver en la misma vía. El homicidio se

---

<sup>111</sup> Ibídem.



*perpetró por órdenes de Janier Franco alias "Maycol", quien señaló –injusta y arbitrariamente– a la víctima como miliciano de la guerrilla".*

Este homicidio en persona protegida, cuya víctima el señor Belisario Elvira Vergara fue consumado por Gian Carlo Gutiérrez Suárez y alias "El Burro", cumpliendo órdenes de JANIER FRANCO alias "Boris" y "Maicol".

El hecho fue corroborado mediante los elementos materiales probatorios, la información legalmente obtenida y la evidencia física aportada por la Fiscalía, en específico, a través del acta de inspección a cadáver No. 21 de octubre 5 de 2001 y la copia del registro civil de defunción 03709199.

En este caso resulta necesario aclarar, de acuerdo con los resultados del análisis de los documentos allegados a la actuación, que el nombre correcto de la víctima es como quedó escrito en precedencia, no así el de Belisario Elvira Sánchez como lo presentó en un principio el ente fiscal, pues como lo muestra la tarjeta de preparación del documento de identidad de la Registraduría aparece como Belisario Elvira Vergara identificado con cédula de ciudadanía No. 4'609.061 y que corresponde con el número de identificación proporcionado por la Fiscalía<sup>112</sup>.

El 5 de septiembre de 2001 Belisario Elvira Sánchez fue asesinado en el municipio de Piamba, Cauca. Por tal razón, los postulados VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA, PÉREZ JIMÉNEZ y JANIER FRANCO fueron imputados por el delito de homicidio en calidad de autores mediatos. No obstante, de acuerdo con la narración del hecho y los elementos suarios aportados a la actuación se colige que respecto de JANIER FRANCO la responsabilidad se decretará en calidad de co-autor, mientras que respecto de RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino" la Sala se abstendrá de pronunciarse como ya se explicó.

**Hecho 12.** El hecho doce se presentó de la siguiente manera: *"Entre los meses de septiembre y diciembre del año 2001, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ y el sujeto conocido con el alias de "El burro", cumpliendo órdenes del comandante Janier Franco alias "Maycol", retuvieron en una estación de gasolina ubicada en el municipio de El Tambo-Cauca, al señor Nesar López Céspedes y lo transportaron en una motocicleta hasta la vereda de Chasquido, dejándolo a disposición de miembros del grupo paramilitar que comandaba alias "Charli", quienes días después procedieron a ejecutarlo por órdenes de alias "Maycol", y entregaron el cuerpo sin vida a sus familiares.*

---

<sup>112</sup> Ibídem.

*El postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en la versión rendida los días 29 de agosto y 30 agosto de 2007 confesó la retención de la víctima, alegando que desconocía que la finalidad de la misma era darle muerte”.*

El homicidio en persona protegida de Nézar López Céspedes precedido por su secuestro, en la vereda El Chasquido del municipio de El Tambo, Cauca, fue perpetrado por Gian Carlo Gutiérrez Suárez y alias “El Burro”, por orden de JANIER FRANCO alias “Boris” o “Maicol”.

Las circunstancias que rodearon el hecho fueron probadas a través de las versiones de los postulados y el hecho de la muerte mediante protocolo de necropsia de febrero 15 de 2002 y el registro de defunción 04429095<sup>113</sup>.

La anterior conducta le fue imputada a los postulados VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA y PÉREZ JIMÉNEZ en calidad de autores mediatos y se aclaró que el cargo no procedía contra JANIER FRANCO alias “Boris” y “Maicol” porque existe sentencia condenatoria del Juzgado 4 Penal del Circuito de Popayán. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya se explicó.

**Hecho 13.** El hecho trece se expuso así: “El 05 de enero de 2002, aproximadamente a las tres de la tarde, cerca al parque infantil de El Bordo, en el departamento de Cauca, en la ruta que conduce al municipio de El Patía por la vía Panamericana, el señor GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, cumpliendo órdenes del sujeto conocido por el alias de “Nelson”, Comandante del grupo paramilitar en esa localidad, asesinó al señor Paulino Uribe Muñoz, agricultor de 39 años de edad, al dispararle con un revólver calibre 38 en varias oportunidades. El homicidio lo ejecutó GIAN CARLO GUTIÉRREZ con ayuda del individuo conocido como alias “Gómez”, quien lo esperó en una motocicleta marca KMX. El hecho fue confesado por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, informando que los móviles del homicidio tenían que ver con las injustas y arbitrarias acusaciones de alias “Nelson” en contra de la víctima de ser miembro de la subversión”.

El homicidio de Paulino Uribe Muñoz ocurrido el 5 de enero de 2002 en la Vía Panamericana que del municipio de El Bordo conduce a El Patía, fue consumado por Gian Carlo Gutiérrez Suárez en compañía de alias “Gómez” quien no ha sido identificado aún por la Fiscalía, en cumplimiento de la orden impartida por alias “Nelson”.

---

<sup>113</sup> Ibídem.

La ocurrencia de la conducta se demostró con el acta de inspección a cadáver de enero 12 de 2002 elaborada por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de El Bordo, Cauca, el protocolo de necropsia 001-02 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Cauca Unidad Local El Bordo-Patía, y el registro civil de defunción 04432027<sup>114</sup>.

El homicidio en persona protegida de Paulino Uribe Muñoz le fue imputado a VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA, y PÉREZ JIMÉNEZ en calidad de autores mediatos, mientras que a MESTRA SANTAMARÍA como autor material. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya se explicó.

**Hecho 14.** El hecho catorce se plasmó como sigue: “El 07 de abril del 2002 en horas de la tarde, en la entrada por la vía Panamericana a la Vereda la Fonda del municipio del Patía (El Bordo-Cauca), el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía de otro sujeto de quien se desconoce su identidad, interceptaron por orden del Comandante del grupo paramilitar alias Nelson al señor Fredy Armando Girón Burbano, docente de 32 años de edad quien se transportaba en un vehículo de su propiedad y procedió a dispararle con arma de fuego ocasionándole la muerte. El hecho fue confesado por el postulado en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, informando que la orden de asesinarlo estaba relacionada con las acusaciones en contra de la víctima de militar en la guerrilla, acusaciones que para esta Sala son injustas y arbitrarias”.

El homicidio en persona protegida de Fredy Armando Girón Burbano ocurrido el 7 de abril de 2002 en la Vía Panamericana, zona rural del municipio de El Bordo, fue cometido por Gian Carlo Gutiérrez Suárez en compañía de una persona no identificada.

La materialidad del deceso está demostrada con el acta de inspección de cadáver No. 4 de abril 7 de 2002, protocolo de necropsia de abril 8 de 2002 elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Cauca Unidad Local El Bordo-Patía, y el registro civil de defunción 04432054<sup>115</sup>.

En calidad de autores mediatos le fue atribuida la responsabilidad a VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y CASARRUBIA POSADA. Se descartó la imputación jurídica respecto de PEREZ JIMENEZ y MESTRA SANTAMARIA,

---

<sup>114</sup> Ibídem.

<sup>115</sup> Disco Compacto de Elementos Materiales Probatorios No. 3.

en virtud a que la justicia ordinaria ya había proferido en contra de éstos últimos sentencia condenatoria. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya se explicó.

**Hecho 15.** Este hecho referido a la desaparición forzada y homicidio en persona protegida, cuya víctima es alias Turbo, no fue imputado a los postulados en la presente actuación debido a que lo fue en uno de los procesos priorizados, según información de la fiscalía. Por tanto, la Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto.

**Hecho 16.** El hecho dieciséis se informó así: *“El 15 de marzo de 2002, en inmediaciones de la hacienda “California”, a orillas de la carretera, en el sitio La india de El Patía, municipio de El Bordo, departamento de Cauca, el sujeto conocido con el alias de “El indio” en compañía del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ, asesinó con arma de fuego al señor Heberth Elías Osorio, taxista de 26 años de edad, cumpliendo órdenes del comandante conocido con el alias de “Nelson”.*

*El postulado confesó los hechos en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, e informó que la víctima había sido citada al parador Patía, lugar desde donde lo condujeron hasta el sitio donde le causaron la muerte, toda vez que era señalado como auxiliador de la guerrilla, específicamente por colaborar en los retenes que hacían en la vía que de El Bordo conduce a Bolívar en el departamento de Cauca”.*

La consumación del punible estuvo a cargo del ya condenado Gian Carlo Gutiérrez Suárez en compañía de alias El Indio, por orden de alias “Nelson”.

La muerte del señor Herbeth Elías Osorio fue acreditada mediante acta de inspección de cadáver No. 8 de marzo 15 de 2002, protocolo de necropsia de marzo 16 siguiente elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Cauca Unidad Local El Bordo-Patía y el registro civil de defunción 04432050<sup>116</sup>.

Este homicidio en persona protegida le fue imputado en calidad de autores mediatos a VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA y PÉREZ JIMÉNEZ. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias “el Fino”, como ya se explicó.

**Hecho 17.** El hecho diecisiete se indicó de la siguiente manera: *“El 03 de Junio de 2002, en la entrada a la vereda La Fonda del municipio El Patía-Cauca, el postulado*

---

<sup>116</sup> Disco Compacto de Elementos Materiales Probatorios No. 3.

*GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ coordinó la muerte de los señores José Alberto López Ramos (tornero de 40 años de edad), James Heli Medina Bermúdez (de 46 años de edad) y otro individuo que aún no ha sido identificado, quienes fueron sido señalados injusta y arbitrariamente como guerrilleros.*

*Los tres homicidios fueron confesados por GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, en su versión rendida el 30 de agosto de 2007, e informó que cumplía órdenes del jefe paramilitar conocido por el alias de "JC", comandante del Bloque Calima. Por su parte, la ejecución material de los homicidios estuvo a cargo de dos individuos, uno de ellos conocido como "Edison" y otro que había sido guerrillero, que tampoco ha sido posible su individualización, pero fue quien reconoció a las víctimas como miembros de la organización subversiva, de acuerdo a la narración de las circunstancias confesada por el postulado".*

El 3 de junio de 2002, Gian Carlo Gutiérrez Suárez en compañía de alias "Edison" y otro sujeto de quien se sabe fue miembro de la subversión y con posterioridad pasó a integrar las filas de los paramilitares, en cumplimiento de las órdenes impartidas por alias "JC", asesinaron a José Alberto López Ramos, James Helí Medina Bermúdez y una tercera persona de la que se desconoce la identidad, en la vereda La Fonda del Municipio El Patía, Cauca.

Lo que se conoce hasta ahora como verdad del hecho, es lo relatado en la versión del postulado Gian Carlo Gutiérrez Suárez, así como por los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y que fue aportada al trámite por la Fiscalía Delegada para el asunto.

En efecto, en el archivo adjunto por el ente fiscal se logra discernir que la muerte de las personas reseñadas en precedencia se probó a través de acta de inspección de cadáver, exclusivamente. En el caso de López Ramos en acta 20 de junio 4 de 2002 y de Medina Bermúdez con acta 21 de junio 4 de 2002<sup>117</sup>.

El hecho diecisiete, correspondiente al homicidio en persona protegida de José Alberto López Ramos y James Elí Medina Bermúdez le fue imputado a los postulados VELOZA GARCÍA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, CASARRUBIA POSADA y GARCÍA QUIROGA en calidad de autores mediatos. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino", como ya se explicó.

**Hecho 18.** Este hecho al igual que lo mencionado en el quince, no fue imputado a los postulados en la presente actuación debido a que se presentó de manera formal en el proceso priorizado del Bloque Calima, y que en la

---

<sup>117</sup> Ibídem.

actualidad conoce otro despacho con radicado No. 2013-00282. Por lo tanto, la Sala no hará ningún pronunciamiento.

**Hecho 19.** En este hecho se dijo: *"El 07 de junio de 2002, en horas de la mañana, en la localidad de Mojarras ubicada en el municipio de Mercaderes-Cauca, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía del individuo conocido como "Edinson" retuvieron a los señores Ovidio Díaz Rodríguez, agricultor de 24 años de edad, y Egidio Marino Galíndez, de 20 años de edad. Luego de comunicar de su retención al comandante del Bloque Calima, alias "JC", éste ordenó ejecutarlos pues sus nombres aparecían relacionados en una lista de personas que según su dicho pertenecían a la subversión. Las conductas fueron confesadas por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida los días 29 de agosto y 30 de agosto de 2007, informando que él junto con su compañero trasladaron a las víctimas en una motocicleta hasta la vereda El Cocal, municipio de Mercaderes, donde los asesinaron sobre la vía panamericana".*

Los homicidios de Ovidio Díaz Rodríguez y Egidio Marino Galíndez ocurridos el 7 de junio de 2002 en el municipio de Mercaderes, Cauca, fueron cometidos por Gian Carlo Gutiérrez Suárez y alias "Edison" por orden de alias "JC", tal como el primero de los postulados lo reconociera en versión libre.

Ahora bien, la muerte fue probada a través de los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en concreto, respecto de Ovidio Díaz Rodríguez se aportó copia del acta de inspección a cadáver de junio 7 de 2002, copia del protocolo de necropsia 022 de junio 13 de 2002 y copia del registro civil de defunción 04430168 de junio 17 de ese mismo año. En cuanto a Egidio Marino Galíndez se allegó copia del acta de inspección a cadáver de junio 7 de 2002, copia del protocolo de necropsia 021 de junio 17 de 2002 y registro civil de defunción 04430167<sup>118</sup>.

La conducta de homicidio en persona protegida, cuyas víctimas son los señores Ovidio Díaz Rodríguez y Egidio Marino Galíndez, le fue endilgada penalmente a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA y GARCÍA QUIROGA en calidad de autores mediatos y así se aceptan por la Sala.

**Hecho 20.** El hecho veinte se consignó así: *"El 13 de Mayo de 2002, en un balneario ubicado a la salida de la vía que conduce a la Unión-Nariño en el sector El Lago, en la cabecera municipal de Mercaderes, departamento de Cauca, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ acompañado de los individuos conocidos con el alias de "Antonio", Jefe del grupo paramilitar en el municipio de Mercaderes, y alias "El indio", cumplió la orden impartida por el comandante del Bloque Calima conocido con el alias "JC" de asesinar con arma de fuego a Miguel Ángel Rodríguez Erazo, de 20 años de edad, quien había sido señalada arbitrariamente como miliciano de la subversión".*

---

<sup>118</sup> Ibídem.

El homicidio de Miguel Ángel Rodríguez Erazo perpetrado el 13 de mayo de 2002 en el municipio de Mercaderes, Cauca, en el Balneario del sector conocido como el Lago, ubicado en la vía que de La Unión conduce a Nariño, fue cometido por Gian Carlo Gutiérrez Suárez, alias "Antonio" quien se desempeñaba como comandante paramilitar en ese municipio y alias "El Indio", en cumplimiento de la orden proferida por alias "JC".

La muerte fue corroborada con el aporte del acta de inspección a cadáver de mayo 13 de 2002 elaborada y suscrita por el Comando de Policía de Mercaderes, el protocolo de necropsia 015 de mayo 14 de 2002 emitido por el Hospital del Nivel I de Mercaderes y la copia del registro civil de defunción 04430159<sup>119</sup>.

Este homicidio en persona protegida de Miguel Ángel Rodríguez Erazo, le fue imputado por la Fiscalía Delgada a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA y ARISTIZÁBAL RAMÍREZ en calidad de autores mediatos. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino", como se ha venido mencionando.

**Hecho 21.** El hecho veintiuno se fijó como sigue: *"El 03 de Noviembre de 2002, en el parque del municipio de Guadalupe, departamento de Huila, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en compañía del sujeto conocido con el alias de "El Gato" y otras dos personas aún no identificadas, retuvieron al señor José Wilder Díaz Cuellar, agricultor de 22 años de edad, y lo trasladaron hasta la vereda Los Cauchos, por la vía que conduce de Guadalupe a San Antonio-Garzón (Huila), donde le causaron la muerte mediante disparos de arma de fuego que le propinó el sujeto conocido con el alias de "El Gato". La conducta fue confesada por el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su versión rendida el día 20 de noviembre de 2007, e informó que la víctima fue señalada como miliciano de la guerrilla, asunto que motivó la orden de acabar con su vida".*

El secuestro y posterior asesinato de José Wilder Díaz Cuéllar el 3 de noviembre de 2002, fue cometido en la vereda los Cauchos en la vía que conduce del municipio de Guadalupe, Huila, a Garzón en el mismo departamento, por Gian Carlo Gutiérrez Suárez en compañía de tres sujetos más, uno de los cuales fue identificado como alias "El Gato" y fue probado a través de la copia del acta de inspección a cadáver de noviembre 4 de 2002 y copia del registro civil de defunción 04503538 de Guadalupe, Huila<sup>120</sup>.

---

<sup>119</sup> *Ibídem.*

<sup>120</sup> *Ibídem.*

Esta conducta de secuestro simple y agravado, en concurso material con el homicidio en persona protegida, le fue imputado a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, PÉREZ JIMÉNEZ y JANIER FRANCO como autores mediatos, mientras que a JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA se le imputó en calidad de autor material. No obstante, de acuerdo con los elementos suasorios aportados a la actuación se colige que respecto de JANIER FRANCO la responsabilidad se decretará en calidad de co-autor, mientras que respecto de RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino" la Sala se abstendrá de pronunciarse como ya se explicó.

**Hecho 22.** El hecho veintidós quedó plasmado así: *"El 01 de marzo de 2003, en la vereda Alto Junín del municipio de San José de Isnos del departamento del Huila, el postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, acompañado por Jhon Jader Montenegro Arias, disparó su revolver calibre 38 en contra de la humanidad de Luis Alfonso Gómez Ordóñez, agricultor de 36 años de edad) cuando se encontraba en su casa de habitación, ocasionándole la muerte. La orden de acabar con la vida del señor Óme Ordóñez la profirió el sujeto conocido con el alias de "Rigo", jefe del grupo paramilitar del municipio anotado, quien señalara a la víctima como miliciano de la guerrilla. El postulado confesó el homicidio en su versión rendida el día 30 de agosto de 2007, e informó que para localizar a la víctima se valieron de un guía quien fue posteriormente asesinado en la gallera de San José de Isnos, presuntamente por la guerrilla".*

El homicidio de Luis Alfonso Óme Ordoñez, fue ejecutado por Gian Carlo Gutiérrez Suárez y Jhon Jader Montenegro Arias por orden de alias "Rigo", esto es, de JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ comandante paramilitar en el departamento de Huila y le fue imputado a VELOZA GARCÍA, CASARRUBIA POSADA, ARISTIZÁBAL RAMÍREZ y PÉREZ JIMÉNEZ en calidad de autores mediatos, mientras que GALEANO LÓPEZ lo fue como co-autor material, pues fue el encargado de dar la orden específica de muerte. Por lo tanto, la responsabilidad se decretará en tales términos empero, con excepción de lo aducido contra RAMÍREZ ARISTIZÁBAL alias "el Fino", como ya se explicó.

**Hecho 23.** En el hecho veintitrés se expuso: *"El 23 de mayo de 2008, Jorge Enrique Pungo Gómez acudió ante las autoridades denunciando que el 06 de octubre de 2001 fue víctima de desplazamiento forzado. Según lo descrito por la víctima, fue citado en dos oportunidades por los paramilitares para que acudiera hasta la vereda de El Tablón en el municipio de El Tambo, departamento de Cauca. En la primera de tales reuniones, se entrevistó con los paramilitares conocidos con los alias de "El Tuerto", como se le conoce al postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ, y alias "Peliteñido", quienes le exigieron dinero en efectivo y dos celulares a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia, tras haber sido acusado de ser auxiliador de la guerrilla. Uno de los celulares requeridos fue entregado a alias "Peliteñido" en la segunda citación que se le hizo, a la cual acudió con su hermana Carmen Pungo, luego asesinada por el grupo paramilitar (este hecho venía relacionado en el escrito de cargos en contra del postulado GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ como Hecho No. 6 y que posteriormente fue retirado). En esta segunda citación, informa la víctima, los interrogaron, los amenazaron de muerte y luego de tres horas de retención los dejaron ir con la condición de que abandonaran la*



*población de El Tambo, razón por la cual se trasladó la ciudad de Popayán. No obstante, en octubre del mismo año, al enterarse de la muerte de su hermana Carmen Pungo a manos de los paramilitares, pidió protección a la Fiscalía General de la Nación, entidad que le colaboró para su traslado a la ciudad de Bogotá, donde reside actualmente, dejando abandonada su finca cafetera”.*

El último de los hechos imputados por la Fiscalía Delegada corresponde al calificado como deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y extorsión, cuya víctima fue identificada como Jorge Enrique Pungo Gómez, por el que fue condenado por esta Sala de justicia y paz, Gian Carlo Gutiérrez el 4 de septiembre de 2012 como autor material y la fiscalía solicitó sentencia anticipada frente a los aquí postulados, pero solamente por el desplazamiento forzado del hermano de la también víctima Carmen Pungo.

La conducta de desplazamiento forzado cuya víctima es el señor Jorge Enrique Pungo Gómez está plenamente demostrada con la versión de los postulados Gian Carlo Gutiérrez Gómez y MORELO PALACIOS, como autores materiales y los demás, VELOZA GARCIA, CASARRUBIA POSADA, PEREZ JIMENEZ Y JANIER FRANCO como autores mediatos atendiendo a la calidad de comandantes –de Bloque y de Frente- que ostentaban para la fecha.

### **DOSIFICACIÓN PUNITIVA**

De conformidad con la imputación jurídica efectuada por la Fiscalía Delegada, legalizada por el magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, los punibles cometidos por los postulados se contraen a los siguientes:

- 1.** HÉBERT VELOZA GARCÍA: veintiún (21) homicidios, diez (10) secuestros y un (1) desplazamiento forzado de población civil.
- 2.** ELKIN CASARRUBIA POSADA: veintiún (21) homicidios, diez (10) secuestros y un (1) desplazamiento forzado de población civil.
- 3.** JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ: la Sala se abstendrá de proferir decisión contra éste postulado.

**4.** JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ: quine (15) homicidios, ocho (8) secuestros y un (1) desplazamiento forzado de población civil.

**5.** JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS: concierto para delinquir, nueve (9) homicidios, cuatro (4) secuestros y un (1) desplazamiento forzado.

**6.** JANIER FRANCO: diez (10) homicidios, seis (6) secuestros y un (1) desplazamiento forzado de población civil.

**7.** JAIME MANUEL MESTRE SANTAMARÍA: un (1) homicidio.

**8.** JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA: cuatro (4) homicidios y dos (2) secuestros.

**9.** JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA: un (1) homicidio.

**10.** JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ: Un (1) homicidio.

Resulta pertinente aclarar en este punto de la discusión, en primer lugar, y como ya se advirtió al inicio de la presente providencia de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía Delegada para el asunto, que HÉBERT VELOZA GARCÍA es el único postulado condenado por la jurisdicción transicional por el punible de concierto para delinquir, y que los restantes postulados, con excepción de MORELO PALACIOS, han sido imputados por el referido delito base de concierto para delinquir ante esta jurisdicción empero, en el proceso priorizado correspondiente al Bloque Calima<sup>121</sup>, tal como se discutió en la audiencia pública de sentencia anticipada celebrada el 3 de febrero de la presente anualidad.

En consecuencia, sin que ello comporte la omisión de un requisito de indispensable verificación, la Sala prescindirá de emitir pronunciamiento respecto del punible de concierto para delinquir en los casos reseñados, en razón a que la mayoría de los postulados en la presente actuación ya fueron

---

<sup>121</sup> Proceso radicado 2013-00282. Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. M. P. Léster María González Romero

objeto de imputación por dicha conducta lo que implicaría, a la postre, la vulneración del principio del non bis in ídem.

Así las cosas, la condena por dicho comportamiento típico sólo procederá respecto de JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS alias “El Loco”, “Pelirrojo” y “Camilo Jr”, en las condiciones que en adelante se señalarán.

Por último, que de conformidad con la época en la que fueron cometidas las conductas objeto de juzgamiento, las normas aplicables serán las contenidas en la ley 599 de 2000, graduadas con las modificaciones posteriores si a ello hubiere lugar empero, con respeto del principio de favorabilidad cuando resulte necesaria su aplicación.

En este orden de ideas, se precisa entonces que las penas contenidas para los punibles enlistados son las siguientes:

### **1. Concierto para delinquir**

Tal como se advirtió en precedencia, el pronunciamiento respecto a la responsabilidad por la comisión del punible de concierto para delinquir versará con exclusividad frente a JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS alias “El Loco”, “Pelirrojo” y “Camilo Jr”, pues es el único postulado al que le fue imputada la conducta, en virtud a que VELOZA GARCÍA ya fue condenado por tal delito y los restantes postulados están siendo juzgados por esta misma conducta en el proceso priorizado con radicado 2013-00282.

En este orden de ideas, resulta necesario advertir que el concierto para delinquir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, tiene prevista una pena entre tres (3) y seis (6) años de prisión. Sin embargo, como la concertación se estableció para cometer delitos de desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro extorsivo, entre otros, la pena de prisión ha de ser la correspondiente entre seis (6) y doce (12) años y multa de dos mil (2000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pena de prisión				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
72	90	108	126	144

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
2000	6500	11000	15500	20000

Por lo tanto, la pena se ubicará en el máximo del primer cuarto, esto es, en noventa (90) meses de prisión, y multa equivalente a seis mil quinientos (6500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Homicidio en persona protegida

El homicidio en persona protegida, de conformidad con el artículo 135 de la ley 599 de 2000, consagra una pena de prisión entre trescientos sesenta (360) y cuatrocientos ochenta (480) meses y multa de 2000 a 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
360	390	420	450	480

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
2000	2750	3500	4250	5000

En consecuencia, la pena se ubicará en el máximo del primer cuarto, esto es, en trescientos noventa (390) meses de prisión y multa de dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Desplazamiento forzado

Comporta la imposición de una pena que oscila entre ciento veinte (120) y doscientos cuarenta (240) meses de prisión y multa de mil (1000) a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pena de prisión				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
120	150	180	210	240

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
1000	1250	1500	1750	2000

En consecuencia, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es, en ciento cincuenta (150) meses de prisión y multa de mil doscientos cincuenta (1250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Secuestro simple agravado

Esta conducta contemplada en el artículo 168 de la ley 599 de 2000, tiene una pena entre ciento veinte (120) y doscientos cuarenta (240) meses de prisión y multa de seiscientos (600) a mil (1000) salaros mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo del artículo 170, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en el caso de presentarse una cualquiera de las agravantes contenidas en esa disposición normativa con excepción del numeral 11. Así las cosas, la pena quedará delimitada entre ciento sesenta (160) y trescientos sesenta (360) meses de prisión y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios.

Pena de prisión				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
160	210	260	310	360
Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
800	975	1150	1325	1500

En consecuencia, efectuado el análisis anterior, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es, en doscientos diez (210) meses de prisión y multa de novecientos setenta y cinco (975) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Efectuadas las precisiones anteriores, corresponde ahora realizar el proceso de dosificación punitiva conforme está consagrado en el Libro I, Título I, Capítulo Segundo, entre los artículos 54 a 62 de la ley 599 de 2000, respecto década uno de los postulados.

**1. HÉBERT VELOZA GARCÍA**

Por razón de las conductas imputadas y demostradas respecto de éste postulado, se debe indicar que los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.

En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.

Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo, pero además y, principalmente, por tratarse del máximo comandante del Bloque Calima.

Respecto de la primera de las circunstancias enlistadas por cuanto se trata de conductas de lesa humanidad y crímenes de guerra que atentan contra las bases fundamentales de la concepción del hombre, en específico, la dignidad humana. Frente a la segunda, debido a que el daño ocasionado a las víctimas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos y, por último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno conocimiento y voluntad, los cuales se vieron incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes de esta decisión.

Adicionalmente, debido a la concurrencia de una pluralidad alta de delitos como ya se explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480 meses de prisión.

Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave en el caso específico de VELOZA GARCÍA es la señalada para el delito de homicidio

en persona protegida que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
2000	2750	3500	4250	5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (31 en total de las que 21 corresponden a homicidio en persona protegida, 10 a secuestro y 1 a desplazamiento forzado), las cuales comportan en su mayoría también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con la previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo imponible.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado HÉBERT VELOZA GARCÍA alias “H.H.” la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, por último, la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.



2. ELKIN CASARRUBIA POSADA

De manera adicional a las consideraciones generales tenidas en cuenta para VELOZA GARCÍA, ha de decirse que en el presente caso la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.

Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Respecto de la primera de las circunstancias enlistadas por cuanto se trata de conductas de lesa humanidad y crímenes de guerra que atentan contra las bases fundamentales de la concepción del hombre, en específico, la dignidad humana. Frente a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos y, por último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno conocimiento y voluntad, los cuales se vieron incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron cometidas la mayoría de ellos y que se expusieron en los apartes pertinentes de esta decisión.

Adicionalmente, debido a la concurrencia de una pluralidad alta de conductas punibles, como ya se explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo para el concurso de conductas punibles, quedando en la pena definitiva de 480 meses de prisión.

Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave en el caso específico de CASARRUBIA POSADA es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
2000	2750	3500	4250	5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (31 en total de las que 21 corresponden a homicidio en persona protegida, 10 a secuestro y 1 a desplazamiento forzado), las cuales comportan en su mayoría también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con la previsiones del numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo imponible.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado ELKIN CASARRUBIA POSADA la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

**3. JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ**

En cuanto a éste postulado y, tal como se anunció en los acápites precedentes, no se logró demostrar el grado de participación respecto de los hechos objeto de análisis. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse en este caso.

**4. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ**

Con base en las mismas consideraciones de derecho tenidas en cuenta para los anteriores postulados, es claro que las conductas punibles fueron cometidas por PÉREZ JIMÉNEZ en concurso homogéneo y heterogéneo.

Así mismo, que la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada uno de ellos comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Adicionalmente, debido a la concurrencia de una pluralidad alta de delitos como ya se explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480 meses de prisión.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, de la que la más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa			
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
2000	2750	3500	4250
5000			

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (23 en total de las que 15 corresponden a homicidio en persona protegida y 8 a secuestro), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la correspondiente a 40 mil salarios mínimos de conformidad con la previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo imponible.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

5. JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones de derecho que para los anteriores postulados, pues es claro que las conductas fueron cometidas por MORELO PALACIOS en concurso homogéneo y heterogéneo.

Así mismo, que la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Adicionalmente, debido a la concurrencia de una pluralidad alta de delitos como ya se explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480 meses de prisión.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, de la que la más grave es la señalada para el delito de concierto para delinquir agravado que oscila entre 2 mil y 20 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa			
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
2000	6500	11000	15500
			20000

Por lo tanto, la pena se ubicará en el máximo del primer cuarto, esto es, en noventa (90) meses de prisión, y multa equivalente a seis mil quinientos (6500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 6500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (10 en total de las que 1 corresponden a concierto para delinquir, 4 a homicidio en persona protegida, 4 a secuestro y 1 a desplazamiento forzado), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la correspondiente a 22.650 salarios mínimos de conformidad con la previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo imponible.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil seiscientos cincuenta (22.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

## **6. JANIER FRANCO**

En cuanto a éste postulado y, con base en las mismas consideraciones de derecho ya referidas, es claro que las conductas punibles fueron cometidas por JANIER FRANCO en concurso homogéneo y heterogéneo.

Así mismo, que la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada uno de ellos comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Adicionalmente, debido a la concurrencia de una pluralidad alta de delitos como ya se explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480 meses de prisión.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, de la que la más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
2000	2750	3500	4250
			5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (17 en total de las que 10 corresponden a homicidio en persona

protegida, 6 a secuestro y 1 a desplazamiento forzado), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la correspondiente a 31.600 salarios mínimos de conformidad con la previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo imponible.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado JANIER FRANCO la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un mil seiscientos (31.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

## **7. JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA**

Resulta necesario advertir frente a este postulado, que sólo le fue imputada una conducta punible, por tanto, que no operan las mismas consideraciones de dosificación punitiva expuestas en los casos anteriores, pues no se trata en estricto sentido de un concurso de conductas punibles.

En tales condiciones, es claro que el único delito por el que fue imputado en el presente asunto, -homicidio en persona protegida de Paulino Uribe Muñoz-, narrado en el hecho trece, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada uno de ellos comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.



1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real ocasionado a la víctima y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, la que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa			
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
2000	2750	3500	4250
			5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado MESTRA SANTAMARÍA la pena principal de trescientos noventa (390) meses de prisión, multa de dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

8. JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA

Las conductas punibles fueron cometidas por GARCÍA QUIROGA en concurso homogéneo y heterogéneo, al igual que lo planteado frente a los demás postulados, exceptuando al mencionado con antelación.

Así mismo, que la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada uno de ellos comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
360	390	420	450
			480

Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Adicionalmente, debido a la concurrencia de una pluralidad alta de delitos como ya se explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480 meses de prisión.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, de la que la más grave es la señalada para el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa			
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto
2000	2750	3500	4250
			5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (6 en total de las que 4 corresponden a homicidio en persona protegida y 2 a secuestro), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la correspondiente a 12 mil 850 salarios mínimos de conformidad con la previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo imponible.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de doce mil ochocientos cincuenta (12.850) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

## **9. JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA**

En cuanto a éste postulado resulta necesario advertir que sólo le fue imputado un concurso heterogéneo de delitos, por tanto, que operan las mismas consideraciones de dosificación punitiva expuestas en dichos eventos, en específico, por cuanto se demostró la comisión de los punibles de secuestro y homicidio correspondientes al hecho 21.

En tales condiciones, es claro que el delito de homicidio por el que fue imputado comporta una pena de prisión más drástica que la de secuestro

simple agravado. Por tanto, se fijará como criterio de dosificación al cual se aplicará el aumento por razón del concurso. En este orden de ideas y, co,o se ha dicho en los demás casos, la pena para dicho punible oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada uno de ellos comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
360	390	420	450	480

A dicha pena se aumentará la de 60 meses de prisión por el concurso con el delito de secuestro simple agravado. Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 450 meses, en razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real ocasionado a la víctima y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, la que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
2000	2750	3500	4250	5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los cuales se adicionará una proporción igual a la aplicada para la pena de prisión por razón del concurso de conductas cifrándola en la definitiva de 3173.5 smlmv.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240

meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado SERNA CARDONA la pena principal de cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión, multa de tres mil ciento setenta y tres punto cinco (3173.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

**10. JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ**

Frente a este postulado resulta necesario advertir, tal como se indicó en los casos de MESTRE SANTAMARÍA y SERNA CARDONA, que sólo le fue imputada una conducta punible, por tanto, que no operan las mismas consideraciones de dosificación punitiva expuestas en los casos restantes, pues no se trata en estricto sentido de un concurso de conductas punibles.

El único delito imputado en el presente asunto, fue el de homicidio en persona protegida de Luís Alfonso Óme Ordoñez, correspondiente al hecho veintidós, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses y que aplicados los cuartos de movilidad del artículo 60 ejusdem, cada uno de ellos comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto	2º cuarto	3er cuarto	4º cuarto
360	390	420	450
			480

Por lo tanto, en aplicación del artículo 61 ibídem la pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto de 390 meses, en razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real ocasionado a la víctima y a la intensidad del dolo, tal como se advirtió en los casos anteriores.

Lo mismo ocurre para la pena de multa, la que oscila entre 2 mil y 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el ámbito de movilidad queda establecido de la siguiente manera.

Pena de multa				
1er cuarto	2° cuarto	3er cuarto	4° cuarto	
2000	2750	3500	4250	5000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer cuarto, esto es, en 2750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida.

En consecuencia, la Sala le impondrá al postulado GALEANO LÓPEZ la pena principal de trescientos noventa (390) meses de prisión, multa de dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1º del artículo 39, y el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

**ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS**

El criterio reiterado de esta Corporación, en especial, con ponencia de quien en la actualidad cumple idéntico cometido y, con fundamento en los artículos 20 y 22 de la ley 975 de 2005, y 25 del decreto 3011 de 2013, se ha indicado que:

*" (...) son dos los eventos en los que procede el trámite de acumulación. De una parte, la relativa a los procesos esto es, la de actuaciones que aún se encuentren en curso y, de otra, la de penas, en tratándose de decisiones que han cobrado firmeza, es decir, que están debidamente ejecutoriadas, obviamente, proferidas por la jurisdicción ordinaria. En los dos eventos resulta admisible el referido procedimiento, siempre y cuando se trate de conductas cometidas por el postulado durante y con ocasión de su pertenencia al grupo".<sup>122</sup>*

De igual modo y, en armonía con lo expresado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia<sup>123</sup>, que:

*"(...) dos son los tipos de acumulación susceptibles de verificarse en el procedimiento de justicia y paz: i) la acumulación de los procesos y de penas proferidas por la justicia ordinaria, cuya solicitud debe realizarla la Fiscalía o el postulado, directamente o a través de defensor, y ii) la realizada al interior de las sentencias parciales proferidas por cada Sala de Justicia y Paz y que tiene que ver con las penas ordinarias impuestas en dichas decisiones"<sup>124</sup>.*

Por otra parte, esta Corporación ha definido que la acumulación jurídica de penas tiene por objeto realizar una redosificación punitiva que favorezca los intereses del postulado. Bajo esta premisa y, en atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia<sup>125</sup>, en armonía con lo consagrado en la ley 975 de 2005<sup>126</sup>, debe resolverse dentro de la sentencia.

Ahora bien, para realizar la acumulación jurídica de penas en el caso concreto, debe tenerse en cuenta que la Fiscalía 18 de la Unidad de Justicia Transicional Seccional Cali, Valle del Cauca, informó sobre la existencia de varias sentencias ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción ordinaria contra algunos de los postulados y que tienen que ver con los hechos imputados en la presente actuación. Se trata de las siguientes:

**1.** Respecto de JANIER FRANCO se acreditó la existencia de las siguientes sentencias condenatorias y que tienen que ver con los hechos objeto que se juzgan en la presente actuación:

---

<sup>122</sup> Ver entre otras, la decisión de segunda instancia en el radicado 2007-82701 proferida en la actuación adelantada contra Fredy Rendón Herrera.

<sup>123</sup> Providencia de octubre 24 de 2012 en el proceso radicado 39957. M. P. José Luis Barceló Camacho

<sup>124</sup> Ver entre otras, la decisión de segunda instancia en el radicado 2007-82701 proferida en la actuación adelantada contra Fredy Rendón Herrera.

<sup>125</sup> Ver entre otras decisiones la de diciembre 12 de 2012 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado No. 38381, con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos Martínez.

<sup>126</sup> Artículo 20.

- a. Sentencia condenatoria de agosto 10 de 2012 del Juzgado 4 Penal del Circuito de Popayán, en el radicado 2012-10015, por el homicidio de Jaime Quirá Cifuentes. Esta conducta se relacionó en el hecho 1 de la presente decisión.
- b. Sentencia condenatoria de noviembre 26 de 2012 del Juzgado 4 Penal del Circuito de Popayán, en la actuación radicada 2012-0014 por el homicidio de David Ospina González. Esta conducta se relacionó en el hecho 3 de la presente decisión.
- c. Sentencia condenatoria de diciembre 30 de 2013 del Juzgado 4 Penal del Circuito de Popayán, por los punibles de homicidio y secuestro simple y cuya víctima fue Nezar López Céspedes. Esta conducta se relacionó en el hecho 12 de la presente decisión.

**2.** Respecto de ELKIN CASARRUBIA POSADA se registró sentencia condenatoria de junio 25 de 2012 proferida por el Juzgado 4 Penal del Circuito de Popayán en el radicado 2012-0009, por los punibles de homicidio en concurso con secuestro simple agravado y cuyas víctimas fueron Emilson Albeiro Peñafiel Ardila, Felipe Antonio Peñafiel Muñoz, Wilmar Jair López Peñafiel y Marino Enrique Báez. Esta conducta se relacionó en el hecho dos de la presente decisión.

**3.** Respecto de JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ se acreditó la existencia de las siguientes sentencias condenatorias y que tienen que ver con los hechos objeto que se juzgan en la presente actuación:

- a. Sentencia condenatoria de junio 25 de 2012 del Juzgado 4 Penal del Circuito de Popayán, en la actuación radicada 2012-0009 por los delitos de homicidio y secuestro simple agravado y cuyas víctimas fueron Emilson Albeiro Peñafiel Ardila, Felipe Antonio Peñafiel Muñoz, Wilmar Jair López Peñafiel y Marino Enrique Báez. Esta conducta se relacionó en el hecho dos de la presente decisión.
- b. Sentencia condenatoria de marzo 11 de 2011 del Juzgado Penal del Circuito de El Patía por el delito de homicidio y cuya víctima fue Fredy Armando Girón Burbano. Esta conducta se relacionó en el hecho 14 de la presente decisión. Sin embargo, debe aclararse que la Fiscalía Delegada no aportó registro de radicado de la actuación referida.



Conforme con lo anterior, se dirá entonces que las sentencias acumuladas serán las proferidas en los radicados 2012-10015 y 2012-0014, del Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Popayán, Cauca, contra JANIER FRANCO. Así mismo, la sentencia proferida contra CASARRUBIA POSADA Y PÉREZ JIMÉNEZ por la autoridad reseñada, en el radicado 2012-0009. No se acumulará la sentencia proferida el 30 de diciembre de 2013 contra JANIER FRANCO debido a que no se aportó copia de la decisión ni otro documento que permitiera verificar la existencia de la decisión, así como la sentencia dictada el 11 de marzo de 2011 del Juzgado de El Patía, pues tal como se dijo, no se aportó documento que permitiera conocer su existencia.

Acorde con lo antedicho, debe decirse que para determinar el quantum punitivo que le corresponde al desmovilizado con ocasión de la acumulación jurídica de penas, se debe aplicar lo señalado para los casos de concurso de conductas punibles, esto es, partiendo de la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el inciso 2° del artículo 31 de la Ley 599 de 2000<sup>127</sup>, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.

No obstante, en el caso concreto los postulados de los que se verificó la existencia de las anteriores sentencias condenatorias fueron condenados con la pena de cuarenta años correspondiente a la máxima imponible para la fecha de comisión de los hechos. Por lo tanto, la pena se mantendrá en lo que fue señalada para cada uno de los postulados en el acápite pertinente.

De igual modo, debe tenerse en cuenta que la jurisdicción transicional ha proferido sentencia contra el postulado HÉBERT VELOZA GARCÍA por la comisión del punible de concierto para delinquir, entre otros, llevadas a cabo durante su pertenencia al Bloque Bananero de las ACCU<sup>128</sup>. Así mismo, que en dicha sentencia se le concedió la pena alternativa en cuantía de ochenta y

---

<sup>127</sup> Sin la modificación incorporada por la Ley 890 de 2004.

<sup>128</sup> Sala de Justicia y Paz, Tribunal de Bogotá. Sentencia de octubre 30 de 2013, M. P. Eduardo Castellanos Roso.

cuatro meses. Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia<sup>129</sup> ordenó modificar dicha sanción e imponerla en el tope máximo de 96 meses, esto es, 8 años de prisión.

En consecuencia, la Sala mantendrá la pena alternativa dictada contra el nombrado VELOZA GARCÍA y ratificará la definitiva de ocho (8) años de prisión por concepto de pena alternativa.

Restaría indicar, que aunque en los archivos digitales allegados por la Fiscalía Delegada se observa la existencia probable de una serie de sentencias condenatorias proferidas contra los postulados, copias de las mismas no fueron adjuntadas, por lo tanto, se exhortará al ente investigador para que de existir los referidos pronunciamientos, solicite la acumulación en alguno de los procesos que en la actualidad cursan en la jurisdicción transicional.

### **PENA ALTERNATIVA**

En criterio reiterado de la Sala se ha indicado que la alternatividad penal es un beneficio que incorpora una rebaja punitiva significativa, en razón a las finalidades que comporta el proceso transicional de justicia y paz contenido en la ley 975 de 2005 y que a ella pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley sometidos a un proceso de reincorporación a la vida civil, considerados autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos. Así mismo, que la concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición<sup>130</sup>.

---

<sup>129</sup> Radicado 42799 de noviembre 20 de 2014. M. P. Patricia Salazar.

<sup>130</sup> Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006.

De igual modo, que dicho beneficio debe estar precedido de la determinación de la pena ordinaria con fundamento en lo dispuesto por la ley 599 de 2000, y de la verificación de los requisitos de elegibilidad previstos por la ley 975 de 2005. Por último, que la pena alternativa resulta determinable por la calidad, cantidad de delitos y el quantum punitivo de los mismos<sup>131</sup>.

Así las cosas, es claro entonces que la pena ordinaria impuesta a los postulados fue dosificada con fundamento en lo previsto en la ley 599 de 2000, por razón de lo que debió imponerse la más grave según su naturaleza aumentada hasta en otro tanto, como se vio en el acápite de dosificación punitiva.

Para el caso concreto de los postulados HÉBERT VELOZA GARCÍA, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO, JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA, JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS, atendida su condición de máximos responsables al interior de la organización en la mayoría de los casos y la gravedad de las conductas imputadas, se colige que la imposición de la pena alternativa debe ajustarse al máximo correspondiente a ocho (8) años de prisión. De igual modo y, como se dijo en el acápite precedente, que la misma se mantendrá respecto de VELOZA GARCÍA, en los términos en que se expondrán más adelante.

En lo que tiene que ver con MESTRA SANTAMARÍA, SERNA CARDONA y GALEANO LÓPEZ, a quienes no se les impuso una pena ordinaria equivalente al máximo permitido por la ley 599 de 2000 al tiempo de la comisión de los punibles, esto es, de cuarenta años de prisión, se les impondrá la pena alternativa de siete (7) años y seis (6) meses en el caso de MESTRA SANTAMARÍA y de GALEANO LÓPEZ, mientras que de siete (7) años y nueve (9) meses para SERNA CARDONA teniendo en cuenta su participación activa

---

<sup>131</sup> Tal y como se expuso en sentencia reciente proferida contra Guillermo Pérez Alzate y otros. Pág. 654.

en la organización al margen de la ley y la gravedad de la conducta por la que fueron condenados.

En este orden, se les hará saber a los postulados referidos que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas dentro de la presente sentencia ocasionará la revocatoria del beneficio concedido y, en consecuencia, deberán cumplir la sanción principal y las accesorias impuestas en los términos señalados en el artículo 29 de la ley 975 de 2005.

De igual manera, se le advertirá que si con posterioridad a la presente sentencia y hasta el término de la sentencia ordinaria aquí señalada, la autoridad judicial competente determina que la estructura a la que perteneció no entregó, ofreció o denunció todos los bienes adquiridos por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderán el beneficio de la pena alternativa, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012.

Finalmente, tal como se advirtió en párrafos precedentes, resulta necesario aclarar el caso de la pena alternativa de VELOZA GARCÍA.

Pues bien, en criterio asentado por esta Corporación, en específico, en la sentencia proferida contra Orlando Villa Zapata<sup>132</sup>, se advirtió de la posibilidad ofrecida por la Corte Suprema de Justicia de proferir sentencias parciales contra los postulados de justicia y paz a propósito de la participación en grupos organizados al margen de la ley. Por lo tanto, que no existe limitación para emitir varias decisiones de responsabilidad respecto de un mismo postulado al tratarse del estudio de nuevos cargos.

No obstante, ante tal situación jurídica se planteó el interrogante de “si al existir dos penas alternativas de una misma extensión, como en el caso (...),

---

<sup>132</sup> Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de febrero 24 de 2015. M. P. Uldi Teresa Jiménez López. Radicado. 110016000253200883612.

sería procedente acumular los montos (..)”, a lo que se respondió de la siguiente manera:

*“debe indicar la Sala que emerge imposible dicha vía, pues de la teleología al respecto implantada por el legislador en la ley 975 de 2005, así como en la ley 1592 de 2012, es factible admitir que los sancionados no tendrían que purgar una pena alternativa mayor a 8 años de prisión por sus acciones perpetradas, luego el permitirse en esta jurisdicción la acumulación de éstas acorde con las normas penales posibles de aplicar vía principio de complementariedad, sería tanto como imponer nuevas obligaciones no predichas por las previsiones transicionales en cita, lo que generaría un campo jurídico inseguro con probables afectaciones al debido proceso de los postulados, al imponer nuevas cargas que no se encuentran descritas en la ley.*

*1346. Con ello, se tendrá entonces que la emisión de varias decisiones que contenga una pena alternativa a imponer, más que un monto nuevo dosificado, será la ratificación de aquella inicialmente impuesta, con la única finalidad de buscar la continuación de la evaluación de los hechos que no habían sido enrostrados en decisiones pasadas (cargos parciales), pero por lo cual, se repite, no tendrá una sanción mayor alternativa de 8 años.*

*1347. Zanjado lo anterior, afirma este juez colegiado, que es inexistente restricción legal o jurisprudencial de algún tipo para efectuar un nuevo pronunciamiento respecto de los hechos que hoy se atribuyen a ORLANDO VILLA ZAPATA. Lo que no altera la decisión de mantener una sanción alternativa de ocho (8) años, como se explicó”<sup>133</sup>.*

Así las cosas, la decisión respecto de HÉBERT VELOZA GARCÍA será la de mantener la pena alternativa de prisión de ocho (8) años impuesta en la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá de octubre 30 de 2013 cuya ponencia le correspondió al magistrado Eduardo Castellanos Roso<sup>134</sup>.

### **INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL**

El incidente de reparación integral previsto en el artículo 23 de la ley 975 de 2005, procede una vez la Sala de Justicia y Paz del correspondiente Tribunal declare la legalidad de la aceptación de cargos, siempre y cuando medie previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal del caso o del Ministerio Público a instancia de aquella, esto es, de la víctima, caso en el cual el magistrado ponente abrirá el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

---

<sup>133</sup> Ibídem.

<sup>134</sup> Proceso radicado No. 11-001-60-00 253-2006 810099

De igual modo, la norma reseñada establece el procedimiento por adelantar y, en caso de proceder la pretensión incoada, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que previamente ha aceptado los cargos y se dispone lo necesario para que los intervinientes concilien. En caso de acuerdo, su contenido se incorpora a la decisión que falla el incidente mientras que, en caso de no lograrse el consentimiento de las partes, se ordena la práctica de la prueba ofrecida por las partes, se recibe la alegación que fundamentan las pretensiones y en el mismo acto se falla el incidente.

La decisión adoptada en cualquiera de los dos eventos se incorpora a la sentencia condenatoria.

En el mismo sentido, el artículo 24 ibídem establece que en la sentencia condenatoria se fijará, en lo que interesa ponderar para los actuales fines, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. Por lo tanto, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la reparación de las víctimas acreditadas en la presente actuación, teniendo en cuenta que las restantes ya fueron objeto de indemnización en la sentencia proferida por esa Corporación con ponencia de la magistrada Léster María González Romero, y que sirvió como sentencia matriz tanto para la declaración de responsabilidad y la imposición de condena y pena alternativa, como para la reparación de las víctimas.

No obstante, en este punto de la discusión conviene aclarar que los artículos 23 y 24 de la ley 1592<sup>135</sup> modificaron y adicionaron la ley 975 de 2005

---

<sup>135</sup> El texto completo de las normas declaradas inexequibles es el siguiente:

**"Artículo 23.** Incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de oficio al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de veinte (20) días hábiles.

La audiencia del incidente se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo.

La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la promueve no es víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.

Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las afectaciones causadas a la víctima, **las cuales en ningún caso serán tasadas**. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oír el fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.

La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, **y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión**

en punto al incidente de reparación integral empero, mediante pronunciamientos de la Corte Constitucional, cuyo conocimiento se dio en virtud de acción pública de inconstitucionalidad, se declaró la inexequibilidad de dichas normas, por ende, con la necesidad de revivir las normas originales de la ley de justicia y paz de 2005<sup>136</sup>.

Así las cosas, es evidente entonces que la normatividad aplicable para tasar los perjuicios de las víctimas no es otra distinta a la consagrada originariamente por la ley 975 de 2005, de conformidad con la reincorporación efectuada por la Corte Constitucional en la referida sentencia C-286 de 2014.

Ahora bien, de acuerdo con la solicitud de sentencia anticipada presentada por la Fiscalía Delegada para el asunto, debe indicarse

**de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.**

Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo, previo a la audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla, las distintas rutas de acceso a los programas de reparación integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011.

Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho a participar en el incidente de que trata el presente artículo.

Parágrafo 3°. A la audiencia de incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.

Parágrafo 4°. Si participare en el incidente del que trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación colectiva administrativa.

Parágrafo 5°. La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes al patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de conformidad con los criterios de priorización.

Artículo 24. La ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23 A, del siguiente tenor:

Artículo 23A. Reparación integral. Con el fin de asegurar a las víctimas una reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias.

En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.

<sup>136</sup> En efecto, en sentencia C-180 de marzo 27 de 2014 la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones "**las cuales en ningún caso serán tasadas**", así como "**y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar**" contenidas en el artículo 23 de la ley 1592 de 2012.

En el mismo sentido se pronunció respecto del inciso 2o del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, por medio del cual se adicionó el artículo 23 A de la ley 975 de 2005 y que en su tenor literal indica: "**En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano**".

Por su parte, en la sentencia C-286 de mayo 20 de 2014, se declaró la inexequibilidad de los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión "**y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas**" contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

necesariamente que el parágrafo del artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012, estableció lo siguiente:

*"Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro-criminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, **y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia**, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que ésta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente Ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación..."*

En este orden de ideas y, efectuada una interpretación sistemática de los preceptos normativos reseñados, se advierte que el trámite del incidente de reparación integral deviene excepcional en aquellos casos en los cuales se está ante la terminación anticipada del proceso por virtud de la sentencia anticipada, pues ésta procede en aquellos casos en los que las afectaciones de las víctimas ya han sido previamente identificadas en la sentencia en la que fueron decretados los patrones de macrocriminalidad. En tal sentido, se consignó en el inciso 5 del artículo 36 del decreto 3011 de 2013 lo siguiente:

*"Cuando la Sala de Conocimiento constate que no se han identificado las afectaciones causadas a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional, según lo dispuesto en el parágrafo 4 del presente artículo. Culinado este incidente, la Sala de Conocimiento procederá a resolver la solicitud de terminación anticipada".*

No obstante, como se anunció en acápites precedentes la actual decisión no corresponde a una sentencia anticipada en los estrictos términos de la ley 1592 de 2012, por lo tanto, y, tal como se ordenó por la Sala en sesión de febrero 3 del presente año, el incidente de reparación integral se efectuó con la intervención de las víctimas, en sesión de febrero 23 siguiente, respecto de aquellas que no habían sido objeto de reparación y que fueron acreditadas en audiencia.

Por tal razón, el pronunciamiento a realizarse versará sobre estas específicas víctimas, pues se entiende que las restantes ya fueron indemnizadas.



## Generalidades de la Reparación

Tal como se ha expresado en decisiones anteriores, por ende, con reiteración del criterio adoptado por esta Corporación<sup>137</sup>, el derecho a la reparación es una garantía inherente que acude en salvaguarda de los individuos víctimas de las consecuencias de un conflicto armado, por lo que se hace necesario la adopción de medidas de carácter particular y colectivas dirigidas a resarcir esos daños.

Respecto de dicho sujeto, catalogado como víctima<sup>138</sup>, es ante quien se ponen a disposición los mecanismos idóneos para conocer la dimensión de los perjuicios ocasionados con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para el restablecimiento de sus derechos. Así mismo, valga recordar que en los conflictos armados se considera a los individuos como medios para alcanzar los cometidos de los grupos armados, por ende, con prescindencia del imaginario moral, caso en el cual se convierte en meros instrumentos sin la posibilidad de disfrutar de la titularidad y goce de las garantías mínimas de las que son depositarios<sup>139</sup>.

Por esta razón, el derecho a un recurso justo y eficaz<sup>140</sup> resulta la garantía adecuada para satisfacer la obligación de reparación a las víctimas, pues a través de aquél se brinda a los perjudicados la oportunidad de obtener y acceder a la reparación como reflejo cierto de un concepto claro de justicia, a más de un aporte invaluable en los temas de reconciliación y perdón que perduren en el tiempo<sup>141</sup>.

En este orden de ideas, en el caso que se analiza resulta indispensable la garantía del cumplimiento del derecho a la justicia por parte del Estado en favor de las víctimas, pues sin él sería imposible la investigación y juzgamiento de las violaciones de derechos fundamentales, la identificación de los

---

<sup>137</sup>Entre otros, radicado 2006-80450, 2006-80012 y 2013-00069.

<sup>138</sup> Artículo 3 Ley 1448 de 2011.

<sup>139</sup> Entiéndase, que por el sencillo hecho de ser personas, reside en su humanidad el universo de derechos a los que puede acceder, sin importar su condición particular de vida.

<sup>140</sup> Literal B, numeral 1. Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Joinet, Louis, ONU, comisión de Derechos Humanos, 49º periodo de sesiones, Informe final revisado acerca de las cuestiones de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por Louis Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión.

<sup>141</sup> A la luz de los principios básicos citados, es claro que para poder obtener el victimario gracias de perdón por parte de las víctimas, es necesario que los perpetradores manifiesten su arrepentimiento (que puede ser público), para que en un acto íntimo (razón privada), el perjudicado pueda ceder, y proceda a perdonar.

responsables y con ello, la imposición de una pena por el comportamiento desplegado por los agresores.

Ahora bien, los conceptos descritos en precedencia están consagrados en la ley 975 de 2005, a través de los principios que rigen la jurisdicción transicional, en concreto, la reparación como punto cardinal que optimiza los derechos de las víctimas. En este sentido tenemos las medidas de carácter individual enfocadas a la: i) restitución; ii) indemnización; iii) rehabilitación; iv) satisfacción y; v) garantía de no repetición. Como se observa, el derecho a la reparación se extiende más allá de una expectativa económica como consecuencia del daño sufrido, por lo que se amplía su margen al campo público y privado de la moral.

Bajo tales perspectivas la Sala se pronunciará respecto a las medidas de reparación solicitadas y acreditadas en desarrollo de la audiencia de incidente de reparación conforme a las previsiones contenidas en las normas reseñadas en precedencia.

### **Fundamentos Probatorios del Daño**

De acuerdo con el contenido del artículo 5 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 2 de la ley 1592 de 2012, toda persona que haya padecido daños directos transitorios o permanentes, quebrantos económicos o menoscabo en sus derechos fundamentales, como consecuencia del actuar de grupos armados al margen de la ley, pueden ser consideradas víctimas<sup>142</sup>.

En tal caso, el punto de partida para declarar la existencia de un daño que sea real, concreto y no simplemente eventual o hipotético, es la demostración de un padecimiento concreto por parte de quien pretende ser reconocido como tal, cuando lo buscado es la indemnización de perjuicios, y no sólo si se persigue satisfacción en temas de verdad y justicia<sup>143</sup>. Para ello se tienen establecidas unas exigencias mínimas que deben cumplirse con el fin de reconocer las indemnizaciones solicitadas, y que corresponde resolver al

---

<sup>142</sup> Para mayor claridad e ilustración, tener en cuenta el concepto de víctima reseñado en decisión reciente emitida por esta Sala, el día 29 de septiembre de 2014, radicado No. 2006-80450, contra Guillermo Pérez Alzate y otros.

<sup>143</sup> Corte Constitucional, sentencias C-228 de 2002 y C-516 de 2007

juzgador del caso en concreto, tal como lo adujo la Corporación en radicado 34547 del 27 de abril de 2011, de la siguiente manera:

*"En otras palabras, para obtener indemnización por el perjuicio material y por los perjuicios morales objetivados debe demostrarse: a) su existencia y b) su cuantía, mientras en el de carácter moral subjetivado sólo se debe acreditar la existencia del daño, luego de lo cual, el Juez, por atribución legal, fijará el valor de la indemnización en tanto que la afectación del fuero interno de las víctimas o perjudicados impide la valoración pericial por inmiscuir sentimientos tales como tristeza, dolor o aflicción."*

Así las cosas, el fin último del reconocimiento de perjuicios, en una situación ideal, consistiría en regresar al estado inicial las circunstancias, como si el acontecimiento ocasionador del perjuicio no hubiere ocurrido, pero atendiendo a las condiciones particulares de las acciones que aquí se examinan, bastará al menos, con acercarse en el resarcimiento a la situación más próxima de aquella en que se encontraba el perjudicado, lo que no significa que se confiera indemnizaciones más allá de la realidad del daño padecido<sup>144</sup>, lo que podría llegar a configurar un enriquecimiento sin justa causa, como se ha reiterado en otras decisiones<sup>145</sup>.

Lo anterior indica que de presentarse dificultad probatoria para demostrar el daño, se podrá acudir a criterios de ponderación y flexibilización de las reglas para su apreciación, atendiendo a la especial relevancia de las consecuencias de los delitos analizados, sin que ello implique la ausencia total de fundamentación<sup>146</sup>. En tales casos, resulta pertinente acudir a los presupuestos legales para determinar los hechos notorios que no requieren de prueba<sup>147</sup>, el juramento estimatorio reglado por las normas procesales de carácter civil, las presunciones y las reglas de la experiencia<sup>148</sup>.

Como parámetro adicional se tendrá en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>149</sup>, en virtud de la cual en

<sup>144</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-197 del 20 de mayo de 1993

<sup>145</sup> Entre otros, radicado No. 2006-82222, seguido contra Edison Giraldo Paniagua, emitida el 30 de julio de 2012.

<sup>146</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 38508 de junio 6 de 2012, pág. 78. Al respecto se expuso "El criterio de flexibilidad probatoria no puede equipararse a ausencia de prueba y tratándose de ordenar pagos considerables, que eventualmente el Estado puede asumir de manera subsidiaria, los aspectos pecuniarios que se pretende sean reconocidos deben estar acreditados con suficiencia."

<sup>147</sup> Inciso 2 del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

<sup>148</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 34547 del 27 de abril de 2011.

<sup>149</sup> En la sentencia de noviembre 10 de 2004. Rad. 21726, la Sala expuso sobre la materia: "En torno a la temática planteada por el recurrente, la Corte tanto en vigencia del Decreto 2700 de 1991 como en la de la Ley 600 de 2000 tiene definido, por mayoría, que la prohibición constitucional y legal de la no reformatio in pejus, es ajena a la obligación civil indemnizatoria" En igual sentido providencias de septiembre 23 de 2003. Rad. 14003 y marzo 16 de 2005. Rad. 21595.

materia de indemnización de perjuicios se excluirán como sujetos de indemnización aquellas personas respecto de las cuales se encuentre acreditado que no sufrieron daño con ocasión de los hechos punibles objeto de este proceso, bien porque no tienen la condición de víctima o porque aún no habían nacido al momento del hecho, entre otros factores.

En todo caso, precisa la Sala sin perder del horizonte las especiales pretensiones que acompañan este proceso, y con el objetivo a generar marcos de referencia que permitan visualizar pilares de seguridad jurídica, la cuantificación de los pedimentos se procederá a liquidar en derecho y, en lo relativo a los criterios de determinación del daño, se acogerá el criterio expuesto en el radicado No. 110016000253200883612, adelantado contra de Orlando Villa Zapata y otros, en el que se expusieron claramente los requisitos a tener en cuenta en cada uno de los delitos que produzcan un daño susceptible de ser reparado, tanto en el campo del daño material como moral.

### **Medidas de Reparación Integral**

En armonía con lo indicado hasta el momento, ha de decirse que uno de los deberes del Estado es el de indemnizar a los ciudadanos que han sufrido o padecido menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales al margen de la ley; lo que sucede en forma proporcional al daño padecido y a las particularidades de cada caso. Así las cosas, la Sala adoptará las medidas correspondientes, de conformidad con el criterio asentado en las providencias C – 180 y C – 286 de 2014 de la Corte Constitucional y que para el presente asunto serán las siguientes:

PRETENSIONES								INDEMNIZACIÓN RECONOCIDA POR LA SALA						
Hecho	7	Fecha	27-11-2001	Víctima directa:	CLAUDINA MEDINA								Carpeta	1
Delito:		Homicidio en persona protegida												
Documentos allegados de la víctima directa:				Fotocopia de cédula de ciudadanía, Partida de Defunción.										
Víctima indirecta, identificación, parentesco o afinidad	Documentos Aportados			Peticiones en materia de Reparación				Daño emergente	Lucro cesante		Daño moral	Otros		
				Daño emergente	Lucro cesante		Daño moral		Otros					
					Presente	Futuro								
MÉLIDA MEDINA C.C. 48.827.610 Hija	- Cédula de Ciudadanía - Poder original - Registro civil de nacimiento - Registro de Hechos Atribuibles - Cuestionario para establecer afectaciones - Historia clínica de afectaciones que no guardan relación con el perjuicio padecido.			-	-	-	100 SMMLV	-	-	-	-	100 SMMLV	-	
									Dado que se encontró probado el parentesco con la víctima directa con el registro civil de nacimiento <sup>150</sup> , fue posible reconocer daño moral pretendido.					
MARÍA DEL SOCORRO MEDINA C.C. 1.118.290.818 Nieta	- Registro Civil de Nacimiento - Poder original - Copia cédula de ciudadanía - Cuestionario para establecer afectaciones - Declaración extra juicio.			-	\$ 116'879.121	-	50 SMMLV	-	-	\$ 24'744.004	-	50 SMMLV	-	
									Los documentos evidencian que además que la víctima indirecta acreditó parentesco <sup>151</sup> con la directa, se tiene que se demostró dependencia por parte la nieta de la víctima <sup>152</sup> , por tanto, esta Sala reconocerá el lucro cesante presente con fundamento en el SMMLV de la ocurrencia del hecho. Así mismo se reconoció daño moral.  Finalmente valga referir, que la suma reconocida en menor valor de lo pretendido atiende a que el lucro cesante presente fue tasado desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta la mayoría de edad de María del Socorro.					

PRETENSIONES								INDEMNIZACIÓN RECONOCIDA POR LA SALA	
Hecho	9	Fecha	-	Víctima directa:	WILSON HERNANDO DORADO PIAMBA y NORELLY GUAUÑA	Carpeta	1		
Delito:		Homicidio en persona protegida y secuestro simple							

<sup>150</sup> Folio 4 Carpeta No. 1.  
<sup>151</sup> Folio 15 Carpeta No. 1.  
<sup>152</sup> Esto con declaración extra juicio de un tercero que expresó bajo la gravedad de juramento la existencia de la dependencia, así como mediante escrito allegado por parte de la madre de María del Socorro, quien informa que la crianza estuvo a cargo de Claudia Medina, abuela de la reclamante.

Documentos allegados de la víctima directa:		De Norelly Guauña: Fotocopia Cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, certificado de defunción y registro civil de defunción.									
Víctima indirecta, identificación, parentesco o afinidad	Documentos Aportados	Peticiones en materia de Reparación					Daño emergente	Lucro cesante		Daño moral	Otros
		Daño emergente	Lucro cesante		Daño moral	Otros		Presente	Futuro		
LUZ MILA GUAUÑA LLANTEN C.C. 25.395.740 Hermana	-Cédula de Ciudadanía - Poder original - Registro civil de nacimiento. - Cuestionario para establecer afectaciones.	-	-	-	50 SMMLV	-	-	-	-	50 SMMLV	-
							Los documentos evidencian que la víctima indirecta acreditó parentesco <sup>153</sup> con la directa, por lo tanto, se indemnizará el daño moral subjetivado pretendido, es decir, 50 SMMLV.				
ORLANDO GUAUÑA LLANTEN C.C. 4.674.791 Hermano	- Copia cédula de ciudadanía - Poder original - Registro Civil de Nacimiento - Cuestionario para establecer afectaciones.	-	-	-	50 SMMLV	-	-	-	-	50 SMMLV	-
							Los documentos evidencian que la víctima indirecta acreditó parentesco <sup>154</sup> con la directa, por lo tanto, se indemnizará el daño moral subjetivado pretendido, es decir, 50 SMMLV.				
ANTONIO GUAUÑA LLANTEN C.C. 76.302.287 Hermano	- Copia cédula de ciudadanía - Poder original - Registro Civil de Nacimiento - Cuestionario para establecer afectaciones.	-	-	-	50 SMMLV	-	-	-	-	50 SMMLV	-
							Los documentos evidencian que la víctima indirecta acreditó parentesco <sup>155</sup> con la directa, por lo tanto, se indemnizará el daño moral subjetivado pretendido, es decir, 50 SMMLV				

<sup>153</sup> Folios 6 y 7, registro civil de nacimiento y copia de cédula de ciudadanía.  
<sup>154</sup> Folios 13 y 14, registro civil de nacimiento y copia de cédula de ciudadanía.  
<sup>155</sup> Folios 18 y 19, registro civil de nacimiento y copia de cédula de ciudadanía.

Resulta oportuno advertir que una vez cobre firmeza la presente decisión, se remitirá la actuación ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que con fundamento en lo dispuesto en la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año, realice las gestiones necesarias encaminadas al pago de la reparación integral.

Restaría añadir que el pago de las indemnizaciones tasadas en precedencia como consecuencia de los perjuicios causados a las víctimas, deberán ser satisfechos por los aquí postulados, siendo exigibles en forma solidaria al Bloque Calima y subsidiariamente al Estado colombiano<sup>156</sup>.

### **Medidas de Rehabilitación**

De conformidad con lo descrito en el artículo 47 de la ley 975 de 2005, de aplicación armónica con el artículo 135 de la ley 1448, dicha reparación consiste en el conjunto de medidas dirigidas a prestar atención médica y psicológica para el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas que, para el caso de las víctimas aquí reconocidas, se extenderán a aquellas dictadas en las decisiones con ponencia de los magistrados Léster María González Romero y Eduardo Castellanos Roso<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> Ello con sustento en lo descrito por el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, que reza lo siguiente: "*Las condenas judiciales que ordenen al Estado reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus agentes...*". Así como por lo dispuesto, por la sentencia C – 370 de 2006, de la Corte Constitucional que reza: "*como ya lo ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el cual el Estado resulte responsable – por acción o por omisión – o cuando los recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en procesos de justicia transicional hacia la paz.*"

<sup>157</sup> Sentencias de la Sala de Justicia y Paz, Tribunal de Bogotá de septiembre 4 de 2012 en el Radicado 2008-80786 seguido contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez, M. P. Dra Léster María González y de octubre 30 de 2013 proferida contra Hébert Veloza García, M. P. Eduardo Castellanos Roso.

## **Medidas de No Repetición**

Acorde con lo prescrito por el artículo 48 de la ley 975 de 2005, así como por lo dispuesto por el artículo 149 de la ley 1448 de 2011, dicho componente reparatorio consiste en la implementación de una serie de órdenes que garanticen la no ocurrencia de nuevos actos de terror y, con ello, asegurar la no reproducción de acciones similares a las que afectaron las comunidades. No obstante, en este campo de reparación se hará remisión expresa a aquellas dictadas en las sentencias contra HÉBERT VELOZA GARCÍA<sup>158</sup> y Gian Carlo Gutiérrez Suárez<sup>159</sup> que, en los casos que corresponda la obligación por cumplir por los postulados, les serán igualmente exigibles.

## **Medidas de Satisfacción**

El artículo 48 de la ley 975 de 2005, en relación con el artículo 139 de la ley 1448 de 2011, describe cómo este tipo de medidas tienden al restablecimiento principalmente de la dignidad de los afectados, con el objeto de proporcionar bienestar y mitigar el dolor así como a la implementación de acciones tendientes a difundir la verdad de la ocurrencia de los hechos. Para el efecto, se deberá remitir a las medidas ya dictadas en las sentencias matrices antes mencionadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

---

<sup>158</sup> Sentencia de octubre 30 de 2013 proferida contra Hébert Veloza García, M. P. Eduardo Castellanos Roso.

<sup>159</sup> Sentencias de septiembre 4 de 2012 en el Radicado 2008-80786 seguido contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez, M. P. Dra Léster María González



## **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR** que la presente decisión no constituye una sentencia anticipada en los términos solicitados por la Fiscalía General de la Nación a través de la Delegada, esto es, conforme a las previsiones contenidas en el parágrafo del artículo 18 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la ley 1592 de 2012, sino que la misma obedece a una sentencia parcial de carácter ordinario al interior de la jurisdicción transicional, es decir, conforme a los parámetros del artículo 24 de la ley 975 de 2005, modificado por el 25 de la ley 1592 de 2012; aclarando que este pronunciamiento comporta uno complementario a la sentencia de septiembre 4 de 2012 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, proferida contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez en el radicado 2008-80786.

**SEGUNDO: DECLARAR** que los postulados HÉBERT VELOZA GARCÍA, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO, JAIME MANUEL MESTRE SANTAMARÍA, JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS, pertenecieron a la estructura del Bloque Calima, en cada uno de los niveles expuestos en la parte motiva de la presente decisión.

**TERCERO: DECLARAR** cumplidos los requisitos de elegibilidad previstos en los casos de desmovilización colectiva en la ley 975 de 2005, respecto de los postulados enlistados en el ordinal anterior, exintegrantes del Bloque Calima. Lo anterior, sin perjuicio de que los mismos puedan mutar como consecuencia de la información que a futuro pueda aportar la Fiscalía dentro de otras investigaciones.

**CUARTO: DECLARAR** que no hay lugar a dictar sentencia por el delito de concierto para delinquir respecto de los postulados HÉBERT VELOZA GARCÍA, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO, JAIME MANUEL MESTRE SANTAMARÍA, JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA y JOSÉ ANTONIO GALEANO

LÓPEZ, en virtud a que aunque les fue imputada la referida conducta punible, su legalización y posterior condena, será objeto de pronunciamiento en el proceso priorizado adelantado por otro despacho de esta Corporación.

**QUINTO: CONDENAR** al postulado HÉBERT VELOZA GARCÍA a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses, luego de haber sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo, de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro y desplazamiento forzado de población civil, cada uno de los cuales se cometió además en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

**SEXTO: CONDENAR** al postulado ELKIN CASARRUBIA POSADA a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo, de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro y desplazamiento forzado de población civil, cada uno de los cuales se cometió además en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

**SÉPTIMO: CONDENAR** al postulado JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo, de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado de población civil, cada uno de los cuales se cometió además en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

**OCTAVO: CONDENAR** al postulado JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil seiscientos cincuenta (22.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo, de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado de población civil, aclarando que los de secuestro y homicidio se presentaron en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

**NOVENO: CONDENAR** al postulado JANIER FRANCO a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un mil seiscientos (31.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo, de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado de población civil, aclarando que los de secuestro y homicidio se presentaron en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

**DÉCIMO: CONDENAR** al postulado JAIME MANUEL MESTRE SANTAMARÍA a la pena principal de trescientos noventa (390) meses de prisión, multa de dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión del delito de homicidio en persona protegida en los términos y condiciones consignados en la parte motiva de la presente decisión.

**DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR** al postulado JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de doce mil ochocientos cincuenta (12.850) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber

sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo, de los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado, cada uno de los cuales se cometió en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

**DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR** al postulado JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA a la pena principal de cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión, multa de tres mil ciento setenta y tres punto cinco (3173.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión, en condición de concurso heterogéneo de los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado.

**DÉCIMO TERCERO: CONDENAR** al postulado JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ a la pena principal de trescientos noventa (390) meses de prisión, multa de dos mil setecientos cincuenta (2750) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses al haber sido hallado autor responsable de la comisión del delito de homicidio en persona protegida en los términos y condiciones consignados en la parte motiva de la presente decisión.

**DÉCIMO CUARTO: ABSTENERSE** de proferir decisión contra el postulado JUAN MAURICIO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

**DÉCIMO QUINTO: EXHORTAR** a la Fiscalía General de la Nación para que presente de manera clara y específica, ante la Sala que avoque el conocimiento de los procesos seguidos contra el Bloque Calima, los medios suasorios por los cuales se demuestre la responsabilidad y autoría del nombrado ARISTIZÁBAL RAMÍREZ en los punibles que le son imputados.

**DÉCIMO SEXTO: ORDENAR** la acumulación jurídica de las penas proferidas por las diferentes autoridades judiciales relacionadas en la parte

motiva de la presente decisión, respecto de JANIER FRANCO, ELKIN CASARRUBIA POSADA y JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ.

**DÉCIMO SÉPTIMO: SUSPENDER** al postulado HÉBERT VELOZA GARCÍA la ejecución de la pena principal de prisión impuesta por la conductas aquí endilgadas y, en consecuencia, **MANTENER** la pena alternativa equivalente a ocho (8) años de prisión que fuera impuesta en anterior decisión, tal como esbozo en la parte motiva de esta decisión.

**SUSPENDER** a los condenados ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS la ejecución de la pena principal de prisión, y en su lugar, imponer la pena alternativa equivalente a ocho (8) años de prisión que se les hará efectiva en el centro de reclusión en los términos y bajo las condiciones expuestas en la parte motiva.

Por último, **SUSPENDER** a los condenados JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JAIME MANUEL MESTRA SANTAMARÍA y JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ la ejecución de la pena principal de prisión y, en su lugar, imponer la pena alternativa equivalente a siete (7) años y nueve (9) meses de prisión, respecto de SERNA CARDONA y siete (7) años y seis (6) meses de prisión, respecto de los restantes, en las mismas condiciones que a los postulados del párrafo anterior.

**DÉCIMO OCTAVO:** El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas dentro de la presente sentencia ocasionará la revocatoria del beneficio concedido y, en consecuencia, deberán cumplir la sanción principal y accesoria que le fueron impuestas.

**DÉCIMO NOVENO:** A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sentenciados, deberán **SUSCRIBIR** acta de compromiso de resocialización a través de trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezcan privados de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la

ley al cual perteneció, en los términos señalados por los artículos 3, 24, 29 y 44 de la ley 975 de 2005.

**VIGÉSIMO:** Si con posterioridad a la presente sentencia y hasta el término de la condena ordinaria aquí señalada, la autoridad judicial competente determina que los postulados no entregaron, ofrecieron o denunciaron bienes adquiridos por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderán el beneficio de la pena alternativa, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012.

**VIGÉSIMO PRIMERO: CONDENAR** a los postulados HÉBERT VELOZA GARCÍA, ELKIN CASARRUBIA POSADA, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ RUPERTO GARCÍA QUIROGA, JANIER FRANCO, JAIME MANUEL MESTRE SANTAMARÍA, JOSÉ FERNANDO SERNA CARDONA, JOSÉ ANTONIO GALEANO LÓPEZ y JOSÉ ALEJANDRO MORELO PALACIOS exintegrantes del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, al pago de los daños y perjuicios materiales e inmateriales, ocasionados con los punibles que fueron objeto de sentencia dentro del presente proceso, en los montos y condiciones establecidos en la parte motiva de la providencia; de manera solidaria a los demás exintegrantes del Bloque Calima, y de manera subsidiaria al Estado colombiano.

**VIGÉSIMO SEGUNDO: ORDENAR** a la Fiscalía General de la Nación para que por intermedio de la Fiscalía Delegada que designe para el efecto, adelante las gestiones correspondientes a fin de lograr la modificación del registro civil de defunción de la víctima directa en el hecho once (11), cuyo nombre real es el de Belisario Elvira Vergara y no Belisario Elvir Sánchez como lo adujo la Fiscalía, tal como se dejó expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

**VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR** que por secretaría de la Sala se comunique la presente decisión a las autoridades correspondientes con la finalidad de enterarlas de la decisión de acumulación de penas proferida.

Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese y cúmplase

ULDI TERESA JIMÉNEZ LÓPEZ  
Magistrada

ALEXANDRA VALENCIA MOLINA  
Magistrada  
Salvamento de voto

EDUARDO CASTELLANOS ROSO  
Magistrado